

29 de febrero 2024

Español únicamente

Consejo de Derechos Humanos
55° período de sesiones

**Violaciones de los derechos humanos a la libertad de
circulación y a la nacionalidad**

Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua*

* El presente documento debe leerse junto con el informe oficial del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (A/HRC/55/27), presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 55° período de sesiones de conformidad con su resolución 52/2.

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Metodología	3
III. Marco jurídico.....	4
A. Derecho internacional	4
1. El derecho a la nacionalidad	6
2. El derecho a la libertad de circulación y el derecho de escoger libremente su residencia	11
3. El derecho a salir del país	13
4. El derecho a un documento de viaje.....	13
5. La expulsión de extranjeros	14
6. El derecho de asilo	16
B. Derecho interno	18
IV. Hallazgos	20
A. La expulsión de nacionales y extranjeros.....	20
B. La privación de la nacionalidad.....	25
C. La prohibición de entrar en su propio país	29
D. El exilio masivo.....	32
E. La prohibición de salida del propio país	41
F. La denegación de la emisión o renovación de pasaportes	43
G. Acceso a la justicia	45
H. Violaciones de derechos humanos conexas.....	46
I. Violaciones de los derechos de las niñas y los niños	52
V. Crímenes de lesa humanidad.....	55
A. Deportación	56
B. Persecución.....	58
1. Deportación	59
2. Privación arbitraria de la nacionalidad	60
3. Persecución a través del cúmulo de violaciones	60
VI. Presidente, vicepresidenta y principales instituciones del Estado	62
A. Presidencia y vicepresidencia de la República.....	62
B. Poder legislativo.....	63
C. Poder judicial.....	64
D. Consejo Supremo Electoral y alcaldías municipales	65
E. Procuraduría General de la República	65
F. Ministerio de Gobernación	66
G. Policía Nacional	67
VII. Responsabilidades.....	67
A. Responsabilidad del Estado	67
B. Responsabilidad individual.....	68
VIII. Conclusiones	69
Anexo Organigrama.....	70

I. Introducción

1. En su primer informe, el Grupo de Expertos identificó las violaciones de los derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación como un nuevo patrón de violaciones que constituía una amenaza para todas las personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, dentro y fuera de Nicaragua¹. En este periodo de investigación, el Grupo de Expertos ha continuado documentando la utilización por parte del Estado de Nicaragua de la privación arbitraria de la nacionalidad, la expulsión de nacionales y extranjeros, y las restricciones a entrar y salir del propio país, entre otras, como mecanismos de castigo o control contra las personas opositoras, o percibidas como tales, y sus familiares.
2. En el presente documento, el Grupo de Expertos determina violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en contra de personas nicaragüenses y extranjeras, en ambos casos opositoras o percibidas como tales, así como de sus familiares, incluyendo niñas y niños. Aunque las violaciones del derecho a la libertad de circulación se han sucedido desde 2018, el Grupo de Expertos ha constatado el aumento de estas en 2022 y 2023.
3. En su primer informe, el Grupo documentó la expulsión a los Estados Unidos de América, el 9 de febrero de 2023, de 222 personas opositoras o percibidas como tales y la privación arbitraria de la nacionalidad de estas 222 personas, más otras 94². Desde entonces, el Grupo ha documentado la expulsión de 40 personas nicaragüenses más y 21 personas extranjeras. Asimismo, el Grupo ha documentado múltiples violaciones del derecho a la libertad de circulación y del derecho de escoger libremente la residencia, al derecho a salir del país, y al derecho a un documento de viaje, entre otras. En muchos casos, estas violaciones causan múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la personalidad jurídica, la participación en los asuntos públicos, al trabajo, la seguridad social y otros derechos económicos y sociales, y la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y la familia, así como violaciones de los derechos de las niñas y los niños.
4. Estos actos representan el más reciente patrón de violaciones de los derechos humanos perpetrados por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo a través de agentes y órganos de los poderes del Estado, para remover cualquier tipo de oposición a su Gobierno y garantizar así su permanencia en el poder.

II. Metodología

5. El Grupo de Expertos lleva a cabo sus investigaciones aplicando metodologías y mejores prácticas establecidas por las Naciones Unidas, garantizando un enfoque centrado en las víctimas y dedicando una atención específica a las dimensiones de género de las violaciones y abusos³. El Grupo también aplica en su trabajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y “no hacer daño”.
6. El Grupo de Expertos siguió aplicando en sus investigaciones el requisito probatorio de los “motivos razonables para creer”, en consonancia con la práctica de los mecanismos de investigación establecidos por el Consejo de Derechos Humanos. Aunque este umbral es inferior al necesario para establecer la responsabilidad en un proceso penal, es suficiente para justificar el inicio de investigaciones penales.
7. Para la elaboración de este documento, el Grupo de Expertos entrevistó a 218 personas afectadas directa e indirectamente por restricciones y violaciones de los derechos a la nacionalidad y la libertad de circulación⁴, tanto a distancia como durante sus 8 visitas al

¹ A/HRC/52/63, párrs. 46 y 104 a 108; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 448 y 765 a 779.

² A/HRC/52/63, párrs. 106 y 108.

³ La metodología se detalló en el documento de sesión A/HRC/52/CRP.5, párrs. 35 a 58.

⁴ Algunos testimonios recabados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros, fueron compartidos con el

terreno, y examinó cientos de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada. El Grupo evaluó rigurosamente estas fuentes para determinar su fiabilidad.

8. El Grupo se aseguró de obtener el consentimiento informado de cada persona entrevistada antes de utilizar la información facilitada y anonimizó la información que identificaba o podía llevar a identificar a víctimas, testigos y otras fuentes cuando existían riesgos de represalias contra ellos o sus familiares. El Grupo respetó los deseos de las fuentes antes de utilizar la información facilitada. El Grupo expresa su más profunda gratitud a todas aquellas personas que relataron con valentía sus traumáticas experiencias, así como a las personas defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas, abogados y otras contrapartes por la información facilitada, a pesar de los fundados temores a represalias.

9. En las resoluciones 49/3 y 52/2, el Consejo de Derechos Humanos instó al Gobierno de Nicaragua a cooperar plenamente con el Grupo de Expertos, en particular, concediendo el acceso sin restricciones, pleno y transparente al país, y facilitando la información necesaria para el cumplimiento de su mandato. El 2 de agosto y el 22 de noviembre de 2023, el Grupo envió nuevas cartas solicitando información al presidente Ortega que quedaron sin respuesta. El Gobierno sigue negándose a relacionarse y a cooperar con el Grupo.

III. Marco jurídico

A. Derecho internacional

10. Teniendo en cuenta el componente de rendición de cuentas de su mandato, el Grupo consideró que su objeto y fin último, al determinar la base fáctica, es establecer la existencia de violaciones graves de los derechos humanos⁵. La Comisión de Derecho Internacional ha subrayado, con relación a violaciones graves de una norma imperativa del derecho internacional general, en el sentido del artículo 40 de su proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que “las violaciones graves serán normalmente sistemáticas y flagrantes”⁶. De acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional, una “violación sistemática” es aquella que “debe llevarse a cabo de manera organizada y deliberada”; asimismo, el término “flagrante” se refiere a violaciones “que equivalgan a un ataque directo y abierto contra los valores que protege la norma”⁷. La presente investigación adopta un enfoque similar, tanto respecto a violaciones graves de las normas imperativas del derecho internacional general⁸ como respecto a violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.

11. Para los fines de la presente investigación, se considera una violación grave de los derechos humanos cuando el hecho se convierte en un hecho grave por la intención del Estado de violar la norma⁹. En cuanto a las obligaciones en virtud de normas internacionales

Grupo de Expertos y utilizados para la elaboración del presente documento, con el consentimiento de las personas entrevistadas, a fin de evitar una posible revictimización.

⁵ Ver A/HRC/52/CRP.5, párrs. 13 y 14. Tanto en la práctica del sistema de las Naciones Unidas como en la del sistema regional interamericano se tiende a utilizar los términos “grave” y “serio” de forma indistinta (ver Takhmina Karimova, “What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’?: An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty”, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Academy Briefing No. 6, agosto de 2014).

⁶ Ver Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones (23 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001)”, A/56/10, pág. 308 (comentario número 8 al artículo 40 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos).

⁷ *Ibid.*

⁸ Ver A/HRC/52/CRP.5, párrs. 1215 a 1222.

⁹ Ver Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones”, A/56/10, pág. 308. Respecto al antiguo artículo 19 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional, ver la opinión de Alain Pellet, en: “Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!”, 10 EJIL, 1999, págs. 425 a 434.

convencionales en materia de derechos humanos, los órganos de tratado cuyo mandato prevé un umbral específico de violaciones graves o sistemáticas¹⁰, en la medida que han hecho uso de sus facultades¹¹, también han destacado la intención del Estado de cometer violaciones graves de sus obligaciones convencionales¹².

12. La interpretación de una “violación sistemática” como “organizada y deliberada”, tal y como lo adopta la presente investigación, está en consonancia con los órganos de tratados cuyo mandato cuenta con un umbral específico de violaciones graves o sistemáticas. Los órganos de tratados han entendido que “el término ‘sistemático’ se refiere a la naturaleza organizada de los actos que conducen a violaciones repetidas y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria”¹³. Asimismo, la presente investigación hace suyo el enfoque más específico del Comité contra la Tortura, que considera que “hay práctica sistemática (de la tortura) cuando parece que los casos (de tortura) notificados no son fortuitos ni se han producido en un solo lugar o en un momento concreto, y se observan en ellos elementos de hábito, generalidad y finalidad determinada por lo menos en una parte importante del territorio del país”¹⁴.

13. Otro factor, que la presente investigación ha tomado en cuenta para establecer la existencia o no de violaciones graves de los derechos humanos, es el alcance y el número de violaciones individuales¹⁵. Los órganos de tratados han recurrido a un criterio cuantitativo similar para determinar el umbral de violaciones graves de los derechos humanos¹⁶. Parecido al caso del elemento de contexto “sistemático o generalizado” de crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional penal¹⁷, el criterio cuantitativo para determinar violaciones graves de los derechos humanos no es objetivamente definible, como lo demuestra el hecho de que ni los instrumentos internacionales, ni la práctica de los órganos de tratados u otro ente competente en materia de derechos humanos, han establecido umbrales precisos¹⁸. Por ello, en consonancia con la práctica de los órganos de tratados cuyo mandato prevé un umbral específico de violaciones graves, la presente investigación ha tomado en cuenta el efecto agravante de la escala de violaciones en conjunto con la prevalencia, la naturaleza, la relación entre sí y el impacto de las violaciones determinadas¹⁹, lo último, tomando en cuenta tanto el tamaño del grupo atacado como las consecuencias para las víctimas²⁰.

¹⁰ Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 20(1); Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 6(1).

¹¹ Hasta la fecha, no ha sido el caso del Comité contra la Desaparición Forzada.

¹² Ver, por ejemplo, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo”, CRPD/C/ESP/IR/1, párr. 79.

¹³ Ver Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Investigación sobre Hungría realizada por el Comité en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención”, CRPD/C/HUN/IR/1, párr. 108; Comité sobre los Derechos del Niño, “Investigación relacionada con Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones”, CRC/C/CHL/IR/1, párr. 112; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Inquiry Concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under Article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, CEDAW/C/OP.8/GBR/1, párr. 80.

¹⁴ Comité contra la Tortura, “Informe del Comité contra la Tortura”, A/48/44/Add.1, párr. 39.

¹⁵ Ver Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones”, A/56/10, pág. 308.

¹⁶ Ver, en particular, CRC/C/CHL/IR/1, párr. 111; y CRPD/C/ESP/IR/1, párr. 79.

¹⁷ A/HRC/52/CRP.5, párr. 973.

¹⁸ De hecho, el uso de calificativos en lugar de un umbral numérico rígido constituye una práctica común en el derecho internacional, como señala Jean Salmon en: “Les obligations quantitatives et l’illicéité”, en Laurence Boisson de Chazournes y Vera Gowlland-Debbas (eds), *The International Legal System in Quest of Equity and Universality – Liber Amicorum Georges Abi-Saab*, Brill | Nijhof, 2001, págs. 305 a 325.

¹⁹ Ver CRC/C/CHL/IR/1, párr. 111; CRPD/C/ESP/IR/1, párr. 79.

²⁰ Ver Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones”, A/56/10, pág. 308.

14. El enfoque que el Grupo de Expertos da a su mandato en materia del derecho internacional de los derechos humanos está en consonancia con otras investigaciones internacionales mandatadas por el Consejo de Derechos Humanos con un mandato inicial similar en su amplitud *ratione materiae* al del Grupo de Expertos²¹, como era el caso de la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en Eritrea²². La Comisión, inicialmente mandatada de indagar “sobre todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en Eritrea”, determinó el carácter sistemático, generalizado y flagrante de las violaciones de los derechos humanos, partiendo de “cuadros de violaciones sistemáticas de los derechos humanos” considerando “varios factores, entre ellos, la alta frecuencia con que se producen las violaciones de los derechos humanos documentadas y corroboradas durante la investigación, el número de víctimas y la repetición de la violación durante un período determinado; el tipo de derechos vulnerados, y el carácter sistémico de estas violaciones, lo que significa que no pueden ser el resultado de actos aleatorios y aislados de las autoridades”²³.

15. El artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua establece las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos que ha asumido voluntariamente el Estado de Nicaragua al ratificar los tratados y convenios que recoge su misma Constitución²⁴. Para esta investigación, el Grupo de Expertos siguió evaluando los hechos a la luz del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, y, en su caso, el derecho internacional consuetudinario en materia penal. El Grupo también consideró las garantías de derechos humanos en el derecho interno y otros aspectos pertinentes de la legislación nicaragüense. El marco legal completo aplicado por el Grupo de Expertos en sus investigaciones se encuentra en el documento de sesión que acompañó su primer informe²⁵. A continuación, se detallan normas y estándares del marco legal que son especialmente pertinentes para analizar las violaciones identificadas en el presente documento.

1. El derecho a la nacionalidad

16. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental²⁶. Si bien los Estados están facultados a decidir quiénes son sus nacionales, dicha facultad no es absoluta y está limitada por sus obligaciones internacionales²⁷. En particular, debido a la evolución en el campo del derecho internacional de los derechos humanos²⁸, en cuestiones de nacionalidad deben tenerse en cuenta tanto los intereses legítimos de los Estados como los de los individuos²⁹. Ese enfoque ha sido reiterado en la práctica de los tribunales regionales competentes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva sobre las enmiendas propuestas a las

²¹ A/HRC/52/CRP.5, párr. 14.

²² Comparar la resolución 26/24 del Consejo de Derechos Humanos que establece un mandato de investigación sobre “**todas** las presuntas violaciones de los derechos humanos en Eritrea que se exponen en los informes de la Relatora Especial” (párr. 8), con la resolución 29/18 que prorroga el mandato “para que indague sobre las **violaciones sistemáticas, generalizadas y graves** de los derechos humanos cometidas en Eritrea” (párr. 10) (énfasis agregados).

²³ “Informe de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea”, A/HRC/29/42, párr. 23.

²⁴ A/HRC/52/CRP.5, párr. 63.

²⁵ *Ibid.*, párrs. 59 a 74.

²⁶ El marco jurídico internacional sobre el derecho a la nacionalidad fue desarrollado en el documento de sesión que acompañó al primer informe del Grupo de Expertos, A/HRC/52/CRP.5, párr. 481 y ss.

²⁷ Ver Comisión de Derecho Internacional, “Informe sobre la labor realizada en su 51° período de sesiones (3 de mayo a 23 de julio de 1999)”, A/54/10, párr. 48 (texto de los proyectos de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, preámbulo, comentario núm. 3, pág. 26).

²⁸ *Ibid.*, párr. 48 (texto de los proyectos de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, preámbulo, comentario núm. 5, pág. 27).

²⁹ *Ibid.*, párr. 48 (texto de los proyectos de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, párrafo 3 del preámbulo, pág. 24). Ver también UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, HCR/GS/20/05, mayo de 2020, párr. 11.

disposiciones de la Constitución de Costa Rica sobre la naturalización, indicó que “[l]a nacionalidad [...] debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. [...] En efecto, de la perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que, junto al de ser competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona humana”³⁰. La Corte Interamericana concluyó que las facultades de regulación estatal relacionadas con la nacionalidad “están limitadas [...] por su obligación de garantizar la plena protección de los derechos humanos”³¹.

17. Tanto la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/45 como el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 7/10, 10/13, 13/2, 20/5, 26/14 y 32/5, todas aprobadas por consenso, han reafirmado que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. El derecho a la nacionalidad tiene tres dimensiones: el derecho a adquirir una nacionalidad, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad y el derecho a cambiar de nacionalidad. El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos³² y, a nivel regional, el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948³³ y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 reconocen estas tres dimensiones. Asimismo, el párrafo 3 del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad. El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que el niño inmediatamente después de su nacimiento tendrá derecho a una nacionalidad. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que se otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Por su parte, el artículo 5(d)(iii) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que los Estados se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial y a garantizar el derecho a la nacionalidad. Finalmente, el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad de todas las personas con discapacidad. Estos instrumentos internacionales han sido ratificados y reconocidos por Nicaragua tanto en su Constitución Política como en su normativa interna.

18. La Asamblea General ha reafirmado que la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad se considera un principio fundamental del derecho internacional³⁴. El artículo 8 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 establece que: “Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida”³⁵. El artículo 9 dispone que: “los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”. Esta Convención fue ratificada por Nicaragua a través del Decreto

³⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización*, Opinión Consultativa No. OC-4/84, solicitada por el gobierno de Costa Rica, Serie A núm. 4, 19 de enero de 1984, párrs. 32 y 33.

³¹ *Ibid.*, párr. 38.

³² Artículo 15: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.

³³ Artículo 19: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.

³⁴ A/RES/50/152, párr. 16.

³⁵ Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961; ver también UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 15.

núm. 7156 de la Asamblea Nacional, aprobado el 14 de mayo de 2013³⁶. A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la apatridia ocasiona una condición de extrema vulnerabilidad³⁷.

19. Para cumplir con el artículo 8(1) de la Convención de 1961, el Estado debe hacer una evaluación previa de sus acciones, con el fin de establecer si aquellas se encuentran dentro de las excepciones establecidas en los artículos 8(2) y 8(3) de dicha Convención. Si no se encuentran allí estipuladas, estaría desconociendo sus obligaciones internacionales en la materia y dejando en condición de apatridia a sus nacionales³⁸.

20. La prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad abarca también situaciones en las que no hay un acto formal de un Estado, pero en las que la práctica de sus autoridades competentes muestra claramente que han dejado de considerar a un individuo (o grupo) concreto como nacional (o nacionales). Este es el caso cuando las autoridades se niegan persistentemente a expedir o renovar documentos sin dar una explicación o justificación, y cuando hay confiscación de documentos de identidad y/o expulsión del territorio junto con una declaración de las autoridades de que una persona no es considerada nacional³⁹.

21. Si bien la decisión de privar de la nacionalidad podría considerarse una decisión interna del Estado, las consecuencias, de esta acción, afectan de manera considerable los derechos humanos y dejan a las personas en condición de apatridia⁴⁰ y en una posición de notoria vulnerabilidad. Por lo tanto, se hace necesario que el derecho internacional, en cabeza de otros países, intervenga para evitar que se produzcan dichas situaciones o, en caso de producirse las mismas, brindar soluciones que impliquen la protección a dichas personas⁴¹, naturalizándolas o garantizando sus derechos mientras se regula su situación migratoria. Así, el derecho internacional de los derechos humanos complementa lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y en algunas ocasiones puede proporcionar una mayor garantía de estándar de trato o de derechos que no se encuentran en absoluto en la Convención. Por ejemplo, para las personas apátridas, el derecho a entrar en su propio país, consagrado en el artículo 12(4) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es de la mayor importancia, pues va más allá del derecho de entrada, ya que garantiza el vínculo que se mantiene con ese territorio⁴².

22. El párrafo 2 del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos impone la condición de que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad. A nivel regional, el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone una condición similar. La importancia de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico político que liga una persona a un Estado determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad

³⁶ *La Gaceta* núm. 91, 20 de mayo de 2013, disponible en: <https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-n-91-lunes-20-mayo-de-2013/>.

³⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*, Sentencia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de septiembre de 2005, Serie C núm. 130, párr. 142; y *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*, Opinión Consultiva OC-21/14, 19 de agosto de 2014, solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Serie A núm. 21, párr. 94.

³⁸ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 44.

³⁹ *Ibid.*, párr. 9.

⁴⁰ Barbara Von Rütte, *The Human Right to Citizenship: Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, Brill/Nijhoff, 2022, págs. 41 y 42.

⁴¹ Organización de los Estados Americanos, “Informe del Comité Jurídico Interamericano: Guía sobre protección de personas apátridas”, OEA/Ser. Q 3, 12 de agosto de 2015, CJI/doc.488/15 rev.1, 7 de agosto de 2015.

⁴² ACNUR, “Manual sobre la protección de las personas apátridas – En virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954”, 2014, párr. 140 y ss.

política. Como tal, la nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos⁴³.

23. La privación arbitraria de la nacionalidad afecta el goce efectivo de los derechos humanos, no sólo por la interdependencia con otros derechos sino porque las personas pueden verse sometidas a restricciones legales que de otro modo no aplicarían, haciéndolas más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos ya que no les permite el acceso a las entidades del Estado responsables de garantizar sus derechos⁴⁴. Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos ha manifestado que el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de un individuo podría verse menoscabado a raíz de la privación arbitraria de la nacionalidad⁴⁵. Igualmente, ha expresado preocupación porque las personas privadas arbitrariamente de la nacionalidad puedan verse afectadas por la pobreza, la exclusión social y la incapacidad legal⁴⁶.

24. La privación de la nacionalidad que causa una situación de apatridia es, por lo general, arbitraria, a no ser que corresponda a un propósito legítimo y sea acorde con el principio de proporcionalidad. El Comité de Derechos Humanos ha aclarado el significado del concepto “arbitrario” en el contexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su observación general núm. 27 sobre la libertad de circulación (artículo 12), el Comité indica que la referencia al concepto de arbitrariedad, en este contexto, tiene por objeto subrayar que se aplica a toda actuación del Estado, legislativa, administrativa o judicial, y garantiza que incluso las injerencias previstas por la ley están en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y sean, en todo caso, razonables en las circunstancias particulares de que se tratase⁴⁷.

25. Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas ha señalado que los Estados deben observar unas normas procesales mínimas para que las decisiones relativas a la adquisición, privación o cambio de nacionalidad no contengan ningún elemento de arbitrariedad. En particular, los Estados deben velar por que las personas cuyo derecho a una nacionalidad se haya conculcado puedan ejercer un recurso efectivo⁴⁸. Así, aunque el derecho internacional autoriza a privar de la nacionalidad en ciertas circunstancias, esa privación ha de ser conforme a la legislación nacional y ha de estar en consonancia con unas normas procesales y sustantivas específicas, en particular el principio de proporcionalidad⁴⁹. Las medidas que lleven a la privación de la nacionalidad han de responder a una finalidad legítima que sea compatible con el derecho internacional y, en particular, con los objetivos del derecho internacional relativo a los derechos humanos⁵⁰. La injerencia en el derecho a la vida privada

⁴³ Corte Interamericana de Derechos H, *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*, Sentencia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 137.

⁴⁴ Barbara Von Rütte, *The Human Right to Citizenship: Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, págs. 41 y 42.

⁴⁵ A/HRC/RES/7/10, párr. 6; A/HRC/RES/10/13, párr.6; A/HRC/RES/13/2, párr.6; A/HRC/RES/20/5, párr.6; A/HRC/RES/26/14, párr.6; A/HRC/RES/32/5, párr. 7.

⁴⁶ Consejo de Derechos Humanos, Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre su décimo período de sesiones, A/HRC/10/29, 9 de noviembre de 2009, párrs. 6-7.

⁴⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), sobre la libertad de circulación (artículo 12), CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, párr. 21.

⁴⁸ Informe del Secretario General, “Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad”, A/HRC/13/34, párrs. 63 y 64.

⁴⁹ Barbara Von Rütte, *The Human Right to Citizenship: Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, pág. 241. De acuerdo con esta autora, el concepto de arbitrariedad está estrechamente vinculado al principio de proporcionalidad. Implica los mismos estándares de razonabilidad, eficacia, necesidad y equilibrio que también son inherentes al principio de proporcionalidad. Sin embargo, ambas normas no son congruentes. En principio, la norma de no arbitrariedad implica un umbral más alto que el de proporcionalidad. Si una medida es desproporcionada, no tiene por qué ser también arbitraria. Una medida es desproporcionada sin ser arbitraria en el sentido de que es injusta, irrazonable o tiránica. Por el contrario, si una medida se considera arbitraria, siempre entrañará un elemento de desproporción.

⁵⁰ A/HRC/13/34, párr. 25.

y familiar debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar si la retirada de la nacionalidad constituye una medida proporcional para alcanzar el objetivo legítimo del Estado⁵¹.

26. En este sentido, el derecho a la nacionalidad conlleva la obligación estatal de dotar de un mínimo de protección jurídica a las personas contra su privación. Por ello, los Estados tienen la obligación de evaluar, en cada caso concreto, el riesgo de apatridia de una persona, previo a ejecutar procedimientos de privación de la nacionalidad⁵². Para que los procedimientos de privación de nacionalidad sean compatibles con las obligaciones de los Estados, estos deben responder a un fin legítimo del Estado, ser proporcionales al fin que se busca alcanzar y nunca pueden estar fundados en razones discriminatorias. Los procedimientos de privación arbitraria de nacionalidad que no cumplan con estas condiciones están prohibidos y son contrarios a lo previsto por el derecho internacional de los derechos humanos⁵³.

27. La privación de la nacionalidad debe ajustarse a una ley que prevea un juicio justo⁵⁴; es decir debe estar establecida en la legislación, la cual debe garantizar que toda persona que se vea privada de la nacionalidad tenga derecho a una audiencia justa ante un tribunal u organismo independiente y a un recurso efectivo, como establecido en los artículos 14(1) y 2(3)(a), respectivamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ley de privación de la nacionalidad debe estar en vigor en el momento en que el individuo comete el acto u omisión que da lugar a la privación, de conformidad con el principio general de que una persona no puede ser juzgada por una conducta que no constituya delito en el momento en que ésta se produjo. Mientras se realizan los procedimientos judiciales, las personas deben mantener su nacionalidad y seguir garantizados sus derechos conexos⁵⁵.

28. La privación de la nacionalidad es arbitraria cuando no se respetan las garantías procesales. Las decisiones de los Estados que vulneren el derecho de una persona a una nacionalidad están sujetas a la protección del debido proceso como cuestión de derecho internacional. El contenido mínimo del requisito del debido proceso en este contexto es que una persona pueda comprender las razones por las que se le ha retirado la nacionalidad y tenga acceso a vías legales y/o administrativas a través de las cuales pueda impugnar la retirada de la nacionalidad. Las decisiones del Estado relativas a la adquisición, conservación o renuncia de la nacionalidad deben emitirse por escrito y estar abiertas a una revisión administrativa y judicial efectiva⁵⁶.

29. Al respecto, el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad señala que debe garantizarse el acceso a la justicia en las decisiones que afectan los derechos de los extranjeros y los apátridas, así como en toda decisión sobre la privación de la nacionalidad⁵⁷. Sin un acceso efectivo a la justicia, las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad no pueden obtener reparación y resarcimiento por las eventuales violaciones de los derechos humanos sufridas.

30. Cuando un Estado pretende privar a una persona de su nacionalidad *in absentia*, es poco probable que la persona afectada por tal privación tenga acceso práctico o efectivo a una audiencia imparcial, por lo que la privación de la nacionalidad *in absentia*, debe evitarse. Si, a pesar de todo, un Estado pretende privar a una persona de su nacionalidad *in absentia*,

⁵¹ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 123.

⁵² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución No. 2/23, Resolución sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia, 4 de diciembre de 2023, párr. 22.

⁵³ *Ibid.*, párr. 24.

⁵⁴ Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, art. 8(4).

⁵⁵ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párrs. 73, 74 y 93.

⁵⁶ *Ibid.*, párrs. 98 a 100 y 123.

⁵⁷ A/HRC/13/34, párrs. 43 y 44.

deberá demostrar que esta medida es estrictamente necesaria para evitar riesgos para la seguridad nacional y probar que es proporcionada a los objetivos legítimos del Estado⁵⁸.

31. Tanto la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/45 como el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 7/10, 10/13, 13/2, 20/5, 26/14 y 32/5 consideran que la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, nacionales, étnicos, religiosos, políticos o de género es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales⁵⁹. A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: “La pérdida de la nacionalidad como sanción por actos políticos ha sido una muestra de intolerancia extraña en la legislación y práctica del hemisferio, y ha constituido una grave regresión”⁶⁰.

32. Según el artículo 9 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, la privación de la nacionalidad no debe basarse en una conducta que sea incompatible con la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados con las opiniones políticas de una persona, en consonancia con el concepto de “motivos políticos”. En ningún caso debe utilizarse la privación de la nacionalidad como medio para deslegitimar puntos de vista políticos diferentes a los del gobierno de turno o para deslegitimar a grupos que sostienen determinadas opiniones políticas⁶¹.

33. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha indicado expresamente que “un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente a una persona el regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad o de expulsarla a un tercer país”⁶². A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado de “grave violación al derecho de residencia y tránsito, y al derecho a la nacionalidad, la pérdida de esta última por el sólo hecho de haber dejado el territorio nacional de forma irregular”⁶³.

2. El derecho a la libertad de circulación y el derecho de escoger libremente su residencia

34. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan a toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado el derecho a la libertad de circulación y a escoger libremente en él su residencia (párrafo 1 de los artículos 13 y 12, respectivamente). A nivel regional, el párrafo 1 del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el derecho de circulación y de residencia.

35. El Comité de Derechos Humanos ha considerado la libertad de circulación como una “condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”⁶⁴. La libertad de circulación consiste en el derecho de desplazarse sin dificultades por el territorio de un país en el cual la persona se encuentra. Por su parte, el derecho a salir del país es una manifestación de este derecho en el ámbito internacional y está también consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (párrafo 2 de los artículos 13, 12 y 22, respectivamente). Estos instrumentos también reconocen el derecho de toda persona a entrar en su propio país (artículos 13(2), 12(4) y 22(5), respectivamente). La Declaración Universal, además, prohíbe el destierro arbitrario (artículo 9).

⁵⁸ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 104.

⁵⁹ E/CN.4/RES/2005/45, párr. 2; A/HRC/RES/7/10, párr. 2; A/HRC/RES/10/13, párr. 2; A/HRC/RES/13/2, párr. 2; A/HRC/RES/20/5, párr. 2; A/HRC/RES/26/14, párr. 2; y A/HRC/RES/32/5, párr. 2.

⁶⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1, Doc. 18, 8 de mayo 1985, capítulo VII, párr. 2.

⁶¹ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 78.

⁶² Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), párr. 21.

⁶³ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La situación de los derechos humanos en Cuba: Séptimo Informe”, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc.29 rev. 1, 4 de octubre 1983, párr. 42.

⁶⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), párr. 1.

36. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos admiten restricciones al derecho a la libertad de circulación y de residencia, siempre y cuando estén previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceras personas (artículos 12(3) y 22(3), respectivamente). En su observación general núm. 27, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que: “las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho” y “[l]as leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación”⁶⁵. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; es decir, deben ser necesarias a fin de cumplir una función protectora. Este principio no solo debe aplicarse en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar que todo procedimiento relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de las medidas restrictivas⁶⁶.

37. El Comité de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de toda persona a entrar en su propio país está íntimamente relacionado con vínculos especiales que esa persona tiene con ese país. También ha indicado que este derecho: “[s]upone el derecho a permanecer en el propio país. No faculta solamente a regresar después de haber salido del país, sino que también puede permitir a la persona entrar por primera vez en el país si ha nacido fuera de él. [...] Implica también la prohibición de traslados forzados de población o de expulsiones en masa a otros países”⁶⁷. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho absoluto de los nacionales a entrar y permanecer en su país de nacionalidad (artículo 22(5))⁶⁸.

38. En su jurisprudencia, el Comité de Derechos Humanos ha reconocido el exilio de una persona, incluso en relación con hechos que no pueden ser imputados al Estado, sino a actores no estatales, como violación del derecho de permanecer en, regresar a, o residir en su propio país⁶⁹. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado violatorias de los derechos a la libertad de circulación y residencia, las amenazas contra una persona detenida y puesta en libertad, de hacerla desaparecer si regresaba a su hogar, las que llevaron a ésta a abandonar su lugar de origen⁷⁰. La Comisión Interamericana también ha considerado que la tentativa de asesinato que dejó a la víctima con heridas graves, seguida de un cuadro de vigilancia e intimidación, la habían obligado a abandonar el país para evitar graves peligros contra su vida y su integridad física y moral, vulnerando su derecho de residencia⁷¹.

39. En cuanto a los extranjeros, el Comité de Derechos Humanos ha clarificado que: “Toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado disfruta, dentro de ese territorio, del derecho de desplazarse libremente y de escoger su lugar de residencia. [...] La cuestión de si un extranjero se encuentra ‘legalmente’ dentro del territorio de un Estado es una cuestión regida por el derecho interno, que puede someter a restricciones la entrada de un extranjero al territorio de un Estado, siempre que se adecuen a las obligaciones internacionales de ese Estado”⁷².

⁶⁵ *Ibid.*, párr. 13.

⁶⁶ *Ibid.*, párrs. 13 a 15.

⁶⁷ *Ibid.*, párr. 19.

⁶⁸ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “si hay un derecho que, en principio, es absoluto, es el derecho a vivir en la patria, de tal modo incorporado al ser humano que la doctrina lo llama ‘atributo de la personalidad’” (ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1, Doc. 18, 8 de mayo de 1985, Capítulo VI, párrs. 5).

⁶⁹ Comité de Derechos Humanos, Comunicación núm. 859/1999, dictamen, CCPR/C/74/D/859/1999, 15 de abril de 2002, párr. 7.4.

⁷⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe No. 5/94: Caso 10.574 – El Salvador”, 1 de febrero de 1994, conclusiones, párrs. 1 y 3.

⁷¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 29/96: Caso 11303 – Chile”, 16 de octubre de 1996, párr. 97.

⁷² Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), párr. 4.

40. Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no reconoce a los extranjeros un derecho a entrar en el territorio de un Estado Parte ni de residir en él, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que, en determinadas circunstancias, el extranjero puede acudir a la protección del Pacto, incluso con respecto a cuestiones de ingreso o residencia, por ejemplo cuando se plantean consideraciones de no discriminación, de prohibición de trato inhumano y de respeto de la vida de la familia⁷³. También el Comité de Derechos Humanos ha establecido que la exclusión de un cónyuge del país de nacionalidad de su pareja puede considerarse una injerencia en la familia, en el marco del artículo 17 del Pacto⁷⁴. Esto también se aplica a otros miembros de la familia de un nacional⁷⁵.

41. Con respecto al derecho a entrar en su propio país, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de “propio país” es más amplio que el de “país de su nacionalidad”, porque no se limita únicamente a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización, sino que comprende los vínculos especiales o pretensiones en relación con un país determinado, por lo que no puede ser considerado un simple extranjero⁷⁶. Por su parte, a nivel regional, frente al derecho de un extranjero a mantener residencia en un país que no es el suyo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, aunque el Estado tiene el derecho y el deber de mantener el orden público a través del control migratorio, el derecho que tiene el Estado a la expulsión de extranjeros debe equilibrarse en relación con el perjuicio que se puede causar a los derechos de las personas involucradas en el caso particular⁷⁷.

3. El derecho a salir del país

42. El derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio, está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafo 2 de los artículos 13 y 12, respectivamente). A nivel regional, el párrafo 2 del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Las restricciones a este derecho están regidas por los principios establecidos en el párrafo 3 del artículo 12 del Pacto y del artículo 22 de la Convención Americana, y son los mismos aplicables a la libertad de circulación y de residencia.

43. En su observación general núm. 27, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que: “la libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica⁷⁸”. Asimismo, el Comité ha establecido que una restricción no puede ser discriminatoria.

44. El derecho a salir del país se ve afectado no solo por las restricciones y prohibiciones impuestas por las autoridades, sino también por procedimientos burocráticos innecesarios o inaccesibles. El Comité de Derechos Humanos ha identificado algunos de estos: la obligación de solicitar formularios especiales para conseguir los documentos oficiales de solicitud de pasaporte; demoras injustificadas en la expedición de los documentos de viaje; el

⁷³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 15 (1986), sobre la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, HRI/GEN/1/Rev.7, párr. 5.

⁷⁴ Comité de Derechos Humanos, Communication No. 35/1978, CCPR/C/12/D/35/1978, 9 de abril de 1981.

⁷⁵ “En cuanto al término “familia”, los objetivos del Pacto exigen que, a los efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate.” (ver Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 16 (1988), sobre el derecho a la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev.7, párr. 5).

⁷⁶ Comité de Derechos Humanos observación general núm. 27 (1999), párr. 20.

⁷⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Report on the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee Determination System”, OEA/Ser.L/II.106 Doc. 40 rev., 28 de febrero de 2000, párr. 166.

⁷⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), párr. 8.

hostigamiento de los solicitantes, por ejemplo, mediante intimidación física, detención, pérdida del empleo o expulsión de los hijos de la escuela o la universidad; y la negativa a expedir un pasaporte so pretexto de que el solicitante perjudica el buen nombre del país⁷⁹.

4. El derecho a un documento de viaje

45. El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, no se agota únicamente por el hecho mismo de salir del país, sino que es un derecho amplio que comprende el derecho a viajar a cualquier país que esté dispuesto a permitir el ingreso del viajero. El derecho a tener un pasaporte, u otro documento de viaje, es una consecuencia de éste. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que: “A fin de que la persona pueda disfrutar de los derechos garantizados en el párrafo 2 del artículo 12, se imponen obligaciones tanto al Estado de residencia como al Estado de nacionalidad. Como para los viajes internacionales normalmente es necesario contar con documentos adecuados, en particular un pasaporte, el derecho a salir del Estado debe incluir el derecho a obtener los documentos de viaje necesarios. La emisión del pasaporte corresponde normalmente al Estado de la nacionalidad de la persona. La negativa de un Estado a emitir un pasaporte o prorrogar su validez a un nacional que reside en el extranjero puede privar a esa persona del derecho a salir del país de residencia y de viajar a otra parte”⁸⁰.

46. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a la misma conclusión al afirmar que: “la denegatoria del pasaporte de forma injustificada e ilegal a una persona es, en cierta forma, imponerle un *capitis deminutio*, desposeerlo del documento que hace constar su nacionalidad, impedirle viajar fuera de su patria, obligarle a que, por fuerza de esta circunstancia, se mantenga dentro del país y sometido a las autoridades que lo constriñen a ello, y es por tanto violar [...] el art. 13 de la Declaración Universal”⁸¹.

47. En muchos casos, las personas refugiadas carecen de pasaporte puesto que, como personas que corren riesgo de persecución en su país, no gozan de la protección del Estado que representa este documento. Por tanto, el artículo 28 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado establece la obligación del país de refugio de expedir “a los refugiados que se encuentran legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera del territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional”. Además, dispone que: “[l]os documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo”. No obstante, en su jurisprudencia, el Comité de Derechos Humanos ha aclarado que la posesión de un documento de esta naturaleza no exime al Estado de nacionalidad de su obligación de otorgar un pasaporte a su nacional en el exilio⁸².

5. La expulsión de extranjeros

48. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 13) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22(6)) reconocen el derecho del extranjero que se encuentra legalmente en el territorio de un Estado a no ser expulsado sin base legal y sin debido proceso⁸³. El Pacto establece dos garantías adicionales: el derecho a ser oído y el derecho a solicitar la revisión de la decisión y a ser representado ante la instancia que revise la misma. Ambas garantías están condicionadas a la ausencia de “razones imperiosas de seguridad nacional”. La Convención Americana, además, prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros (artículo 22(9)).

⁷⁹ *Ibid.*, párr. 17.

⁸⁰ *Ibid.*, párr. 9.

⁸¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Resolución No.18/83: Caso 2711 – Uruguay”, 30 de junio de 1983, *Considerando*, párr. 4.

⁸² Comité de Derechos Humanos, Communication No. 77/1980, CCPR/C/18/D/77/1980, 31 de marzo de 1983, párrs. 6(1), 8(3) y 9.

⁸³ Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 66º período de sesiones (5 de mayo a 6 de junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2014)”, A/69/10, pág. 30.

49. La Comisión de Derecho Internacional, en el texto del proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros⁸⁴, estableció que resulta determinante a los efectos de la definición de la expulsión, que el extranjero en cuestión sea compelido a abandonar el territorio de un Estado a causa de un acto jurídico o de un comportamiento – activo o pasivo – atribuible a ese Estado. Además, para que se trate de una expulsión en virtud de un comportamiento –es decir sin que se adopte una decisión formal–, es esencial que quede establecida la intención del Estado en cuestión de provocar, mediante ese comportamiento, la salida del extranjero de su territorio⁸⁵.

50. En su observación general núm. 15 sobre la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, el Comité de Derechos Humanos estableció que: “al permitir solamente las expulsiones ‘en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley’, [el] objetivo [del artículo 13] es claramente impedir las expulsiones arbitrarias”⁸⁶. Por otra parte, el Comité ha indicado que el artículo 13 del Pacto “otorga a cada extranjero el derecho a que se adopte una decisión en su propio caso y, por lo tanto, el artículo 13 no se cumple con leyes o decisiones que dispongan expulsiones colectivas o en masa”⁸⁷. El Comité ha explicado que este entendimiento “queda confirmado por otras disposiciones relativas al derecho a aducir argumentos contra la expulsión y a que la decisión sea sometida a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas por ella, y a hacerse representar ante ellas”⁸⁸. Según el Comité, “se deben dar a los extranjeros plenas facilidades para entablar recursos en contra de la expulsión de manera que ese derecho sea efectivo en todas las circunstancias de su caso. Los principios del artículo 13 relativos a la apelación de la expulsión y al derecho a la revisión del caso por la autoridad competente sólo pueden dejar de aplicarse por ‘razones imperiosas de seguridad nacional’. En la aplicación del artículo 13 no se puede discriminar entre las diferentes categorías de extranjeros”⁸⁹.

51. Existe una condición fundamental a la que está sujeto el ejercicio por un Estado de su derecho de expulsar a extranjeros de su territorio. La condición es la adopción por el Estado de una resolución en ese sentido conforme a la ley. La exigencia de que la adopción de una resolución de expulsión se haga conforme a la ley tiene, ante todo, el efecto de prohibir que un Estado tenga comportamientos destinados a compeler a un extranjero a abandonar su territorio sin notificarle ninguna resolución formal en ese sentido⁹⁰.

52. El derecho a no ser expulsado sin base legal y sin debido proceso solo protege a los extranjeros que se encuentran lícitamente en el territorio de un Estado Parte. En su observación general núm. 15, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que la cuestión de la legalidad de la situación migratoria de un extranjero depende de las normas del derecho interno relativo a las exigencias en materia de entrada y estancia (las cuales deben estar en línea con las obligaciones emanantes del Pacto), pero añade también que “si la cuestión controvertida es la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión a este respecto que desemboque en su expulsión o deportación debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13”⁹¹.

53. La Comisión de Derecho Internacional también analiza la figura de “expulsión encubierta”, por la cual se entiende la salida forzosa de un extranjero de un Estado que resulte indirectamente de una acción o una omisión atribuible a dicho Estado, cuando ese Estado apoye o tolere actos cometidos por sus nacionales u otras personas que tengan por objeto provocar la salida de extranjeros de su territorio en una forma no prevista por la ley⁹². Esto se da, por ejemplo, con la no renovación de permisos de residencias sin motivo alguno. Es

⁸⁴ *Ibid.* párr. 44.

⁸⁵ *Ibid.*, pág. 29.

⁸⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 15 (1986), párr. 10.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 66º período de sesiones (5 de mayo a 6 de junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2014)”, A/69/10, pág. 30.

⁹¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 15 (1986), párr. 9.

⁹² Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 66º período de sesiones (5 de mayo a 6 de junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2014)”, pág. 37.

decir, que, sin tomar una decisión formal de expulsión, el Estado, a través de sus autoridades, adopta un comportamiento con el que pretende lograr, y de hecho logra, el mismo resultado: la salida forzosa del extranjero de su territorio⁹³. Este tipo de acciones están prohibidas en todas sus formas y modalidades porque, además, vulneran los derechos al debido proceso de los extranjeros.

54. La Comisión de Derecho Internacional establece la prohibición de expulsar a los extranjeros con el fin de confiscar sus bienes. Es preciso constatar que estas expulsiones, aparte de estar viciadas por lo que respecta a sus motivos, son incompatibles con el principio fundamental enunciado en la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven⁹⁴, según el cual “[n]ingún extranjero será privado arbitrariamente de sus bienes legítimamente adquiridos”⁹⁵.

6. El derecho de asilo

55. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el párrafo 1 del artículo 14, consagra el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país en caso de persecución. A nivel regional, el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece el derecho a buscar y a recibir asilo en caso de “persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”.

56. El asilo, *strictu sensu* es un concepto vinculado con el delito político, mientras que el concepto de refugiado es más amplio. El artículo 1(A)(2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se refiere a la persona que “[...] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”⁹⁶.

57. La definición de refugiado de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados contiene tres elementos, a saber: i) que el sujeto se encuentre afuera del país de nacionalidad, (o en caso de un apátrida, su país de residencia habitual); ii) que tenga un temor fundado de persecución; iii) que la persecución sea motivada por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Sin embargo, esta Convención no reconoce expresamente el derecho de la persona que reúne los elementos de la definición de refugiado a recibir refugio. Este derecho se deriva del principio de *non-refoulement* que establece que la persona que tiene un temor fundado de persecución por uno de los motivos antes mencionados y que llega al territorio de un Estado que no es su Estado de nacionalidad no puede ser devuelta a su país. El principio de no devolución se expresa de forma más destacada en el artículo 33 de la Convención de 1951, y ha sido reconocido como norma de derecho internacional consuetudinario. El principio de no devolución prohíbe a los Estados expulsar o devolver a un refugiado de cualquier manera a un territorio en el que corra el riesgo de ver amenazada su vida o su libertad⁹⁷. Las obligaciones de no devolución también están consagradas en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos⁹⁸. La privación de la nacionalidad que tiene como consecuencia el traslado de la persona a otro Estado puede contravenir el principio de no devolución⁹⁹.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ A/RES/40/144, art. 9.

⁹⁵ Comisión de Derecho Internacional, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 66° período de sesiones (5 de mayo a 6 de junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2014)”, pág. 39.

⁹⁶ Ver también Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, arts. 1(A)(2) y 28.

⁹⁷ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 113.

⁹⁸ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6 y 7; Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes, art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 22(8).

⁹⁹ UNHCR, “Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, párr. 114.

58. El “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional, en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados establece que el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo sino declarativo. Es decir, no se adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado¹⁰⁰.

59. En relación con la expresión “fundados temores”, el Manual establece que esta condición contiene un elemento subjetivo y otro objetivo. El término temor no se refiere sólo a las personas que de hecho ya han sido perseguidas, sino también a las que deseen evitar una situación que entraña un riesgo de persecución. Es decir, para determinar si existen o no fundados temores, no se requiere que el solicitante haya sido víctima de persecución¹⁰¹. El Manual estipula: “Lo ocurrido, por ejemplo, a sus amigos o parientes y a otros miembros del mismo grupo racial o social puede ser indicio suficiente de que sus temores de convertirse también más tarde o más temprano, en víctima de persecución son fundados”¹⁰².

60. Según el Manual, el contenido del concepto de persecución también tiene un elemento material y uno subjetivo. En cuanto al primero, el riesgo de violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, satisfacen este requisito. El riesgo de violaciones graves de otros derechos humanos también puede satisfacer ese elemento de persecución. No obstante, la discriminación en sí misma no es suficiente a menos que afecte o entrañe el riesgo de violaciones de otros derechos fundamentales¹⁰³. Asimismo, una investigación o una acusación penal no evidencia en sí misma persecución, pero sí puede concretarla en dos circunstancias: a) cuando la causa descansa sobre un tipo penal incompatible con los derechos y las libertades fundamentales de la persona; y b) cuando la persona acusada corre riesgo de sufrir una pena excesiva debido a la aplicación discriminatoria de la ley, siempre que el motivo responda al elemento subjetivo de la definición, es decir, sea motivada por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. La persecución presume la responsabilidad de las autoridades del Estado, que puede ser directa o indirecta¹⁰⁴.

61. A nivel regional, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 establece un concepto ampliado de refugiado que incluye “[...] aquellas personas cuyas vidas, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”¹⁰⁵. Las circunstancias a las que se refiere esta definición se caracterizan por la naturaleza indiscriminada, impredecible o colectiva de las amenazas que representan para la vida o vidas, seguridad o libertad de una persona o grupo de personas, o incluso para las poblaciones en general¹⁰⁶.

62. En tanto la definición de refugiado en esta Declaración se orienta hacia circunstancias que afectan a grupos o poblaciones enteras, no se enfoca en las circunstancias personales del individuo que huye de un peligro para su vida, seguridad o libertad, sino en las circunstancias objetivas en el país de origen. La referencia a la vida, seguridad o libertad de las personas debe interpretarse ampliamente, abarcando la integridad física y mental de las personas, la

¹⁰⁰ Párr. 28. Ver también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado”, 2000, párrs. 25, 60 y 68.

¹⁰¹ ACNUR, “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional, en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967”, 2019, párr. 45.

¹⁰² *Ibid.*, párr. 43.

¹⁰³ *Ibid.*, párr. 51.

¹⁰⁴ *Ibid.*, párr. 43.

¹⁰⁵ Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 1984, párr. III (3).

¹⁰⁶ ACNUR, “Directrices sobre protección internacional N° 12: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con situaciones de conflicto armado y violencia bajo el artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y las definiciones regionales de refugiado”, HCR/GIP/16/12, 2 de diciembre de 2016, párr. 66.

seguridad, libertades, dignidad humana y los medios de vida, con respecto a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y regional¹⁰⁷.

63. Dado que la “persecución” no se ha definido en el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos ha ido configurando la forma en que se interpreta y determina la “persecución” en el derecho internacional de los refugiados, en particular por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la medida en que se ha considerado que el término “persecución” implica graves violaciones de los derechos humanos, incluida una amenaza para la vida o la libertad y actos de discriminación¹⁰⁸.

64. Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, tanto la persecución en el derecho internacional de los refugiados como en el derecho penal internacional pueden considerarse dos caras de la misma moneda, en la medida en que, en el derecho internacional de los refugiados, las víctimas están protegidas de la acción del Estado, mientras que los autores de la persecución (en la mayoría de los casos lo son en virtud de un Estado) son el sujeto del derecho penal internacional. Si bien, debido al catálogo taxativo de motivos reconocidos en el derecho penal internacional consuetudinario, la definición es más estrecha que en el derecho internacional de los refugiados, ciertamente no es inconcebible que un mismo hecho pueda dar lugar a reacciones por parte de ambos campos del derecho internacional, como ocurre en particular en el caso de la persecución por motivos políticos¹⁰⁹.

B. Derecho interno

65. El 9 de febrero de 2023, luego de haber expulsado a 222 personas privadas de libertad arbitrariamente en virtud de una orden de deportación que las declaró traidoras a la patria, y mientras ellas todavía se encontraban volando hacia los Estados Unidos, la Asamblea Nacional adoptó en primera legislatura una reforma constitucional del artículo 21 de la Constitución Política. El texto reformado del artículo 21 permite privar de la nacionalidad nicaragüense a las personas declaradas como traidoras a la patria¹¹⁰.

66. Paralelamente, el mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional adoptó la iniciativa de Ley Especial núm. 1145 que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense, desarrollando así el artículo 21 reformado de la Constitución. La Ley entró en vigor el 10 de febrero de 2023¹¹¹. Dicha Ley establece que: “[L]as personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley núm. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N° 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.

67. La Ley núm. 1145 fue aprobada a pesar de que la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua todavía debía ser aprobada por la Asamblea Nacional en segunda legislatura en 2024, resultando así viciada de inconstitucionalidad. La reforma del artículo 21 de la Constitución y la adopción de la Ley núm. 1145, además, crearon una contradicción constitucional, ya que el artículo 20 de la Constitución establece que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad y, a la fecha de publicación de este documento,

¹⁰⁷ *Ibid.*, párrs. 82 y 83.

¹⁰⁸ “Handbook on procedures and criteria for determining refugee status and guidelines on international protection under the 1951 convention and the 1967 protocol relating to the status of refugees”, part I, HCR/IP/4/ENG/REV, 4 de febrero de 2019, párr. 51; “Guidelines on international protection no. 7”, HCR/GIP/06/07, 7 de abril de 2006, párr. 14; “Guidelines on international protection no. 8”, HCR/GIP/09/08, 22 de septiembre de 2009, párr. 10.

¹⁰⁹ “Guidelines on international protection no. 12”, HCR/GIP/16/12 02, diciembre de 2016, párr. 15; Rikhof & Geerts, “Protected Groups in International Refugee Law and International Law”, in *Laws*, 2019, 8(4), 25, disponible en: <https://doi.org/10.3390/laws8040025>.

¹¹⁰ El artículo 21 reformado establece: “La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense.” (*La Gaceta* núm. 25, 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-n%C2%BA-25-viernes-10-de-febrero-de-2023/>).

¹¹¹ Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense (Ley núm. 1145), *La Gaceta* núm. 25, 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-n%C2%BA-25-viernes-10-de-febrero-de-2023/>.

éste no se ha reformado. El 18 de enero de 2024, en sesión realizada en Ciudad Darío, la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura la ley de reforma al artículo 21 de la Constitución, en relación con la pérdida de la nacionalidad cuando una persona sea condenada por delitos de traición a la Patria. Se presentaron 91 votos a favor, con 0 votos en contra y 0 abstenciones. La Ley núm. 1190 fue publicada el 22 de enero de 2024 en La Gaceta¹¹². La adopción de la Ley núm. 1145 generó una antinomia con el artículo 21 de la Constitución, y por lo tanto no podía ser aplicada ya que solamente entró en vigor el 18 de enero de 2024. Esta es la fecha en la que dicha Ley debió empezar a regir hacia el futuro, respecto de los hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, en cumplimiento del principio de legalidad. Lo anterior es aún más relevante en tanto la Ley núm. 1145 prevé hechos que no eran contemplados por la Constitución o las leyes nicaragüenses.

68. El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua garantiza el derecho de las y los nicaragüenses a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, y a entrar y salir libremente del país. La Ley General de Migración y Extranjería (Ley núm. 761 de 2011) regula el ingreso de las personas nacionales y extranjeras al territorio de Nicaragua, y el regreso a él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país. También reconoce, en su considerando II, el artículo 46 de la Constitución que consagra el goce de los derechos humanos y la vigencia de varios instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua.

69. La Ley núm. 655 de 2008, Ley de Protección a Refugiados, incorpora en el ordenamiento interno la Declaración de Cartagena, y en consecuencia el concepto ampliado de refugiado. Dicha ley fue publicada en La Gaceta núm. 130 del 9 de julio de 2008. El artículo 11 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que, en Nicaragua, “las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragüenses en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución y las leyes de la República”. En este sentido, la figura de deportación existe en la normativa nicaragüense para los extranjeros en ciertas circunstancias¹¹³. Sin embargo, no existe tal figura para los nacionales. De igual manera, la figura de expulsión únicamente está prevista en la normativa nicaragüense con respecto a extranjeros y no para nacionales, y ésta debe darse mediante sentencia judicial y cuando se haya comprobado que las actividades de la persona extranjera comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional¹¹⁴.

70. El artículo 86 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que las personas nicaragüenses, para ingresar al territorio nacional, deberán presentar ante las autoridades migratorias cualquier tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería o por la representación diplomática u oficina consular nicaragüense en el exterior. El Decreto núm. 31-2012 que reglamenta la Ley General de Migración y Extranjería establece los requisitos para el otorgamiento del pasaporte ordinario, pasaporte ordinario por primera vez para menores de edad, y la renovación de pasaportes para mayores de edad, entre otros¹¹⁵. Los artículos 29 y subsiguientes del decreto establecen los requisitos para los permisos de salida de menores de edad en diferentes circunstancias.

71. El artículo 28 de la Constitución Política de Nicaragua regula la protección diplomática y consular. La Ley de Servicio Exterior (Ley núm. 358 de 2000), establece en su artículo 4, numeral 4, que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del Servicio Exterior “[p]roteger los intereses nacionales del Estado, y los derechos fundamentales de los nicaragüenses en el extranjero, de conformidad con la Constitución Política de la Nación, la legislación nacional y con las normas y los principios del derecho internacional”.

72. La Ley General de Migración y Extranjería en sus artículos 180 a 183 establece la posibilidad de interponer recursos administrativos de revisión y apelación a aquellas personas

¹¹² *La Gaceta núm. 11*, 22 de enero de 2024.

¹¹³ Ley General de Migración y Extranjería (Ley núm. 761 de 2011), art. 171.

¹¹⁴ *Ibid.*, art. 174.

¹¹⁵ Decreto No 31-2012, “Reglamento a la Ley No 761, Ley General de Migración y Extranjería”, aprobado el 20 de septiembre de 2012, art. 18.

cuyos derechos se consideran perjudicados por las resoluciones que emanen de la Dirección General de Migración y Extranjería.

73. De igual forma, los artículos 142 y 144 de la Ley General de Migración y Extranjería disponen que las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque tanto de tripulantes como de pasajeros y el documento de Información Anticipada de Pasajeros, conocido por sus siglas en inglés como API (*Advanced Passengers Information*). Asimismo, el personal de las empresas transportadoras nacionales y extranjeras está obligado a colaborar con la Dirección General de Migración y Extranjería en la recolección de la información de los viajeros que salen y entran al país. Sin embargo, esta obligación está limitada a lo establecido en el artículo 29 del Convenio de Chicago de 1944¹¹⁶. En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas de los medios de transporte internacional aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá impedir su ingreso o salida al territorio nacional, hasta tanto no sean satisfechas todas las obligaciones. Asimismo, la Ley establece que se impondrá multa en caso de incumplimiento y, en caso de repetidas violaciones, se dará lugar a la cancelación del permiso de operación en Nicaragua de la empresa de transporte de que se trate¹¹⁷.

IV. Hallazgos

74. El Grupo de Expertos ha continuado documentando violaciones graves y sistemáticas de los derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación como un mecanismo más del presidente y la vicepresidenta para perseguir y silenciar a cualquier persona que sea vista como una voz crítica u opositora, real o percibida, del Gobierno y garantizar, así, su permanencia en el poder. En la mayoría de los casos, estas violaciones provocaron múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos, incluidas violaciones de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a participar en los asuntos públicos, al trabajo, a la seguridad social y a otros derechos económicos y sociales, imposibles de cuantificar.

A. La expulsión de nacionales y extranjeros

75. Hasta la fecha de publicación de este documento, el Grupo ha documentado 263 expulsiones de nicaragüenses y 21 expulsiones de extranjeros, sin el debido proceso legal desde 2022, llevadas a cabo tanto individual como colectivamente. Estas personas fueron llevadas a la frontera o expulsadas por vía aérea directamente por las autoridades nicaragüenses.

76. El Grupo de Expertos recuerda que, el 9 de febrero de 2023, 222 personas presas por motivos políticos fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos, en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, la cual, además, las declaró traidoras a la patria¹¹⁸. Se les impusieron penas de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, “ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y retirándoles de forma perpetua sus derechos ciudadanos”¹¹⁹.

77. Tanto el poder ejecutivo como el judicial, en su momento informaron públicamente que se había realizado una deportación de nacionales. El magistrado Octavio Rothschild Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, en la lectura de la decisión judicial, notificó públicamente que esa institución fue la que ordenó la “deportación inmediata y ya efectiva” de las 222 personas. En un discurso emitido el 9 de febrero de 2023, el presidente Ortega manifestó que “es el Estado nicaragüense el que le está

¹¹⁶ Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944, ICAO Doc. 7300/9 (2006); ver también Organización de Aviación Civil Internacional, “Manual de Facilitación”, Doc. 9957, 2011, capítulo 2, numeral 2.2.4 al 2.2.6, págs. 2 a 4.

¹¹⁷ Ley General de Migración y Extranjería, art. 144.

¹¹⁸ A/HRC/52/62, párr. 106; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 770 y ss.

¹¹⁹ A/HRC/52/CRP.5, párr. 775.

ordenando la deportación”¹²⁰. Finalmente, la vicepresidenta manifestó que: “nuestro Estado [...] ha decidido realizar la expatriación y el traslado de las personas que fueron juzgadas y sentenciadas por atentados contra la soberanía nacional”¹²¹.

78. Tal y como lo estableció el Grupo en el primer mandato, el perfil de las víctimas expulsadas en febrero de 2023 es heterogéneo e incluye excandidatos presidenciales, personas defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, miembros de la Iglesia católica, miembros del movimiento campesino, estudiantes, docentes, periodistas, escritores, personas provenientes del sector privado, ex miembros del Frente Sandinistas de Liberación Nacional y personas que ejercieron su derecho a la protestas y/o a la libertad de expresión contra las acciones que el Gobierno de Nicaragua viene realizando desde 2018. Sin embargo, todas ellas tienen el común denominador de ser personas opositoras, o percibidas como tales, por representar para la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo una amenaza al control del Estado¹²². Lo anterior quedó confirmado cuando, inmediatamente después de su expulsión, las víctimas fueron objeto de discursos de odio por parte del presidente y la vicepresidenta, quienes se refirieron a ellas como “terroristas”, “golpistas”, “traidores a la patria” y “abortistas”¹²³.

79. Las 222 víctimas, quienes habían sido arbitrariamente detenidas en diferentes momentos por ser opositoras, o percibidas como tales, y habían sido condenadas en juicios que no cumplieron con las garantías procesales mínimas y, en algunos casos sometidas a actos de tortura física y psicológica, fueron expulsadas súbitamente del país después de su excarcelación. Esta expulsión vino a exacerbar las afectaciones a la salud física y mental de varias de ellas, tras las condiciones de detención inhumanas a las que la mayoría de ellas habían sido sometidas¹²⁴.

80. Además de la expulsión de las 222 personas excarceladas en febrero de 2023, las cuales documentó en su primer informe¹²⁵, el Grupo de Expertos ha identificado 6 casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses (3 mujeres, 34 hombres y 3 niños)¹²⁶. En un caso se trató de una familia completa; en otros dos se trató de expulsiones colectivas de miembros de la Iglesia Católica. Tanto en los casos de expulsiones colectivas como en los casos individuales, las víctimas fueron obligadas a subir a un avión hacia otro país o a cruzar la frontera terrestre. En ningún caso las víctimas pudieron interponer recursos en contra de la decisión de ser expulsadas¹²⁷.

¹²⁰ *Ibid.*, párr. 1028.

¹²¹ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1029.

¹²² A/HRC/52/CRP.5, párrs. 490 a 493, 947.

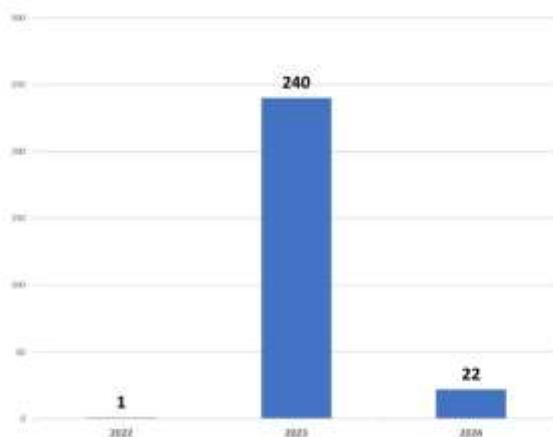
¹²³ *Ibid.*, párr. 1100.

¹²⁴ *Ibid.*, párrs. 318, 448, 549, 770, 777, 991.

¹²⁵ A/HRC/52/63, párrs. 46 y 106; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 318, 448, 549 y 770 a 777.

¹²⁶ Despacho 505, “Un adolescente de 17 años es desterrado de Nicaragua por un post en Facebook contra el régimen”, 24 de abril de 2023, disponible en: <https://www.despacho505.com/un-adolescente-desterrado-de-nicaragua-por-un-post-en-facebook-contra-el-regimen/>; 100% Noticias, “Médicos exiliados condenan el destierro de la Dr. Anely Pérez”, 25 de marzo de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/122755-medicos-exiliados-condenan-destierro-anely-perez/>.

¹²⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV053, BBIB054, BBIV089, BBIV281; documento en el archivo del Grupo de Expertos HHDOC039. El Grupo de Expertos no ha podido determinar si, tal y como ocurrió con el grupo de las 222 personas expulsadas en 2023, estas expulsiones están acompañadas de la privación arbitraria de la nacionalidad, en tanto no hubo o no se conoce resolución judicial de condena por traición a la patria ni tampoco aparece ninguna información sobre estas causas judiciales en el sistema judicial NICARAO.



Número de nicaragüenses expulsados

Grupo de Expertos Diferentes
Personas sobre Migración

81. Dentro de los casos de expulsiones de familias e individuos, cuatro de las víctimas expulsadas fueron primero detenidas de manera arbitraria, sujetas a interrogatorios y, en algunos casos, a tratos que podrían constituir actos de tortura tanto física como psicológica¹²⁸. En estos casos, se abrieron procesos judiciales sin informar a las víctimas sobre los delitos imputados y los procesos no fueron registrados en el sistema judicial NICARAO. Tampoco se garantizó el debido proceso en los casos penales y los recursos de exhibición personal interpuestos fueron rechazados. Tampoco se dio la posibilidad a las víctimas de interponer recursos administrativos de revisión y apelación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 180 de la Ley General de Migración y Extranjería. A continuación, se incluye un resumen de algunos de los casos de expulsión colectiva documentados por el Grupo de Expertos.

82. El 19 de octubre de 2023, 12 sacerdotes que se encontraban privados de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional, algunos de los cuales ya estaban condenados y otros habían sido detenidos y procesados entre los meses de marzo y septiembre de 2023, fueron excarcelados y expulsados hacia el Vaticano¹²⁹. El Gobierno de Nicaragua, en un comunicado de prensa oficial, manifestó que esta decisión había sido fruto de fructíferas negociaciones con el Vaticano¹³⁰. Tal y como se desarrolla a detalle en el documento de sesión A/HRC/55/CRP.5, algunos de estos sacerdotes se habían pronunciado, durante sus homilías, sobre las injusticias en Nicaragua. Uno de estos sacerdotes, además, había sido víctima de asedio y vigilancia constante por parte de agentes de policía y personas afines al Gobierno. Este sacerdote sufrió la profanación de su parroquia en junio de 2020, y se manifestó públicamente sobre este hecho.

83. Existen muchos casos notorios que ilustran el alcance y la intensidad de la persecución actual y el uso de la expulsión como forma de esta. Los acontecimientos en el contexto del concurso “Miss Universo” ganado por la candidata nicaragüense, durante el cual miles de nicaragüenses salieron a las calles a celebrar y se ondearon banderas nacionales azules y

¹²⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV053, BBIB054, BBIV089, BBIV281; documento en el archivo del Grupo de Expertos HHDOC039.

¹²⁹ DW, “Nicaragua envía a doce sacerdotes “procesados” al Vaticano”, 19 de octubre de 2023, disponible en: <https://www.dw.com/es/nicaragua-env%C3%ADa-a-doce-sacerdotes-procesados-al-vaticano/a-67144435>.

¹³⁰ Documento en el archivo del Grupo de Expertos HHDOC038. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que se había pedido a la Santa Sede acoger a 12 sacerdotes recientemente liberados de la cárcel, y que esta solicitud había sido aceptada (Vatican News, “La Santa Sede acoge a 12 sacerdotes excarcelados en Nicaragua”, 19 de octubre de 2023, disponible en: <https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-10/matteo-bruni-santa-sede-sacerdotes-nicaragua.html>).

blancas en las calles de Nicaragua¹³¹ pese a las advertencias realizadas por la vicepresidenta de que los días de las manifestaciones “no volverán jamás”¹³², son solo un ejemplo más en este sentido. Desde las protestas masivas de abril de 2018, la bandera nacional se había convertido en un símbolo de oposición al Gobierno. Las autoridades también prohibieron a dos artistas pintar un mural en honor a Palacios, por considerarlo un “mensaje político”¹³³.

84. El 13 de enero de 2024, fueron excarcelados y expulsados hacia el Vaticano 19 miembros de la Iglesia Católica, incluidos dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, privado arbitrariamente de su nacionalidad y condenado a más de 26 años de cárcel¹³⁴, y Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, detenido el 21 de diciembre de 2023 y cuyo paradero era desconocido. También fueron expulsados 15 sacerdotes y 2 seminaristas que habían sido detenidos entre el 22 y el 31 de diciembre de 2023, algunos de los cuales también se encontraban en paradero desconocido¹³⁵. Según una nota de prensa del Gobierno de Nicaragua, esta decisión se dio gracias a las “muy discretas” coordinaciones con el Vaticano¹³⁶. El 16 de enero de 2024 fue expulsado un sacerdote nicaragüense perteneciente a la orden Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador¹³⁷.

85. Tal y como se desarrolla a detalle en el documento de sesión A/HRC/55/CRP.5, dentro de este grupo de sacerdotes, la mayoría detenidos en el mes de diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024, se encontraban : a) un sacerdote prominente de la Diócesis de Matagalpa; b) varios sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, de donde salían los Comunicados de Justicia y Paz entre 2019 y 2022, y en los que se hacían críticas a la situación del país y a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno; c) el sacerdote que dio acogida en la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua a unos 200 jóvenes que estaban huyendo del ataque perpetrado por grupos armados progubernamentales a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en julio de 2018; d) un obispo a quien se le había negado la salida del país en 2021 y se le había confiscado su pasaporte; y e) sacerdotes críticos del Gobierno que habían pedido en sus homilías por otros sacerdotes que habían sido detenidos previamente¹³⁸.

86. Además de las expulsiones de nicaragüenses documentadas por el Grupo de Expertos a partir de febrero de 2023, el Grupo documentó el caso de un artista nicaragüense, que fue

¹³¹ La Prensa, “Así celebran los nicaragüenses el triunfo de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023”, 19 de noviembre de 2023, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/11/19/vida/3240522-asi-celebran-los-nicaraguenses-el-triunfo-de-sheynnis-palacios-miss-universo-2023>; El País, “La miss Universo Sheynnis Palacios aviva los símbolos de la resistencia contra Ortega y Murillo en Nicaragua”, 23 de noviembre de 2023, disponible en: <https://elpais.com/america/2023-11-23/la-miss-universo-sheynnis-palacios-aviva-los-simbolos-de-la-resistencia-contra-ortega-y-murillo-en-nicaragua.html>; DW, “Miss Universo ‘rompió el silencio impuesto por la dictadura’”, 23 de noviembre de 2023, disponible en: <https://www.dw.com/es/nicaragua-victoria-de-miss-universo-sheynnis-rompi%C3%B3-el-silencio-impuesto-por-la-dictadura-de-ortega-y-murillo/a-67536751>.

¹³² El 19 Digital, “Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (04-04-22)”, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126928-companera-rosario-murillo-en-multinoticias-04-04-22>, 4 de abril de 2024.

¹³³ La Prensa, “Impiden a artistas pintar mural en homenaje a Miss Universo, Sheynnis Palacios, en Estelí, 21 de noviembre de 2023, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/11/21/vida/3241777-impiden-a-artistas-pintar-mural-en-homenaje-a-miss-universo-sheynnis-palacios-en-esteli>.

¹³⁴ El Grupo de Expertos recuerda que Monseñor Álvarez formaba parte del grupo de personas que serían expulsadas a los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, pero éste se negó a subirse al avión. Un día después de negarse a ser expulsado, fue condenado (ver A/HRC/52/CRP.5, párr. 847).

¹³⁵ Despacho 505, “Detenciones de sacerdotes en medio de los festejos de Año Nuevo en Nicaragua”, 1 de enero de 2024, disponible en: <https://www.despacho505.com/detenciones-de-sacerdotes-en-medio-de-los-festejos-de-ano-nuevo-en-nicaragua/>.

¹³⁶ Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, “Unida Nicaragua Triunfa. Nota de Prensa”, 14 de enero de 2024, pág. 1, documento en el archivo del GHREN HHD0C045.

¹³⁷ La Prensa, “Dictadura expulsó del país a tres sacerdotes de la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador”, 20 de enero de 2024, disponible en: <https://www.laprensani.com/2024/01/20/politica/3268268-dictadura-expulso-del-pais-a-tres-sacerdotes-de-la-fundacion-misioneros-consagrados-del-santisimo-salvador>.

¹³⁸ *Ibid.*

expulsado el 14 de abril de 2022, después de haber sido detenido. Su detención ocurrió días después de haber dado un concierto, “Monroy & Surmenage”, donde cantó una canción compuesta por él sobre las protestas de 2018. El día de su expulsión, fue llevado por agentes de la policía, hasta la frontera con Honduras. Al ser obligado a cruzar la frontera, la víctima fue obligada a firmar un documento donde decía que no podía regresar a Nicaragua pues de lo contrario iría preso¹³⁹.

87. El Grupo de Expertos también ha documentado 21 casos de expulsiones arbitrarias de extranjeros con residencia legal en Nicaragua, periodistas, cooperantes, sacerdotes y miembros de comunidades religiosas. Entre ellos ha identificado seis casos de expulsiones colectivas, cuatro de las cuales ocurrieron en el primer semestre de 2023, todas de integrantes de comunidades religiosas. En ningún caso las víctimas pudieron someter su caso a revisión ante una autoridad competente¹⁴⁰.

88. El Grupo de Expertos documentó la expulsión arbitraria del Padre Donaciano Alarcón, de nacionalidad panameña y residencia en Nicaragua, el 4 de abril de 2023. Éste relató a fuentes abiertas que, al terminar de oficiar una misa, previo a haber recibido amenazas de ser detenido, fue trasladado por agentes de la Policía Nacional a la frontera con Honduras, sin ser informado que ese era su destino. Allí le dijeron “cruce, usted no puede volver aquí, es persona non grata.” El Padre, días antes de su expulsión, había sido objeto de seguimientos y amenazas con ser detenido y expulsado, por parte de la policía¹⁴¹.

89. En este sentido, tanto el Comité de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre casos similares. En el caso Hammel, el Comité de Derechos Humanos consideró violado el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos respecto de la expulsión de un extranjero sin entrega de copia de la orden correspondiente y manteniéndolo en custodia hasta la salida del avión, impidiendo así todo acceso a los tribunales¹⁴².

90. Otro *modus operandi* para expulsar a personas extranjeras con residencia legal en el país es la no renovación de sus permisos de residencia, sin motivación ni posibilidad de interponer recursos. El Grupo ha documentado 11 casos desde 2020, dos de los cuales ocurrieron en 2020, cinco en 2022 y cuatro en 2023, pero, debido a la dificultad de contactar a las víctimas, estima que el número es mucho mayor. Del total de víctimas identificadas, nueve tienen un perfil religioso. Muchas de las personas pertenecientes a la Iglesia Católica a las que se ha negado la renovación de sus permisos eran sacerdotes críticos del Gobierno y comunidades religiosas que realizaban obras sociales en Nicaragua¹⁴³. Asimismo, el Grupo

¹³⁹ Confidencial, “Josué Monroy sobre su destierro: ‘Un policía me consoló: ‘vas a estar libre’”, 25 de enero de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/josue-monroy-sobre-su-destierro-un-policia-me-consolo-vas-a-estar-libre/>.

¹⁴⁰ Aciprensa, “Esta sería la excusa usada para expulsar a segunda congregación religiosa de Nicaragua”, 22 de septiembre de 2022, disponible en: <https://www.aciprensa.com/noticias/95894/esta-seria-la-excusa-usada-para-expulsar-a-segunda-congregacion-religiosa-de-nicaragua>; Swissinfo.ch, “Monjas trapenses abandonan Nicaragua ‘por motivos de la Orden’”, 28 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.swissinfo.ch/spa/monjas-trapenses-abandonan-nicaragua-por-motivos-de-la-orden/48323650>; Despacho 505, “Tristeza de las hermanas Dominicanas de la Anunciata por la expulsión de Nicaragua”, 13 de abril de 2023, disponible en: <https://www.despacho505.com/expulsion-hermanas-dominicas-de-la-anunciata-de-nicaragua/>; Despacho 505, “El Migob ilegaliza a la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, luego de tomarse el colegio que administraban”, 1 de junio de 2023, disponible en: https://www.despacho505.com/regimen-ilegaliza-a-la-asociacion-hijas-de-santa-luisa-de-marillac-en-el-espiritu-santo-luego-de-tomarse-el-colegio-que-administraban/#google_vignette; Confidencial, “Ortega cancela y confisca bienes a monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo luego de expulsarlas”, 4 de julio de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/ortega-cancela-y-confisca-bienes-a-monjas-de-la-fraternidad-pobres-de-jesucristo-luego-de-expulsarlas/>.

¹⁴¹ Panamá en Directo, “Padre Donaciano Alarcón habla con Panamá En Directo tras ser expulsado de Nicaragua”, 5 de abril de 2023, video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=pl4gmWPiS8A&t=161s>.

¹⁴² Comité de Derechos Humanos, Communication No. 155/1983, *Eric Hammel v. Madagascar* (1987), CCPR/C/OP/2 at 179 (1990), párrs. 18.2, 19.2.

¹⁴³ Ver A/HRC/55/CRP.5.

conoció que los bienes de tres de las comunidades religiosas a cuyos miembros no se les renovó el permiso de residencia, fueron confiscados por el Gobierno para, en su sede, abrir oficinas del Estado¹⁴⁴. El Grupo también documentó 10 casos de personas extranjeras que fueron deportadas sin garantizarles el debido proceso, obligadas a salir del país por sus propios medios, dándoles entre 24 y 72 horas para hacerlo¹⁴⁵.

91. El Grupo de Expertos documentó el caso de una persona extranjera que trabajaba para una organización de cooperación internacional en Nicaragua, y que fue informada telefónicamente de que se encontraba en una situación migratoria irregular – situación que no era cierta – y que tenía diez días para salir del país. El plazo fue reducido a 72 horas después de que la persona se comunicó con personal de su embajada para exponer su caso e intentar obtener ayuda. Durante este periodo de tiempo, la víctima recibió varias llamadas del Ministerio de Relaciones Exteriores preguntando la fecha exacta de su salida. Finalmente, la persona tuvo que salir con escolta diplomática dentro del período de tiempo dado por el Gobierno, sin haber recibido formalmente una orden de expulsión, sin conocer la supuesta falta administrativa cometida, y sin poder interponer recurso alguno¹⁴⁶.

92. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado de forma sistemática y con intención discriminatoria, el derecho de sus nacionales a la libertad de circulación y de escoger su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo observa también que estas violaciones dejaron a las víctimas en situación de especial vulnerabilidad y sin acceso a un recurso efectivo, afectando así el goce de sus derechos humanos de manera general. El Grupo de Expertos considera que todas las víctimas nicaragüenses fueron expulsadas por ser opositoras, o percibidas como tales, y, tal y como establecido en el documento de sesión que acompañó su primer informe¹⁴⁷, las expulsiones forman parte del plan criminal del Gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo para remover cualquier tipo de oposición a su Gobierno y garantizar así su permanencia en el poder.

93. El Grupo de Expertos también tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado el derecho de los extranjeros que se hallaban legalmente en su territorio a no ser expulsados sin base legal y sin debido proceso, consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹⁴⁸. El Grupo de Expertos reconoce el derecho del Estado de Nicaragua de expulsar a a extranjeros de su territorio, siempre y cuando estas decisiones sean el resultado de la adopción de una resolución conforme a la ley, debidamente razonada. En ninguno de los casos analizados, el Grupo pudo comprobar que se haya cumplido este requisito. Las personas expulsadas extranjeras son, en su mayoría, parte de varias comunidades religiosas de la Iglesia Católica a las que se les canceló la personería jurídica como organización sin fines de lucro, para luego deliberadamente y, a través del sistema jurídico y de las decisiones del entonces Ministerio de Gobernación,

¹⁴⁴ Confidencial, “Quince propiedades de la Iglesia católica confiscadas en los últimos dos años”, 13 de febrero de 2024, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/propiedades-de-la-iglesia-catolica-confiscadas-en-nicaragua/>.

¹⁴⁵ Confidencial, “Régimen deporta a El Salvador a corista que estuvo encerrado con monseñor Álvarez”, 19 de agosto de 2022, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/regimen-deporta-a-el-salvador-a-corista-que-estuvo-encerrado-con-monsenor-alvarez/>; Despacho 505, “Llanto y tristeza de las hermanas Dominicanas de la Anunciata por la expulsión de Nicaragua”, 13 de abril de 2023, disponible en: <https://www.despacho505.com/expulsion-hermanas-dominicanas-de-la-anunciata-de-nicaragua/>; Aciprensa, “Dictadura de Nicaragua secuestra a sacerdote de origen mexicano”, 18 de enero de 2024, disponible en: <https://www.aciprensa.com/noticias/102798/dictadura-de-nicaragua-secuestra-a-sacerdote-mexicano-ezequiel-buenfil>.

¹⁴⁶ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV194.

¹⁴⁷ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1109.

¹⁴⁸ El Pacto establece dos garantías adicionales, el derecho a ser oído y el derecho a solicitar la revisión de la decisión y a ser representado ante la instancia que revise la misma. Ambas garantías están condicionadas a la ausencia de “razones imperiosas de seguridad nacional”, argumentos que no fueron establecidos por el Gobierno de Nicaragua.

confiscar los bienes y apropiarse ilegalmente de sus propiedades en cabeza de la Procuraduría General de la República.

B. La privación de la nacionalidad

94. En su informe anterior, el Grupo de Expertos documentó la privación arbitraria de la nacionalidad de 317 personas opositoras, o percibidas como tales, mediante resoluciones judiciales fundamentadas en la aplicación de una reforma constitucional ilegal¹⁴⁹. Para el presente informe, el Grupo ha profundizado en la investigación de esta violación y sus múltiples repercusiones sobre las víctimas.

95. Tal y como se determinó en el primer informe del Grupo de Expertos y el documento de sesión que lo acompañó, los días 9, 10 y 15 febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses privaron arbitrariamente de su nacionalidad a 317 personas opositoras o percibidas como tales¹⁵⁰, luego de haberlas declarado “traidoras a la patria”¹⁵¹. Pese a que estas decisiones no cumplían con el procedimiento que se establece para la adopción de una ley y a todas luces eran contrarias a los artículos 20, 34 y 46 de la Constitución Política, el Gobierno decidió mantenerlas en firme.

96. El Grupo recuerda que la Ley Especial núm. 1145¹⁵² regula la pérdida de nacionalidad y establece que las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley núm. 1055¹⁵³ perderán la nacionalidad nicaragüense. La Ley núm. 1055 fue aprobada en 2020, cuando al menos 67 personas de las 222 expulsadas a Estados Unidos en febrero de 2023, ya habían sido condenadas por otros delitos antes de la fecha de su publicación. En este sentido, las adiciones a las sentencias por el delito de traición a la patria¹⁵⁴ que justificaron la privación arbitraria de la nacionalidad, no fueron, en ninguno de los casos, un delito objeto en las causas

¹⁴⁹ A/HRC/52/63, párrs. 104 a 108; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 318, 770, 775 y 778.

¹⁵⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV017, AAIV034, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV051, AAIV052, AAIV057, AAIV058, AAIV061, AAIV062, AAIV063, BBIV025, BBIV026, BBIV031, BBIV032, BBIV033, BBIV035, BBIV036, BBIV037, BBIV038, BBIV039, BBIV040, BBIV042, BBIV043, BBIV046, BBIV047, BBIV050, BBIV051, BBIV056, BBIV057, BBIV058, BBIV059, BBIV060, BBIV079, BBIV085, BBIV086, BBIV099, BBIV100, BBIV102, BBIV103, BBIV104, BBIV105, BBIV107, BBIV108, BBIV109, BBIV111, BBIV112, BBIV118, BBIV121, BBIV122, BBIV165, BBIV180, BBIV181, BBIV184, BBIV186, BBIV193, BBIV195, BBIV214, BBIV216, BBIV233, CCIV021, CCIV024, CCIV30, CCIV032, CCIV033, CCIV034, CCIV043, CCIV044, CCIV053, CCIV 056, CCIV057, CCIV070, CCIV084, CCIV086, CCIV088, CCIV093, CCIV101, CCIV111, CCIV121, DDIV055, DDIV057, DDIV058, DDIV059, DDIV060, DDIV061, DDIV062, DDIV063, DDIV064, DDIV065, DDIV067, DDIV079, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069, EEIV074, EEIV075, EEIV076, EEIV077, EEIV078, EEIV079, EEIV089, EEIV119, MMIV004, y MMIV008, MMIV001, MMIV002, MMIV003, MMIV009, MMIV010, MMIV011, MMIV012, MMIV013, MMIV014; MMIV015, MMIV016, MMIV017, MMIV018, MMIV025, MMIV039, HHIV001, HHIV004, HHIV005, HHIV006, HHIV007, HHIV008, HHIV009, HHIV010, HHIV011, HHIV013, HHIV014, HHIV015, HHIV016, HHIV018, HHIV019, HHIV020, HHIV022, HHIV024, HHIV031, HHHIV032, HHIV033, HHIV034, y HHIV035.

¹⁵¹ El magistrado Octavio Roths Schuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, confirmó públicamente la orden de deportación de las 222 personas y declaró que: “Para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas” (ver Confidencial, “Dictadura excarcela a 222 presos políticos en la madrugada”, 9 de febrero de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/dictadura-excarcela-a-222-presos-politicos-en-la-madrugada/>).

¹⁵² A/HRC/52/63, párr. 778.

¹⁵³ *Ibid.*, párr 544 (iii); Ley núm. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en: *La Gaceta núm. 237*, 22 de diciembre de 2020.

¹⁵⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos BBD0C308, BBD0C309, BBD0C311, BBD0C312, BBD0C314, BBD0C316, BBD0C318, BBD0C320, BBD0C321, BBD0C322, BBD0C323, BBD0C324, BBD0C325, BBD0C326, BBD0C327, BBD0C328, BBD0C329, BBD0C330, y BBD0C359.

judiciales contra algunas de las 222 personas. Asimismo, el Grupo registró al menos 10 casos en los cuales las personas estaban siendo procesadas o su juicio aún no había culminado, por lo que las personas expulsadas no tendrían ninguna condena en firme por traición a la patria. En consecuencia, Nicaragua incumplió sus obligaciones internacionales en lo que respecta al principio general de irretroactividad de la aplicación de la ley penal, establecido en tratados y en convenios internacionales que Nicaragua ha ratificado¹⁵⁵ y reconocidos en el artículo 46 de su Constitución Política, así como el derecho al debido proceso.

97. Una fuente del Grupo de Expertos¹⁵⁶ manifestó que, a fin de evitar que se le señale al Gobierno de Nicaragua por la violación del principio de la irretroactividad de la ley penal, se ha invocado el artículo 161 del Código Procesal Penal, que establece los remedios permitidos por ley. El artículo determina que, “en cualquier momento antes de la notificación de la resolución y siempre que no implique una modificación esencial de lo resuelto, el juez o tribunal, de oficio, podrá reponerla para [...]: 1) rectificar cualquier error u omisión material, 2) aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones, 3) adicionar su contenido si se ha omitido resolver algún punto controvertido en el proceso [...]. Si el tribunal no hace uso de esta potestad, las partes mediante recurso de reposición podrán pedir rectificación, aclaración o adición dentro de los tres días posteriores a la notificación. Esta solicitud suspenderá el plazo para interponer los demás recursos que procedan”. Estos elementos no se cumplieron en ninguno de los casos de las 222 personas excarceladas y expulsadas.

98. Como establecido en el primer informe del Grupo de Expertos, después de la privación arbitraria de la nacionalidad de las 222 personas expulsadas a Estados Unidos a través de una orden de deportación, el 10 de febrero de 2023, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a más de 26 años de prisión por una serie de presuntos delitos, privándolo asimismo de su nacionalidad nicaragüense¹⁵⁷. El día anterior, Monseñor Álvarez se habría negado a salir a los Estados Unidos.

99. El 15 de febrero de 2023, a través de resolución judicial, se declararon a un total de 94 personas como traidoras a la patria con base en la Ley núm. 1055, privándolas arbitrariamente de su nacionalidad y ordenando la confiscación de sus bienes, entre otras penas¹⁵⁸. Ninguna de estas personas fue notificada sobre el proceso legal ni sobre el juicio, por lo que éste, de haberse realizado, se hizo en ausencia. De estas 94 personas, 88 se encontraban en el extranjero por la imposibilidad de permanecer en Nicaragua debido a la represión y/o amenazas sufridas desde 2018.

100. Ninguna de las dos resoluciones leídas públicamente tanto el 9 como el 15 de febrero de 2023, explicitan la posibilidad de interponer el recurso de reposición establecido en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal. Además de la privación arbitraria de la nacionalidad, las víctimas no han tenido acceso a un juicio justo ni a un recurso efectivo, en tanto no pudieron acceder a un tribunal imparcial e independiente que revisara las decisiones. En este sentido, Nicaragua ha incumplido sus obligaciones internacionales en relación con el acceso a un recurso efectivo establecido en varios instrumentos internacionales que ha ratificado¹⁵⁹.

101. Una fuente del Grupo de Expertos manifestó:

Me quitaron la ciudadanía. ¿Dónde has visto vos que hay un procedimiento sin escuchar a la contraparte, que no es contencioso y ni está el derecho de escucharte y defenderte y encima tiene una consecuencia jurídica inapelable? Oiga bien esa locura. Seguramente hasta el decomiso de los bienes nos están ordenando. Y lo mejor

¹⁵⁵ Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11(2); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 15(1); Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9.

¹⁵⁶ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV027.

¹⁵⁷ A/HRC/52/CRP.5, párr. 847.

¹⁵⁸ A/HRC/52/CRP.5, párr. 778.

¹⁵⁹ Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2(3), art. 14(1); Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, art. 25.

*de eso es que lo hace un magistrado, sin un proceso, sin un expediente y sin nada. Qué locura*¹⁶⁰.

102. Tal y como fue identificado por el Grupo de Expertos en su primer informe, las 317 personas víctimas de la privación arbitraria de su nacionalidad y demás penas accesorias, cumplían con el perfil identificado de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales¹⁶¹. Dentro de este grupo de personas se encuentran: periodistas, directores de medios de comunicación, excandidatos presidenciales, personas defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, miembros de la Iglesia católica, miembros del movimiento campesino, estudiantes, escritores, docentes, personas provenientes del sector privado, ex miembros del Frente Sandinistas de Liberación Nacional, y personas que participaron en las protestas de 2018, entre otras. Todas estas personas tienen en común haber sido hostigadas y amenazadas y, en el caso de 222 de ellas, detenidas, por su opinión política contra el Gobierno de Nicaragua o por su cercanía a líderes de la oposición.

103. A pesar de los intentos de la Asamblea Nacional para establecer una base legal para la privación de la nacionalidad, el Grupo de Expertos concluye, analizando las acciones previas realizadas contra estas personas¹⁶² que las decisiones se tomaron de forma discriminatoria por la postura política, real o percibida, de las víctimas. En este sentido, el Grupo de Expertos recuerda el discurso de odio del presidente Ortega con respecto a este grupo de víctimas: “esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Que se los lleven para allá, para que allá les sirvan como lo que son, esclavos del imperio, traidores a la patria”¹⁶³.

104. Las prácticas deliberadamente discriminatorias en contra de las víctimas también quedan documentadas con la instrumentalización de los juzgados y el Tribunal de Apelaciones de Managua para privarlas arbitrariamente de la nacionalidad y con la aplicación abusiva del concepto de alta traición o traición a la patria¹⁶⁴. Al respecto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó ante el pleno durante la sesión solemne de clausura del 39 período legislativo en diciembre de 2023:

*[S]eguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa, pero hay países, de esos muy democráticos, que los fusilan [...] Nosotros simplemente [les decimos]: mirá, no podés ser nicaragüense, andate, vivís renegando, andate. [...] Alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense, es lo menos*¹⁶⁵.

105. Según lo documentado por el Grupo de Expertos, las decisiones de privación arbitraria de la nacionalidad y demás penas accesorias tienen un componente claro de discriminación por la identidad de las víctimas como opositoras al Gobierno, o por representar una amenaza al mismo. En este sentido, las altas jerarquías del Estado lideradas por el presidente y la vicepresidenta, a través de una variedad de agencias y funcionarios, buscaron, no solamente dejar a las víctimas en condición de apatridia, sino en una condición de total vulnerabilidad. La privación arbitraria de la nacionalidad genera así un impacto en el derecho a la libre circulación y a la libre escogencia de la residencia, pero a su vez forma parte de un patrón de violaciones conexas y concurrentes de varios derechos políticos, sociales y económicos¹⁶⁶ relacionados entre sí, *inter alia*: el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la participación en los asuntos públicos, al trabajo, a la seguridad social, la prohibición de injerencias arbitrarias e ilegales en la familia, y a los derechos de las niñas y los niños. Además, la pérdida de la nacionalidad ha anulado la posibilidad de acceder a la protección y

¹⁶⁰ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV032.

¹⁶¹ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 490 a 493 y 947.

¹⁶² *Ibid.*, párr. 1090.

¹⁶³ *Ibid.*, párr. 750, 1110 y 1126.

¹⁶⁴ *Ibid.*, párr. 1090.

¹⁶⁵ 100%Noticias, “Gustavo Porras: ‘En otros países los fusilan’, sobre apátridas en Nicaragua”, 16 de diciembre de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/128559-gustavo-porras-habla-apatridas-nicaragua/>.

¹⁶⁶ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1087.

a los servicios del Estado, en especial los relacionados con la garantía de los derechos económicos básicos¹⁶⁷.

106. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las decisiones de privación de la nacionalidad son contrarias a los artículos 21, 27, 34, 38 y 46 de la Constitución Política de Nicaragua y al artículo 9 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua. En este sentido, están prohibidas no sólo las políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra cierta categoría de personas¹⁶⁸.

107. El Grupo de Expertos también documentó el caso particular de la señora Vilma Núñez de Escorcia quien, a la fecha de presentación de este documento de sesión, se encuentra en una situación de apatridia *in situ*, al haber sido privada arbitrariamente de su nacionalidad, pero permaneciendo en territorio nicaragüense¹⁶⁹. Este caso es particularmente relevante ya que, al permanecer en territorio nicaragüense en situación de apatridia, la señora Núñez sufre diariamente la denegación de todos sus derechos humanos de manera diferencial y es víctima de hostigamiento, acoso y vigilancia constantes. Al no tener documento de identidad ni ser reconocida como nacional, Núñez ha quedado por fuera de la protección del Estado, violándosele sus derechos a la participación política, a la libertad de expresión, a la salud, a la seguridad social – le fue cancelada su pensión –, a la propiedad, a la no injerencia en la familia – pese a estar casada su matrimonio es inexistente para la ley –, y al acceso a la justicia, entre otros.

108. Monseñor Rolando Álvarez, quien permaneció privado de libertad en La Modelo desde el 9 de febrero de 2023 hasta el 14 de enero de 2024, cuando fue excarcelado y expulsado al Vaticano, también se encontró en una situación de apatridia *in situ* desde el 10 de febrero de 2023, cuando fue privado arbitrariamente de su nacionalidad¹⁷⁰. La Corte Interamericana habría sido informada que, durante su detención, Monseñor Álvarez se encontraba extremadamente delgado, pálido, habría perdido cabello, tendría manchas pronunciadas en su rostro, ojeras marcadas y signos de deshidratación en el rostro. Respecto de su salud mental, habría presentado expresiones de ansiedad y agitación que no son características de su comportamiento. También se le habría informado que, desde el día de su detención, no habría recibido medicamentos para sus padecimientos preexistentes ni atención médica¹⁷¹.

109. En virtud del conjunto de información recabada y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha privado de manera arbitraria de su nacionalidad, por motivos políticos, al menos a 317 personas opositoras o percibidas como tales. El Consejo de Derechos Humanos, en sus resoluciones 7/10, 10/13, 13/2, 20/5, 26/14 y 32/5, considera que la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos políticos es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales¹⁷². En este sentido, la motivación política de privar arbitrariamente de la nacionalidad a personas opositoras, o percibidas como tales, que, además, previamente

¹⁶⁷ Barbara Von Rütte, *The Human Right to Citizenship: Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, pág. 2.

¹⁶⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*, Sentencia (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 8 de septiembre de 2005, Serie C núm. 130, párr. 112.

¹⁶⁹ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV165, testimonio original recabado por el ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002.

¹⁷⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV142 y BBIV205; Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ACNUDH, “Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen al Estado a liberar a Monseñor Rolando Álvarez y a garantizar sus derechos humanos”, comunicado de prensa, agosto 18 de 2023; CIDH, RESOLUCIÓN 19/2023 Medidas Cautelares No. 214-23 Rolando José Álvarez Lagos respecto de Nicaragua 13 de abril de 2023.

¹⁷¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Adopción de medidas provisionales en favor de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Respecto de Nicaragua”, Resolución del 27 de junio de 2023, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/alvarezlagos_se_01.pdf.

¹⁷² E/CN.4/RES/2005/45, párr.1; A/HRC/RES/10/13, párr.1; A/HRC/RES/13/2, párr.1; A/HRC/RES/20/5, párr.1; A/HRC/RES/26/14, párr.1; A/HRC/RES/32/5, párr. 1.

habían sido víctimas de detención arbitraria, agresión, acoso e intimidación, violaciones del debido proceso y otras garantías judiciales, violencia de género, expulsión y otras violaciones de los derechos humanos, contraviene las obligaciones internacionales adquiridas por Nicaragua, incluidas aquellas establecidas bajo la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, en especial su artículo 9.

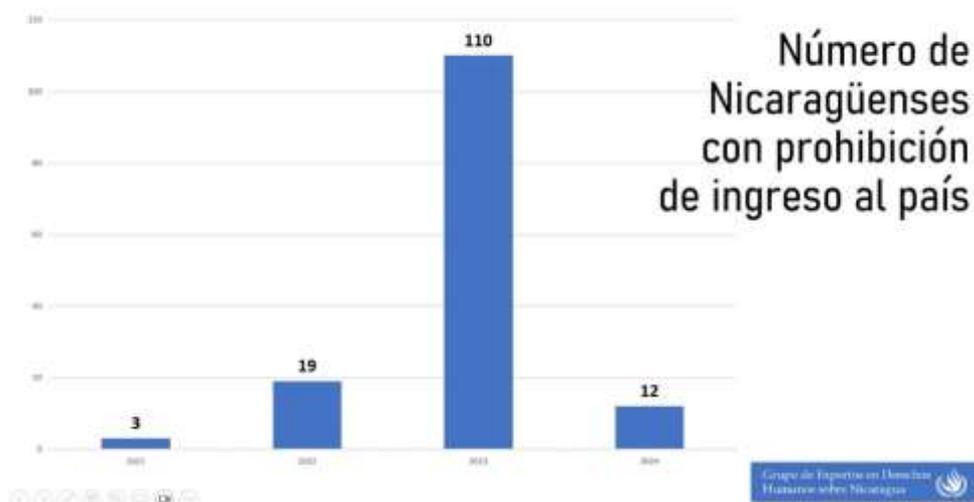
C. La prohibición de entrar en su propio país

110. El Grupo de Expertos ha podido determinar cómo, desde el 2021, la prohibición de entrada al país de nacionales ha sido utilizada, por parte del Gobierno, como una herramienta más para perpetuar una espiral de silencio, utilizada en este caso en contra de personas opositoras o percibidas como tales y de sus familiares. Entre 2018 y 2024, el Grupo ha contabilizado 145 casos de personas a quienes se les ha prohibido la entrada a Nicaragua (66 mujeres, 79 hombres, entre los que se encuentran 15 niñas y niños). Este patrón se ha acentuado durante 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de personas en febrero de 2023 y ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país, incluso por la permanencia de familiares cercanos en este¹⁷³.

111. El Grupo de Expertos ha recibido información de que en 2021 se presentaron 3 casos de prohibición de ingreso al país (dos hombres y una mujer). En 2022 se presentaron 19 casos (7 mujeres y 12 hombres). En 2023, el número de casos documentados aumentó más del 500%, llegando a 110 personas (48 mujeres, 62 hombres de los cuales 15 son niñas y niños). En 2024, hasta la fecha de publicación de este informe, a 12 personas nicaragüenses (9 mujeres y 3 hombres) les ha sido prohibido el ingreso al país. Las víctimas en todos los casos eran en su mayoría periodistas, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas y de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad. Los casos identificados por el Grupo de Expertos muestran, sin excepción, que el perfil de las víctimas es de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y sus familiares. Estas personas se han visto imposibilitadas a regresar a Nicaragua desde Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá, entre otros¹⁷⁴. El Grupo seguirá profundizando la investigación con el objetivo de intentar establecer el universo de casos.

¹⁷³ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV058, BBIV074, BBIV115, BBIV122, BBIV127, BBIV131, BBIV137, BBIV138, BBIV144, BBIV145, BBIV146, BBIV147, BBIV149, BBIV150, BBIV151, BBIV152, BBIV153, BBIV154, BBIV155, BBIV161, BBIV163, BBIV172, BBIV173, BBIV174, BBIV175, BBIV177, BBIV178, BBIV186, BBIV187, BBIV189, BBIV197, BBIV207, BBIV214, BBIV233, BBIV250, BBIV281, BBIV301, EEIV180, HHIV037 y HHIV038; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, HHIV002, HHIV024 y HHIV033.

¹⁷⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV058, BBIV074, BBIV115, BBIV122, BBIV127, BBIV131, BBIV137, BBIV138, BBIV144, BBIV145, BBIV146, BBIV147, BBIV149, BBIV150, BBIV151, BBIV152, BBIV153, BBIV154, BBIV155, BBIV161, BBIV163, BBIV172, BBIV173, BBIV174, BBIV175, BBIV177, BBIV178, BBIV186, BBIV189, BBIV197, BBIV207, BBIV214, BBIV233, BBIV250, BBIV281, BBIV301, EEIV180, HHIV037 y HHIV038; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, HHIV002, HHIV024 y HHIV033.



112. El Grupo de Expertos ha podido determinar el siguiente *modus operandi* cuando se trata de prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre. Las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería, con antelación, las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua. Las autoridades de la Dirección General utilizan esas listas para comparar los nombres con otro listado actualizado que reciben periódicamente proveniente del Ministerio de Gobernación, ahora del Interior, sobre los casos en los cuales podría haber alerta. Los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería complementan la información recibida por el Ministerio con búsquedas de información sobre las personas señaladas en el Internet y redes sociales. Cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo considerado “sospechoso” es suficiente para armar una ficha sobre la persona que viaja y considerarla no apta para ingresar al país¹⁷⁵. En estos casos, en las fechas previas al viaje de regreso, la aerolínea o la empresa de autobuses establece contacto con la persona a través de un mensaje de WhatsApp o por medio de una llamada telefónica y le informa que tiene prohibida la entrada a Nicaragua, sin darle mayor explicación, sino informándole que se comunique con las autoridades nicaragüenses¹⁷⁶.

113. Una fuente del Grupo de Expertos compartió el mensaje que recibió de una aerolínea: “veo en sistema, que el abordaje fue denegado por el gobierno de nicaragua [sic] y que debe acudir a la embajada, para que le den una solución a su caso”¹⁷⁷. En ciertos casos, se informa a los viajeros de la prohibición de entrar a Nicaragua solo en el momento del abordaje¹⁷⁸. Muchas de las víctimas se han acercado a consulados para pedir explicaciones, pero no han sido atendidos o se les ha respondido que no pueden dar información sobre su caso o que quien decide directamente es el Gobierno o la vicepresidenta, para lo cual les sugieren que se comuniquen con ella¹⁷⁹. Las víctimas tampoco tienen garantías para el ejercicio de varios derechos incluyendo el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a una vivienda digna, o a oportunidades laborales en los países donde son obligados a permanecer. Las víctimas tampoco pueden salir libremente de un país y entrar a otro porque no cuentan con documento de viaje válido.

¹⁷⁵ Divergentes, “País por cárcel: así secuestra el régimen de Ortega los pasaportes de los nicaragüenses”, 6 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.divergentes.com/pais-por-carcel-asi-secuestra-el-regimen-de-ortega-los-pasaportes-de-los-nicaraguenses/>.

¹⁷⁶ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV144, BBIV145, BBIV146, BBIV 147, BBIV149, BBIV151, BBIV152, BBIV161, BBIV173, BBIV155, BBIV172, BBIV175, BBIV177, BBIV197, BBIV207, BBIV242, HHIV025 y HHIV029.

¹⁷⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV177; testimonio original recabado por el ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002.

¹⁷⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV144 y BBIV155.

¹⁷⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV144 y BBIV155; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002.

114. En este sentido, la decisión de prohibir el ingreso a su propio país ha violado el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar. También ha afectado a los familiares que permanecen en el país, especialmente personas adultas mayores, niños y niñas, que dependen económicamente de quienes no han podido regresar a Nicaragua¹⁸⁰. El Grupo también ha podido documentar las consecuencias, a veces graves, en la salud de las personas afectadas, en particular su salud mental¹⁸¹.

115. A esto se le suma la imposibilidad de las víctimas de acogerse a la protección diplomática y consular efectiva del Estado de su nacionalidad¹⁸² y de acceder a la renovación de un pasaporte en los consulados de Nicaragua. El grupo conoce al menos cuatro casos en los cuales el proceso de renovación del pasaporte de nicaragüenses en el extranjero lleva cerca de seis meses sin tener ninguna respuesta de los consulados respectivos¹⁸³, pese a las solicitudes insistentes de información. Además, el Grupo de Expertos ha recibido información sobre las dificultades que han tenido algunas personas para poder resolver su situación migratoria de manera expedita, ya que la única forma que tienen de poder acceder a la protección internacional es solicitando asilo. Mientras se resuelve su situación migratoria, las personas nicaragüenses a quienes se les ha prohibido su ingreso al país y que no cuentan con otra nacionalidad o permiso de residencia en otro país, no se pueden acoger a ningún tipo de protección internacional de ningún Estado¹⁸⁴.

116. Debido a todas las consecuencias que la prohibición de entrada al país conlleva para la garantía de sus derechos humanos, las víctimas pueden considerarse apátridas *de facto*¹⁸⁵ al enfrentarse a una situación similar a la de un apátrida, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954¹⁸⁶. Si bien no existe un régimen jurídico de protección específico para la llamada apatridia *de facto*, las personas consideradas como apátridas *de facto* están cubiertas por las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos¹⁸⁷ y son susceptibles de las mismas protecciones ofrecidas para las

¹⁸⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV025, EEIV093, BBIV151, BBIV154, BBIV175, BBIV177; testimonio original tomado por el ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV006.

¹⁸¹ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV019, HHIV025.

¹⁸² Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV025, EEIV093, BBIV151, BBIV154, BBIV175, BBIV177; testimonio original tomado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV006.

¹⁸³ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV025, HHIV036, BBIV163, BBIV177.

¹⁸⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV107, BBIV108, BBIV176, BBIV281, CCIV084, EEIV067, EEIV077, EEIV078, EEIV079, EEIV089, EEIV148, DDIV059, HHIV019, HHIV025, HHIV027, MMIV10, MMIV011, MMIV025; testimonios originales tomados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002, HHIV006, HHIV010, HHIV015, HHIV020 y HHIV024.

¹⁸⁵ A diferencia del término “apátrida” definido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el término “apatridia *de facto*” no está definido en ningún instrumento internacional y no existe ningún acuerdo internacional específico para esta categoría de personas y la referencia en el Acta Final de la Convención de 1961 es limitada y no vinculante (ver UNHCR, “Handbook on Protection of Stateless Persons – Under the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons”, Ginebra 2014, párr. 7). Las opiniones expertas consideran problemático el término debido a la falta de definición formal que lleva a la aplicación de interpretaciones extremadamente amplias del mismo. El término apátrida *de facto* se vincula al carácter efectivo de la nacionalidad. Aun cuando algunas opiniones expertas consideran que la nacionalidad puede no ser efectiva aun estando dentro del propio país, existe un amplio consenso en considerar apátrida *de facto* a aquellas personas fuera del país de su nacionalidad que no pueden o que, por razones válidas, no están dispuestas a acogerse a la protección de ese país (ver UNHCR, “Expert Meeting – The Concept of Stateless Persons under International Law (“Prato Conclusions”)”, mayo de 2010, parte II, párrs. 1-2). En esta definición, el término “protección” se refiere a la protección diplomática y consular (*Ibid.*, párrs. 2, 7-9). Las “razones válidas” son aquellas definidas en los instrumentos universales y regionales de protección para los refugiados, que reflejan el consenso actual de los Estados al respecto (*Ibid.*, párr. 5).

¹⁸⁶ Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 28 de septiembre de 1954, artículo 1(1) (“A los efectos de la presente Convención, el término “apátrida” designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.”).

¹⁸⁷ UNHCR, “Expert Meeting – The Concept of Stateless Persons under International Law (“Prato Conclusions”)”, párr. 11.

personas apátridas, en los términos definidos en la Convención de 1954 y en la Convención para la Prevención y la Reducción de la Apatridia de 1961¹⁸⁸.

117. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que los actos descritos en esta sección constituyen patrones sistemáticos y generalizados de violaciones por parte del Gobierno de Nicaragua del derecho a entrar en el propio país, el cual forma parte del derecho a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua. Asimismo, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que estas violaciones se han cometido con la intención de discriminar a personas opositoras o percibidas como tales y a sus familiares. El Grupo recuerda que varias de las personas a quienes se les prohibió regresar a Nicaragua fueron víctimas previamente de hostigamientos, amenazas a ellas y sus familiares, y otras violaciones de sus derechos humanos.

D. El exilio masivo

118. Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados demuestran que, mientras entre 2013 y 2017 el crecimiento del número de personas nicaragüenses solicitantes de asilo a nivel mundial se mantuvo relativamente gradual, entre 2017 y 2018 el crecimiento de solicitantes de asilo aumentó drásticamente, entre 2018 y 2023.¹⁸⁹

119. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó que, a junio de 2023, había 271.740 nicaragüenses solicitantes de asilo y 18.545 habían sido reconocidos como refugiados¹⁹⁰. Los países que han recibido el mayor número de solicitudes de asilo de personas nicaragüenses son: Costa Rica, los Estados Unidos, Panamá, España y México¹⁹¹.

120. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados considera que es probable que las personas nicaragüenses pueden entrar en el ámbito de aplicación de los criterios más amplios del reconocimiento de la condición de refugiado contenidos en la Declaración de Cartagena¹⁹², a causa de que sus vidas, su seguridad o su libertad se han visto amenazadas por una violación masiva de derechos humanos o, alternativamente, por acontecimientos que perturban gravemente el orden público¹⁹³.

121. Este organismo internacional estima que la situación imperante en Nicaragua puede caracterizarse como una violación masiva de los derechos humanos o, alternativamente, como circunstancias que perturban gravemente el orden público. Para ello, incluye dentro de los indicadores de su análisis la magnitud del desplazamiento forzado, con más de 260.000 personas que han salido de Nicaragua a junio de 2022, el número de medidas cautelares y provisionales que han otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, y los diferentes informes publicados por órganos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal de protección de los derechos humanos como del interamericano¹⁹⁴.

¹⁸⁸ El Acta Final de la Conferencia de 1961 establece en su Resolución núm. I la recomendación de “que las personas apátridas *de facto* sean tratadas, en la medida de lo posible tratadas como apátridas *de iure* para que puedan adquirir una nacionalidad efectiva” (989 UNTS 175, pág. 279).

¹⁸⁹ Ver: UNCHR <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=AnPmE8>.

¹⁹⁰ <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=eAHYH9>

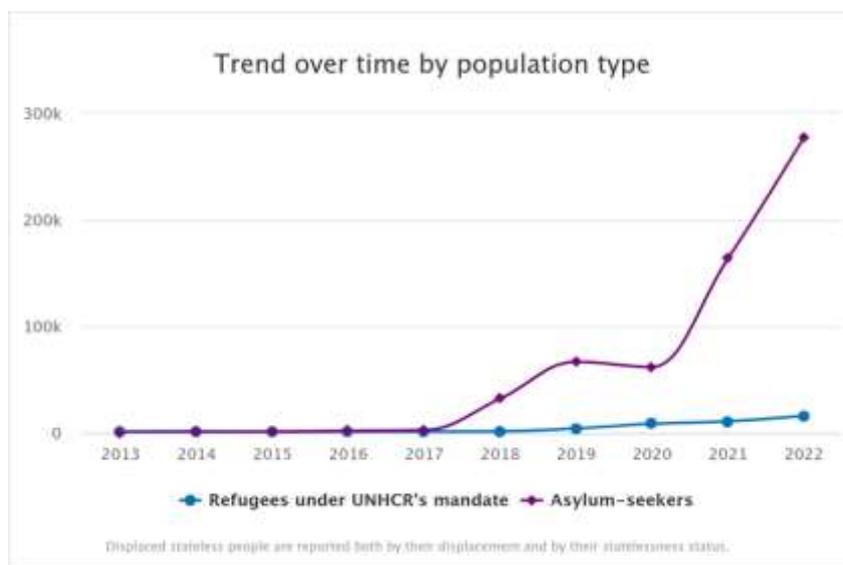
¹⁹¹ Ver: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=ge2A2m>.

¹⁹² ACNUR, “Consideraciones de protección internacional con respecto a las personas que huyen de Nicaragua, HCR/PC/2023/01”, pág. 8.

¹⁹³ Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 22 de noviembre de 1984, párr. III (3). El concepto ampliado establece que se considera “[...] también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

¹⁹⁴ ACNUR, “Consideraciones de protección internacional con respecto a las personas que huyen de Nicaragua, HCR/PC/2023/01”, pág. 49 y ss.

Tendencias de crecimiento de los solicitantes de asilo y refugiados nicaragüenses, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados



Datos disponibles en: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=AnPmE8>.

122. El Grupo de Expertos ha podido documentar 166 casos de personas opositoras o percibidas como tales que se han visto obligadas a salir del país desde 2018, y ha podido determinar, entre otros: los siguientes patrones de violaciones por parte del Estado en las razones aducidas por estas personas respecto a su salida: a) riesgo inminente de detención¹⁹⁵; b) vigilancia y amenazas constantes¹⁹⁶; c) ataques contra su vida o integridad personal¹⁹⁷; d) miedo a ser privado de libertad vinculado con la detención previa de familiares, colegas u otras personas allegadas¹⁹⁸; e) cancelación de la personalidad jurídica y/o cierre de las organizaciones sin fines de lucro o medios de comunicación donde trabajaban¹⁹⁹; f) represión

¹⁹⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV017, BBIV001, BBIV008, BBIV019, BBIV028, BBIV053, BBIV054, BBIV066, BBIV087, BBIV092, BBIV095, BBIV100, BBIV125, BBIV135, BBIV138, BBIV140, BBIV141, BBIV146, BBIV148, BBIV153, BBIV163, BBIV166, BBIV187, BBIV207, BBIV284, BBIV292, BBIV286, BBIV287, BBIV289, BBIV299, BBIV301, CCIV033, CCIV130, DDIV122, DDIV159, DDIV167, DDIV154, DDIV009, DDIV015, DDIV016, DDIV017, DDIV019, DDIV020, DDIV022, DDIV028, DDIV036, EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV008, EEIV011, EEIV012, EEIV014, EEIV015, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV084, EEIV094, EEIV095, EEIV096, EEIV098, HHIV019, MMIV007; MMIV021; MMIV024; MMIV027; MMIV032, MMIV034, MMIV036, MMIV037, y MMIV043; y testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV013, HHIV030, HHIV031, HHIV035, HHIV032.

¹⁹⁶ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV017, BBIV016, BBIV092, BBIV110, BBIV105, BBIV123, BBIV131, BBIV144, BBIV153, BBIV166, BBIV172, BBIV173, BBIV176, BBIV183, BBIV191, BBIV192, CCIV127, CCIV128, CCIV129, CCIV131BBIV048, CCIV033, CCIV244, DDIV083, DDIV084, DDIV092, DDIV093, DDIV094, DDIV155, DDIV157, DDIV212, DDIV169, DDIV156, DDIV142, DDIV102, DDIV143, DDIV184, DDIV169, DDIV013, DDIV032, EEIV094, EEIV095, EEIV096, EEIV099, EEIV100, EEIV124, EEIV132, EEIV133, EEIV135, EEIV136, EEIV139, EEIV140, EEIV141, EEIV142, EEIV143, EEIV144, EEIV146, EEIV149, EEIV150, EEIV151, EEIV152, EEIV154, EEIV155, EEIV156, EEIV161, EEIV162, EEIV163, EEIV170, EEIV171 y EEIV172, MMIV007; MMIV021; MMIV024; MMIV027; MMIV029, MMIV031, MMIV033; MMIV034; MMIV036; MMIV043, HHIV025, HHIV027, MMIV027; y testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV023.

¹⁹⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV053, BBIV054, BBIV102, BBIV148, BBIV237, DDIV018, MMIV021, y MMIV029; testimonio original recabado por ACNUDH HHIV020.

¹⁹⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV066, BBIV176, BBIV289, BBIV316, DDIV100, DDIV099 y MMIV043; testimonio original recabado por ACNUDH HHIV034.

¹⁹⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV065, BBIV045, BBIV136, BBIV197, CCIV225, DDIV157, MMIV042, y MMIV043.

en el contexto de procesos electorales²⁰⁰; g) por ser familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de los hechos de 2018²⁰¹; y h) por ser familiares de las 317 personas que fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad por traición a la patria en febrero de 2023 (222 de las cuales fueron expulsadas a los Estados Unidos)²⁰². La mayoría de estas personas tuvieron que salir del país por puntos no convencionales, poniendo en riesgo su vida e integridad personal y la de las personas que las acompañaban, incluso menores de edad.

Caso de Sofía Montenegro y Azahalia Solís

Sofía Isabel Montenegro Alarcón es una reconocida periodista, feminista y activista nicaragüense. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1978. En 1979, se convirtió en editora internacional del diario oficial *Barricada*, posición que mantuvo hasta 1994. En 1995, fundó junto con Carlos Fernando Chamorro el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), un centro de medios de comunicación alternativos que, a su vez, realizaba investigación, entre otros, en temas de movimientos sociales y sociedad civil, así como monitoreo de los medios de comunicación del sistema nacional. Montenegro fue cofundadora de un programa de radio (*Onda Local*), un programa de televisión (*Esta noche*) y del *Confidencial*, un medio impreso del cual fue columnista y que hoy en día existe solo a nivel virtual²⁰³. Fue también cofundadora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). En la década de los 90, Sofía Montenegro perteneció a la corriente democratizadora del Frente Sandinista que proponía procesos de modernización del partido y cambio de su liderazgo tras los diez años de guerra y la derrota electoral de 1990. En el marco de una “gran purga” que comenzó en 1991, Daniel Ortega expulsó del partido a la mayoría de esta corriente democratizadora. Montenegro también fue removida del diario *Barricada*. En 1994, Ortega tomó las oficinas del diario y terminó sacando al 90 por ciento de su antigua redacción en un esfuerzo por controlar la información. De acuerdo con Montenegro, desde aquel momento inició el hostigamiento en su contra²⁰⁴.

Azahalia Isabel Solís Román es abogada, feminista y activista/defensora de derechos humanos nicaragüense de larga y reconocida trayectoria. Solís es cofundadora del Movimiento Autónomo de Mujeres y de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) e integrante de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras. En el marco del estallido de la crisis social, política y de derechos humanos en el país formó parte de la mesa del Diálogo Nacional como representante de la sociedad civil²⁰⁵ y posteriormente participó en la conformación de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia. En su capacidad de abogada, participó en las campañas de concientización de la sociedad civil en relación con las irregularidades e implicancias de la Ley núm. 840 sobre la construcción del gran canal interoceánico y lideró acciones de incidencia para su derogación. Su distanciamiento del Frente Sandinista de

²⁰⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV103, BBIV104, BBIV288, y MMIV033; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV013 y HHIV006.

²⁰¹ Entrevistas del Grupo de Expertos DDIV001, DDIV003, DDIV013, DDIV029, y MMIV021; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV031.

²⁰² Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV057, BBIV154, BBIV262, MMIV042, y MMIV043; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV008.

²⁰³ Ver A/HRC/52/CRP.5 párrs. 731, 733, 803 a 804.

²⁰⁴ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181. Ver también *El País*, “El asalto al diario *Barricada*”, 18 de noviembre de 1994, disponible en: https://elpais.com/diario/1994/11/18/internacional/785113220_850215.html; Héctor Cruz Feliciano et Armando Chaguaceda, “Los intelectuales públicos y el Frente Sandinista en Nicaragua: presencia, desencuentros y actualidad (1990-2012)”, *Cahiers des Amériques Latines*, 2013, párr. 15, disponible en: <https://doi.org/10.4000/cal.3021>.

²⁰⁵ Café con voz Nicaragua, “Azalea Solís habla sin tapujos sobre el Diálogo Nacional y la agenda del mismo”, 25 de mayo 2018, video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Fh76OTBCJnY>.

Liberación Nacional inició desde la década de los 90 tras su involucramiento con el movimiento de las mujeres y la defensa de los derechos humanos.

En 1998, el Movimiento Autónomo de Mujeres brindó apoyo a Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo, tras haber denunciado abusos sexuales por su padrastro Daniel Ortega²⁰⁶. El caso de Narváez Murillo constituyó un hito particular en el proceso de ruptura de Montenegro y Solís y del movimiento de las mujeres con el Frente Sandinista y el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo²⁰⁷. Montenegro sostiene que Murillo, a cambio de cuotas de poder, defendió a Ortega de manera vehemente en contra de la denuncia presentada por Narváez, al mismo tiempo que apoyó el Pacto Ortega-Alemán que le garantizó a Ortega la inmunidad parlamentaria²⁰⁸.

Cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007, los medios independientes que formaban CINCO adoptaron una postura crítica frente la regresión autoritaria impulsada por el Frente Sandinista. Dicho posicionamiento fue la razón por la que, en 2008, tanto Montenegro como Carlos Fernando Chamorro y su equipo fueron acusados de lavado de dinero y triangulación de fondos²⁰⁹. Las acusaciones afectaron a la fundación de diversas maneras, paralizando su trabajo por seis meses. Las oficinas de CINCO fueron allanadas por la policía que confiscó cerca de 50.000 folios, documentos de investigación y computadoras; las cuentas bancarias de la fundación y la cuenta personal de Montenegro fueron intervenidas. La oficina del Movimiento Autónomo de Mujeres fue allanada en 2008, en la misma fecha en que fueron allanadas las oficinas de CINCO con base en las mismas acusaciones de lavado de dinero y triangulación de fondos²¹⁰.

Tras la represión violenta de las protestas de 2018 y las detenciones masivas de manifestantes y personas opositoras o percibidas como tales, Montenegro y Solís se involucraron en el apoyo a las personas encarceladas y a sus familiares, mientras se mantenían activas y críticas en las redes sociales y medios de comunicación. Montenegro siguió redactando sus artículos críticos de las políticas represivas del Gobierno en el Confidencial²¹¹. Por su parte, Solís se involucró activamente en la defensa jurídica de las personas arbitrariamente detenidas a partir de la crisis de 2018. Su activismo y solidaridad con las personas detenidas provocó la intensificación de los actos de hostigamiento empleados en su contra²¹².

²⁰⁶ La República, “Feministas impulsan campaña contra Ortega”, 20 de agosto de 2008, disponible en: <https://www.larepublica.net/noticia/feministas-impulsan-campana-contra-ortega>. Ver también El País, “Soy víctima de una persecución del Estado”, 3 de julio de 2013, disponible en: https://elpais.com/internacional/2013/07/03/actualidad/1372858005_148429.html.

²⁰⁷ A/HRC/52/CRP.5, párr. 903. La reforma al aborto en el 2006, apoyada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional marcó otro hito de este distanciamiento. Durante las elecciones presidenciales de 2006, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) decidió aliarse con el partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, actualmente UNAMOS).

²⁰⁸ A/HRC/52/CRP.5, párr. 77. Divergentes, “Las ‘enemigas’ de la copresidenta Rosario Murillo”, 15 de agosto de 2023, disponible en: <https://www.indomables.org/desautorizadas/lasenemigas>; BBC Mundo, “Para mí, Daniel Ortega se quedó como el abusador y Rosario Murillo como la madre que fue su cómplice: Zoilamérica Narváez y el testimonio que sacudió a Nicaragua”, 6 de marzo 2019, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47469155>.

²⁰⁹ Las acusaciones fueron basadas en el hecho de que CINCO facilitaba el uso de su infraestructura administrativa para recibir fondos de la cooperación internacional destinados a pequeñas organizaciones de mujeres que no contaban con dicha capacidad (Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181. Ver también El País, “¿Sociedad civil o sociedad servil?”, 18 de octubre 2008, disponible en: https://elpais.com/diario/2008/10/18/internacional/1224280805_850215.html).

²¹⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos EEIV181 y EEIV182. Ver también El País, “La deriva autoritaria de Ortega, 18 de octubre 2008”, disponible en: https://elpais.com/diario/2008/10/18/internacional/1224280804_850215.html.

²¹¹ El Confidencial, “Mónica Baltodano (Popol Na) y Sofía Montenegro (Cinco): la resistencia de las ONG”, 12 de diciembre 2019, video disponible en: https://youtu.be/jew-H2bVNk4?si=1rBvROGKH_Wjx1JX.

²¹² Entrevista del Grupo de Expertos EEIV182.

A finales de 2018, por la vía de la tramitación de urgencia, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de CINCO y otras ocho organizaciones que habían sido particularmente críticas del Gobierno²¹³. Por otro lado, Solís fue sometida a una campaña de estigmatización y difamación a través de medios de comunicación y redes sociales oficialistas, y recibió constantes amenazas y hostigamiento por parte de personas afines al gobierno²¹⁴.

Al mismo tiempo, el Gobierno incrementó el seguimiento a sus personas, a tal punto que su vida se asimilaba a un régimen de casa por cárcel. Montenegro y Solís, que cohabitaban, vivían bajo constante vigilancia. Las dos mujeres tenían una patrulla de policía estacionada permanentemente en la entrada de su condominio, además de un retén policial que registraba cada visita, incluso el ingreso de los empleados al mismo. La constante vigilancia llegó a tal punto que les era imposible hacer cualquier actividad cotidiana. Debido al miedo que esto les generaba de ser secuestradas, detenidas o desaparecidas por policías o integrantes de grupos progubernamentales, Montenegro decidió contratar a un chofer quien, en dado caso, pudiera ser testigo de los hechos:

Todo el tiempo nos tenían vigiladas, incluso llegó un momento que ya no podíamos salir de la casa porque teníamos siempre paramilitares que nos seguían para ir al super, para ir a una consulta médica a donde quiera que fuéramos. Siempre tenía los paramilitares en moto, detrás de mi carro, o nos esperaban en la salida del super y después teníamos policías en las entradas del condominio, entonces era un riesgo salir a la calle. Yo caminaba todos los días en la mañana con mi perra, y ya tampoco lo pude hacer durante años por temor a que me secuestraran y yo solía salir muy temprano antes, incluso antes de que saliera el sol yo andaba en la calle caminando, pero el riesgo del secuestro y que nadie se diera cuenta era muy alto y entonces dejé de salir²¹⁵.

Este estado de terror permanente hizo que Montenegro tuviera que estar bajo tratamiento médico por sufrir de un altísimo nivel de estrés; tuvo que parar de trabajar y de participar en reuniones, y estuvo medicada con ansiolíticos y somníferos para poder hacer frente a esta constante tensión: “Así pude disminuir los niveles de adrenalina, cortisona y furia y resistir con algún nivel de ecuanimidad en este período.” Solís tuvo implicaciones para su salud mental y al día de hoy sigue en tratamiento psicológico²¹⁶.

Aun con esta grave situación de hostigamiento y vigilancia, ambas mujeres permanecieron en Nicaragua hasta el 15 de febrero 2023, día en que el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró a 94 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses traidores a la patria y prófugos de la justicia, y ordenó la privación de su nacionalidad, y el decomiso de sus bienes²¹⁷. En este

²¹³ El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Popol Na, el Instituto de Liderazgos de la Segovia, y la Fundación del Río (A/HRC/52/CRP.5, párr. 719). De esas organizaciones, cinco eran dirigidas por mujeres. Ver también Confidencial, “Mónica Baltodano (Popol Na) y Sofía Montenegro (Cinco): la resistencia de las ONG”, 12 de diciembre de 2019, video disponible en: <https://youtu.be/jew-H2bVNk4?si=NrckDG6kMZMmU-Dr>.

²¹⁴ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV182; documentos en el archivo del Grupo de Expertos EEDOC537, EEDOC538 y EEDOC539. Ver también Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, “#AlertaDefensoras NICARAGUA / Amenazas, hostigamiento, campañas de difamación, estigmatización y criminalización contra Azahalia Solís, abogada feminista y defensora de los derechos humanos”, disponible en: <https://im-defensoras.org/2018/09/alertadefensoras-nicaragua-amenazas-hostigamiento-campanas-de-difamacion-estigmatizacion-y-criminalizacion-contra-azahalea-solis-abogada-feminista-y-defensora-defensora-de-los-derechos-humanos/>.

²¹⁵ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181. Ver también Confidencial, “Sofía Montenegro y Azahalea Solís: Evitar el exilio fue un acto de resistencia y solidaridad”, 13 de marzo de 2023, video disponible en: <https://youtu.be/MbpeNP45CDw?si=gYtd4cMwqrN23SKR>.

²¹⁶ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV182.

²¹⁷ El 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua decretó la “deportación inmediata” de 222 presos políticos, que fueron trasladados a los Estados Unidos. Al día siguiente, el Gobierno declaró

listado se encontraban las tres únicas mujeres que todavía permanecían en el país: Montenegro, Solís y la abogada y activista de derechos humanos Vilma Núñez.

Ante la alta probabilidad de una inminente detención, Montenegro y Solís tomaron la decisión, ese mismo día, de salir del país. Aprovecharon el cambio de turno de la policía que las vigilaba para salir y refugiarse en una casa de seguridad hasta la madrugada del día siguiente, cuando cruzaron la frontera con Costa Rica por punto ciego²¹⁸. Según Montenegro:

Nos fuimos con lo que llevamos puesto a una casa de seguridad [...] No hubo tiempo ni de hacer una maleta de ropa, ni cepillo de dientes, nada solo agarramos pasaportes, pruebas de vacuna, una chaqueta, nos pusimos los tenis y salimos en cuanto la persona llegó. Mi casa quedó con todo puesto, ahí quedó mi carro, quedó todo el menaje de la casa, todo quedó ahí²¹⁹.

El decomiso de los bienes de Montenegro – que incluían su casa de habitación en Managua, su vehículo y su pensión de jubilación – se ejecutó el 17 de febrero de 2023, solo días después de su salida. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus tarjetas bloqueadas²²⁰. De igual forma, la pensión de jubilación de Solís fue anulada y sus cuentas bancarias y tarjetas bloqueadas. Montenegro relató al Grupo de Expertos que:

Me congelaron las cuentas en el Banco, así que literalmente venía con una mano adelante y la otra atrás, y a los 70 años eso no es fácil. Los bancos encima me cancelaron mis tarjetas de crédito que estaban al día, así que en realidad yo aquí no tenía de dónde echar mano absolutamente. Y si no fuera por la solidaridad de los nicaragüenses aquí, de una serie de personas de Costa Rica y organizaciones de solidaridad, pues lamentablemente hubiera sido peor de lo que fue²²¹.

Posterior a la confiscación de la casa de Montenegro, el Ministerio Público notificó a los demás propietarios del condominio que sus casas quedaban también confiscadas y les pidió decidir si quedaban con la condición de pagarle alquiler al Estado o si se iban del mismo²²².

“traidoras de la patria” a las personas liberadas y les privó de la nacionalidad nicaragüense. El 15 de febrero, otras 94 personas fueron privadas de su nacionalidad (A/HRC/52/CRP.5, párr. 317).

²¹⁸ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181. Ver también Divergentes, “La periodista Sofía Montenegro y la abogada Azahalea Solís salen de Nicaragua”, 22 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.divergentes.com/la-periodista-sofia-montenegro-y-la-abogada-azahalea-solis-salen-de-nicaragua/>; Artículo 66, “Sigo siendo Nica hasta las cachas” dice Sofía Montenegro tras ser expatriada, confiscada y salir al exilio”, 23 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/02/23/sofia-montenegro-expatriada-confiscada-exilio-nicaragua-apatrida-azahalea-solis/>; Artículo 66, “Feministas Azahalea Solís y Sofía Montenegro salen de Nicaragua”, 22 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/02/22/feministas-azahalea-solis-sofia-montenegro-salen-nicaragua/>; El País, “El grito de las feministas Nicaragüenses desterradas: “Vamos a marchar en libertad en Costa Rica”, 8 de marzo de 2023, disponible en: <https://elpais.com/internacional/2023-03-08/el-grito-de-las-feministas-nicaraguenses-desterradas-vamos-a-marchar-en-libertad-en-costa-rica.html>.

²¹⁹ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181.

²²⁰ A/HRC/52/CRP.5, párr. 774. Ver Nicaragua Actual, “Feministas Azahalea Solís y Sofía Montenegro denuncian a magistrados por confiscación de sus bienes”, 10 de marzo de 2023, video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=7jiHkUYrmfQ>; La Prensa, “Régimen orteguista congela las cuentas bancarias de periodistas nicaragüenses”, 15 de marzo 2023, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/03/15/politica/3119735-regimen-congela-tres-cuentas-bancarias-del-periodista-anibal-toruno>.

²²¹ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181.

²²² Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181. Ver también La Prensa, “Régimen se robó edificio donde vivían Sofía Montenegro y Azahalea Solís”, 18 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/02/18/politica/3108552-regimen-se-robo-edificio-donde-vivia-la-periodista-sofia-montenegro>; Confidencial, “Confiscan 16 viviendas y allanan casa de Sofía Montenegro y Azahalea Solís”, 18 de febrero de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/confiscan-16-viviendas-y-allanan-casa-de-sofia-montenegro-y-azahalea-solis/>.

Las 16 familias de propietarios – algunas de ellas incluso afines al Gobierno – tuvieron que abandonar sus viviendas, mientras el guardia del condominio quedó arrestado y detenido durante diez días, porque, según la policía, mintió cuando se le preguntó si Montenegro y Solís estaban todavía en su casa.

Hoy en día, un año después de su salida de Nicaragua, Montenegro se refiere al alto costo emocional del exilio:

Al menos estoy libre, disfruto enormemente el hecho de poder pasear con tranquilidad, para consolarme me digo que este exilio, este destierro, lo voy a pensar como las vacaciones que nunca tuve en mi vida, de no hacer nada, de no tener trabajo, porque ¿quién le va a dar trabajo a una mujer de 70 años con los papeles a medio camino? es difícil. Pero yo creo que parte de la sanidad mental es tener gratitud por toda esta gente que se arriesgó por nosotras²²³.

Caso de Francisca Ramírez

El Grupo de Expertos también documentó el caso de Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anti-canal, primera coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, y defensora de los derechos humanos²²⁴. Ramírez se encuentra entre las 94 personas que fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense y declaradas prófugas de la justicia mediante la resolución emitida el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de Managua.

En septiembre de 2018, Ramírez tuvo que exiliarse en Costa Rica por las amenazas de muerte que había recibido, tanto en su contra como en contra de sus familiares, tras su participación y liderazgo en protestas campesinas a partir de 2013 y, en particular, en 2018. Ramírez es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2017 por encontrarse en una situación de grave riesgo por su desempeño como defensora campesina de los derechos humanos²²⁵.

La vigilancia y hostigamiento en contra de Ramírez fue una constante desde el momento que asumió el liderazgo del movimiento campesino anti-canal y se intensificó a partir de 2018. Ella cuenta que el Estado empleó diferentes medios para intimidarla, incluyendo: amenazas contra ella, sus hijos y familiares; la confiscación de sus medios de producción y empleo; la obstaculización de trámites administrativos suyos y de sus familiares; la confiscación de la pensión de su esposo; y detenciones y controles constantes en retenes de la Policía Nacional y del Ejército. Dicho hostigamiento se agudizó después del desmantelamiento de los tranques en julio de 2018²²⁶.

Una de las varias amenazas que Ramírez recibió se llevó a cabo el 13 de julio de 2018 cuando Edén Pastora, militante histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo durante una entrevista en el programa “Revista en Vivo” del Canal 4, canal de televisión abierta de ámbito nacional propiedad del presidente y la vicepresidenta: “La Chica Ramírez anda

²²³ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV181.

²²⁴ El País, “Doña Francisca, el azote contra la Nicaragua de Ortega”, 28 de abril 2018, disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/04/28/eps/1493330752_149333.html.

²²⁵ Particularmente representó a las personas cuyos territorios habrían resultado afectados por la construcción del canal interoceánico. Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 33/2017, Medida Cautelar no. 331-17, Francisca Ramírez y familiares respecto de Nicaragua, 22 de agosto de 2017.

²²⁶ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV095. Voz de América, “Lideresa campesina de Nicaragua dirige campamento de exiliados en Costa Rica”, 16 de diciembre 2022, disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/a/una-lider-campesina-de-nicaragua-dirige-un-campamento-de-exiliados-en-costa-rica/6878961.html>.

buscando que la encarcelen y que la maten porque ya mucho molesta primero con lo del canal y ahora con esto”²²⁷.

Ramírez estuvo escondida en una casa de seguridad en Managua, los últimos dos meses antes de su salida definitiva del país, ya que era imposible para ella volver a su comarca La Fonseca en el municipio de Nueva Guinea sin correr el riesgo de ser detenida y privada de su libertad. En septiembre 2018 cruzó por punto ciego a Costa Rica junto con su familia y se asentó en Upala en donde ella y su familia viven con otras personas exiliadas en un campamento que Ramírez organizó en esta zona fronteriza del país²²⁸.

Junto con la privación de nacionalidad en febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones ordenó el decomiso de sus bienes y las autoridades procedieron a confiscar todas sus propiedades – cerca de 200 manzanas de tierra en dos diferentes ubicaciones inscritas a nombre suyo y de su esposo–. Además, confiscaron su casa y las casas de sus hijos y dos lotes de sus hijos menores. Su cuenta bancaria fue congelada²²⁹.

123. Frente a los patrones antes mencionados, en casos similares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la omisión del Estado de investigar amenazas, incluso provenientes de actores no estatales, y proveer las garantías para que la persona pueda transitar y residir libremente en el territorio puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado²³⁰. La Corte también estableció la responsabilidad del Estado en los casos en los que familias se habían visto obligadas a emigrar a otro país por temor a que otro miembro de la familia sufriera una violación de sus derechos humanos similar a la ocurrida a un familiar cercano²³¹. También determinó que, en los casos de familiares que salieron al exilio por la falta de investigación y esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos y las amenazas recibidas posteriormente al exigir justicia, el Estado había violado el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza el derecho de libre circulación y residencia²³². Asimismo, en el caso *Cepeda Varga vs Colombia*²³³ la Corte analizó expresamente la responsabilidad del Estado por el exilio de sus ciudadanos cuando no encuentran protección en su propio Estado y se ven obligadas a buscarla en otro país. Este caso desarrolla un estándar importante en materia de asilo al identificar en el exilio una violación autónoma de derechos que debe agregarse a las demás violaciones sufridas.

124. Los casos documentados por el Grupo de Expertos muestran que las personas que tomaron la decisión de salir lo hicieron como respuesta a las prácticas y políticas del Gobierno de Nicaragua implementadas con el fin de silenciar a cualquier persona que manifiesta de manera virtual o a viva voz su opinión contraria a las acciones del Gobierno o

²²⁷ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV095. Ver Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Alerta Defensoras, 14 de julio de 2018, disponible en: <https://im-defensoras.org/2018/07/alertadefensoras-nicaragua-graves-amenazas-contra-la-defensora-francisca-ramirez/>; y El País, “Vamos a volver a Nicaragua para sacar a Daniel Ortega”, 12 de octubre de 2018, disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/10/10/actualidad/1539206356_129909.html.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Entrevista del Grupo de Expertos EEIV095.

²³⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de noviembre de 2018, Serie C No. 370, párr. 274, y *Caso Fleury y otros Vs. Haití*, Fondo y Reparaciones, Sentencia del 23 de noviembre de 2011, Serie C No. 236, párr. 93.

²³¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala*, Reparaciones y Costas, Sentencia del 3 de julio de 2004, Serie C No. 108, párrs. 69 y 70.

²³² Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 26 de mayo de 2019, Serie C No. 213, párr. 274, y *Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 3 de septiembre de 2012, Serie C No. 248, párrs. 220 a 224.

²³³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 26 de mayo de 2019, Serie C No. 213, párr. 274.

que defiende sus derechos humanos o los de las demás. En todos los casos documentados, antes de tomar la decisión de salir del país, las personas – o sus familias – fueron víctimas de una o varias de violaciones y abusos de derechos humanos incluyendo hostigamiento y vigilancia continuas, y amenazas. Muchas de ellas fueron detenidas en el marco de operativos ilegales de detenciones masivas y de la política de “país/ciudad por cárcel”, donde son obligados a presentarse diariamente y en un horario específico a firmar un libro en la sede de la Policía Nacional que les corresponda²³⁴. Otras víctimas sufrieron actos de represión a raíz del cierre de la Universidad Centroamericana y otras universidades privadas clausuradas²³⁵, de la “purga” del poder judicial²³⁶, de las detenciones masivas de sacerdotes y laicos ocurridas entre mayo, octubre y noviembre de 2023²³⁷. Finalmente, varias víctimas son abogados que han representado a personas privadas de libertad arbitrariamente y que, debido a su trabajo han sido objeto de vigilancia y amenaza constante²³⁸. El Grupo de Expertos ha documentado cinco casos de abogados y abogadas defensores de personas opositoras que huyeron del país al ser advertidos por contactos de confianza de que pesaba una orden de detención en su contra, algunos huyeron por punto no convencional²³⁹.

125. El Grupo de Expertos recuerda que el Estado de Nicaragua está obligado a garantizar la protección de cualquier persona que se encuentre legalmente en su territorio; es decir, la obligación de ofrecer garantías para que las personas puedan circular y residir libremente con plena protección de sus derechos humanos. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado de forma sistemática y generalizada, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, consagrado en el artículo 12 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de cientos de personas opositoras o percibidas como tales que se han visto imposibilitadas a permanecer en el país.

E. La prohibición de salida del propio país

126. El Grupo de Expertos también ha documentado 3 casos de prohibición de salida del país de nicaragüenses²⁴⁰, incluida una persona con doble nacionalidad²⁴¹, así como 18 casos de confiscación de pasaportes de las personas: 1) al momento de salir o entrar por un punto fronterizo oficial – especialmente el aeropuerto internacional de Managua y el cruce fronterizo Peñas Blancas con Costa Rica²⁴²; 2) al momento de ser allanadas las residencias sin orden judicial; y 3) en las mismas oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería al intentar realizar trámites de renovación de sus pasaportes²⁴³. Las personas a las que se les ha prohibido la salida del país y/o a las que se les ha retenido el pasaporte son personas opositoras o percibidas como tales por el Gobierno y pertenecen a sectores heterogéneos de la sociedad, incluyendo periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, familiares de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en febrero 2023, empresarios, académicos, y miembros de partidos políticos de oposición, entre otros. Si bien se determinó la existencia de casos desde 2021, el Grupo de Expertos ha

²³⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos DIV084 y EEIV096.

²³⁵ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV223, BBIV225, BBIV135, BBIV163, BBIV189, BBIV192, BBIV284 y BBIV299.

²³⁶ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV286, BBIV287 y BBIV289.

²³⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV026 y HHIV027.

²³⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos EEIV008, EEIV014, EEIV044, EEIV052 y EEIV070.

²³⁹ Entrevistas del Grupo de expertos EEIV008, BBIV092, BBIV125, BBIV207 y BBIV292.

²⁴⁰ La Prensa, “Migración impide la salida de Monseñor Silvio Fonseca en el aeropuerto de Managua”, disponible en: <https://www.laprensani.com/2021/11/07/politica/2906409-migracion-impide-salida-de-monsenor-silvio-fonseca-en-el-aeropuerto-de-managua#:~:text=Me%20dirig%C3%ADa%20a%20Estados%20Unidos,lo%20tengo%20resguardado%20%80%9D%2C%20asegur%C3%B3>; Nicaragua Actual, “Prohíben salida del país a reverendo Guillermo Osorno, ex aspirante presidencial”, disponible en: https://nicaraguaactual.tv/prohiben-salida-pais-reverendo-guillermo-osorno-ex-aspirante-presidencial/#google_vignette.

²⁴¹ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV153.

²⁴² Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV089, y BBIVI 172.

²⁴³ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV035, BBIV050, BBIV166 y BBIV176, BBIV288, HHIV018 y HHIV021.

observado que las prohibiciones de salida del país y confiscaciones de pasaportes han venido incrementándose en 2022 y 2023, constituyéndose en un nuevo patrón de represión²⁴⁴.

127. El Grupo de Expertos ha podido determinar el siguiente *modus operandi* cuando se trata de prohibir la salida de nacionales por vía aérea o terrestre. Una fuente del Grupo de Expertos explicó que la Dirección General Migración y Extranjería cuenta con un sistema que le permite identificar a personas que son de interés para el Gobierno tanto a nivel de la oficina de tramitación de pasaportes y visados, como en las ventanillas de los puestos fronterizos. “Salen designados como golpista o azul y blanco”. De la misma manera, a través de la lista de afiliados al INSS, pueden verificar si la persona que intenta viajar fuera de Nicaragua es funcionario o funcionaria del Estado. El funcionariado en Nicaragua tiene prohibición expresa de salir del país sin autorización de la superioridad que es comunicada a Migración y Extranjería²⁴⁵. Otra fuente dijo que cuando fue detenida en un puesto fronterizo terrestre, alcanza a leer en la pantalla un título que decía “Lista de personas a tener en cuenta, en alerta”²⁴⁶.

128. Los puestos fronterizos terrestres utilizan el listado provisto por la Dirección General Migración y Extranjería para identificar a las personas a las que se les debe prohibir la salida del país y a las que, además, deben ser detenidas inmediatamente. En los dos casos, al prohibírseles la salida, también se les confisca el pasaporte. En el primer caso las personas no son detenidas, pero se les indica que deben presentarse en las Oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería para resolver el tema del pasaporte²⁴⁷. Según se informó al Grupo de Expertos, al poner el nombre de la persona viajera en el sistema, éste impide seguir avanzando con el procedimiento migratorio de salida, “ahí aparecía en letras rojas si la persona era opositora del Gobierno”. En ese momento el funcionario a cargo debe enviar un mensaje a la Unidad de Análisis que buscará el historial de la persona y se comunicará con el jefe de Frontera, siendo este quien decide si se deja salir a la persona del país o si, por el contrario, se le detiene por la policía o se le confisca el pasaporte. Se ha informado al Grupo de Expertos que incluso se han llegado a intentar retirar pasaportes de extranjeros²⁴⁸.

129. Una víctima entrevistada por el Grupo de Expertos explicó: “cuando yo fui apresado, la policía hizo un allanamiento en nuestra casa y se llevó todas las identificaciones, los pasaportes míos, de mi esposa, de mis hijos”²⁴⁹. En otro caso, a María Josefina Gurdíán, madre de la opositora Ana Margarita Vijil, le fue prohibida la salida del país con una de sus hijas cuando quiso viajar a Costa Rica para hacerse exámenes médicos en septiembre de 2021. En su caso, en la frontera terrestre con Costa Rica, un oficial de Migración entró al bus donde viajaba, revisó a todos los pasajeros, pero solo les pidió sus pasaportes a ellas dos. Luego les dijeron que no podían continuar el viaje y les confiscaron sus pasaportes. Cuando preguntaron por las razones el oficial les respondió que eran “órdenes de arriba”²⁵⁰.

130. Además, el Grupo de Expertos ha recibido información indicando que ciertos funcionarios públicos deben obtener un permiso previo para salir del país. Una fuente consultada por el Grupo de Expertos informó que a partir de cierto rango los funcionarios del

²⁴⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV056, BBIV153, BBIV176, y BBIV252; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV033.

²⁴⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV012 y BBIV166.

²⁴⁶ Entrevista del Grupo de Expertos HHIV025.

²⁴⁷ La Prensa, “Migración impide la salida de Monseñor Silvio Fonseca en el aeropuerto de Managua”, disponible en: [https://nicaraguaactual.tv/prohiben-salida-pais-reverendo-guillermo-osorno-ex-aspirante-presidencial/#google_vignette](https://www.laprensani.com/2021/11/07/politica/2906409-migracion-impide-salida-de-monsenor-silvio-fonseca-en-el-aeropuerto-de-managua#:~:text=Me%20dirig%C3%ADa%20a%20Estados%20Unidos,lo%20tengo%20resguardado%20E2%80%9D%2C%20asegur%C3%B3; Nicaragua Actual, “Prohíben salida del país a reverendo Guillermo Osorno, ex aspirante presidencial”, disponible en: <a href=).

²⁴⁸ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV153.

²⁴⁹ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV035.

²⁵⁰ Entrevista del Grupo de Expertos AAIV052; Divergentes, “País por cárcel: así secuestra el régimen de Ortega los pasaportes de los nicaragüenses”, 6 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.divergentes.com/pais-por-carcel-asi-secuestra-el-regimen-de-ortega-los-pasaportes-de-los-nicaraguenses/>.

poder judicial deben obtener un permiso entregado por la Presidencia para poder salir del país. Este fue el caso de la magistrada Alba Luz Ramos, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien quiso salir del país en dos ocasiones por razones médicas luego de una autorización escrita del presidente Ortega²⁵¹. En otra ocasión, Ramos pudo salir a un país del Caribe, para una reunión específica de dos días; sin embargo, durante estos días, su hija y esposo estuvieron bajo estricta vigilancia por parte de las autoridades²⁵². El Grupo de Expertos también fue informado de la prohibición de salida del país para vacaciones impuesta contra un funcionario público, so pena de ser despedido a su regreso²⁵³. Otra fuente entrevistada por el Grupo de Expertos indicó: “Alguien me dijo que hay una lista de funcionarios y exfuncionarios que no podemos salir del país y que seguramente estoy ahí [...] Ella me dijo [...] a usted no la van a dejar salir muy seguramente y obvio le van a quitar el pasaporte y todo. Es claro que sin permiso no se puede salir”²⁵⁴. En todo caso, en términos generales, los funcionarios del Estado y sus familiares tienen prohibido salir de Nicaragua²⁵⁵.

131. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado, de forma sistemática y generalizada, el derecho de las personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares, así como de personas funcionarias o ex funcionarias del Gobierno²⁵⁶, a salir de cualquier país, incluso del propio, que también comprende el derecho a viajar a cualquier país que esté dispuesto a permitir el ingreso del viajero, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Expertos considera que la prohibición arbitraria de salir del país puede, además, constituir una violación del derecho a ser libre de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y su familia, consagrado en el artículo 17 del Pacto.

132. La existencia de medidas y procedimientos sistemáticos organizados y aprobados por el Gobierno para evitar la salida de personas del país, como por ejemplo, la existencia de listados con nombres de personas que salen con alertas en el sistema migratorio y los permisos que deben solicitar los funcionarios públicos para salir del país, son elementos que indican que el Gobierno de Nicaragua considera a estas personas una amenaza o peligro político, y del control que quiere ejercer contra ellas. Estas medidas, además, denotan la intención de las altas jerarquías del Estado, de continuar con la persecución y el castigo de las personas que fueron expulsadas y/o privadas arbitrariamente de su nacionalidad y que se encuentran fuera de Nicaragua, a través de sus familiares en Nicaragua, al prohibirles la salida del país con fines de reunificación familiar.

F. La denegación de la emisión o renovación de pasaportes

133. El Grupo de Expertos ha documentado al menos 30 casos de denegación²⁵⁷ y retrasos injustificados²⁵⁸ en cuanto a la expedición o renovación de pasaportes tanto en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en Nicaragua como en los consulados de Nicaragua en el mundo²⁵⁹. Las víctimas identificadas son periodistas, personas defensoras de los derechos humanos en el exilio, familiares de las 317 personas privadas de su nacionalidad en febrero de 2023, académicos, estudiantes, y líderes y lideresas políticas de oposición, entre

²⁵¹ Divergentes, “País por cárcel: así secuestra el régimen de Ortega los pasaportes de los nicaragüenses”, 6 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.divergentes.com/pais-por-carcel-asi-secuestra-el-regimen-de-ortega-los-pasaportes-de-los-nicaraguenses/>.

²⁵² Entrevista del Grupo de Expertos HHIV005.

²⁵³ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002.

²⁵⁴ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV044.

²⁵⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV012, BBIV286 y BBIV287.

²⁵⁶ El Grupo de Expertos no pudo determinar en todos los casos identificados si las personas funcionarias o exfuncionarias a las cuales se le prohibió la salida del país eran opositoras o percibidas como tal.

²⁵⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV050, BBIV051, BBIV056, CCIV084, CCIV088, y DDIV059; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, y HHIV031.

²⁵⁸ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV023.

²⁵⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV028, BBIV035, BBIV043, BBIV050, BBIV059, BBIV060, BBIV103, BBIV163, BBIV176, BBIV177, BBIV252, HHIV036, y HHIV025; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV037.

otros. Como mencionado anteriormente, estas personas tienen como común denominador el ser opositoras al Gobierno o son percibidas como tales.

134. Una víctima de expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad informó al Grupo de Expertos que: “Mi hermano trató de actualizar el pasaporte y no se lo dieron por razones obvias”²⁶⁰. Otra fuente manifestó que:

*Lo que sí podemos decir es que ya desde 2022 nos habían denegado a mi esposo y a mí la renovación de nuestro pasaporte en el consulado de Nicaragua, nos dijeron que teníamos que ir directamente a Managua, cuando ellos saben que estamos en el exilio. Y desde entonces tuvimos que gestionar un documento de viaje, que, dicho sea de paso, tiene muchos problemas en el exterior porque hay algunos países que no lo reconocen como pasaporte. Ya lo constaté yo recientemente en un viaje que hice a países de Suramérica*²⁶¹.

135. El Grupo de Expertos también tuvo conocimiento del caso de la esposa de una de las personas expulsadas a los Estados Unidos en febrero de 2023, cuyo pasaporte estaba en proceso de renovación. Cerca de un mes después de haber iniciado el proceso:

*[E]lla tenía cita para ir a retirar su propio pasaporte [...] en una delegación departamental de Migración. Cuando ella se presentó la tuvieron otra hora retenida y entonces, al cabo de esa hora de nuevo llegó una oficial de migración y le dijo que su pasaporte no iba a ser entregado. Ella preguntó que por qué y la oficial le respondió que si ella tenía alguna inconformidad con esto que fuera al Ministerio de Gobernación*²⁶².

136. El Grupo de Expertos ha sido informado que cuando las personas opositoras, o percibidas como tales, se dirigen a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería para renovar su pasaporte, y en algunas ocasiones, éste es retenido bajo el argumento que está próximo a vencerse. Las autoridades entonces solicitan a las personas regresar unos días después a recoger su nuevo pasaporte y, cuando van, les informan que el pasaporte no está listo sin dar justificación o a veces explicando que faltaría una investigación o se habría dañado el código de barras. Las personas regresan semana tras semana a buscar su pasaporte y éste no les es entregado. Las demoras son tantas que en unos casos las personas se han sentido obligadas a salir del país por puntos fronterizos no convencionales²⁶³. Este patrón de demora está siendo utilizado, también, en contra de familiares del grupo de las 316 personas desnacionalizadas en 2023²⁶⁴.

137. Lo mismo sucede con las solicitudes de pasaportes nuevos. Los pasaportes nuevos de menores de edad son aún más difíciles de obtener²⁶⁵. Una fuente del Grupo de Expertos informó que:

*A principios de 2021 me voy a sacar el pasaporte de mi hijo [menor de edad]. [...] Yo entregué los documentos. Cuando me toca mi turno, la muchacha de migración me dice que este trámite no puedo hacerlo, que no puedo sacar el pasaporte de mi hijo. Luego [la persona que me acompañaba] se da cuenta que está la policía y que nos empieza a rodear. Le quitan la cédula a ella y nos echan de las oficinas. Nos siguen hasta que nos subimos al bus. No pude sacar el pasaporte porque nos querían detener. Tuve que salir por punto ciego del país con mi hijo y arriesgarme con todos los peligros que eso implica*²⁶⁶.

Este patrón por parte de las autoridades ha afectado de manera diferenciada en el último año a las y los familiares de las 316 personas privadas de su nacionalidad en febrero de 2023 y, aún más, a los hijos y las hijas menores de edad de estos.

²⁶⁰ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV109.

²⁶¹ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV002.

²⁶² Entrevista del Grupo de Expertos BBIV035.

²⁶³ Entrevista del Grupo de Expertos HHIV036; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV006.

²⁶⁴ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV006.

²⁶⁵ Entrevista del Grupo de Expertos HHIV025, BBIV037.

²⁶⁶ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV007.

138. Otra fuente del Grupo de Expertos que se encontraba fuera de Nicaragua relató que:

Mi pasaporte estaba por vencerse [el año siguiente]. Me fui al consulado de Nicaragua [...] a tramitar la renovación. Llené los trámites, todo lo que se hace. Me dieron un recibo que en [dos meses] llegara por mi pasaporte. Llegué [cuando indicado] y me dijeron que no estaba listo. Llegué al siguiente mes y una joven me dijo textualmente que mi pasaporte aún no ha sido rechazado y 'Por favor, no venga más al consulado'. Luego volví a ir por tercera vez. [...] Allí me atendió el responsable. Le [...] dije que estaba en situación de apatridia porque no tenía identificación. Me contestó con un 'no puedo decirle nada, comuníquese a través de los canales correspondientes'. Yo le respondí: 'El canal correspondiente sos vos, vos sos el canal, vos representás al Estado'. Me repite de nuevo 'comuníquese a través de los canales correspondientes, es lo único que le puedo decir'. [...] No pude dialogar con él porque no sabía decir nada más²⁶⁷.

139. La denegación y negligencia sistemática en cuanto a la expedición o renovación de pasaportes tanto en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en Nicaragua como en los consulados de Nicaragua en el mundo, se ha configurado en un patrón de violaciones especialmente contra familiares del grupo de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en febrero de 2023. El Grupo de Expertos ha podido documentar una política de Estado selectiva, en la que existen medidas y procedimientos sistemáticos organizados y aprobados por el Gobierno contra estas personas. Este proceso es liderado por la Dirección General de Migración y Extranjería quien, tal y como se discute en la sección VI(A) de este documento, eleva la solicitud a la vicepresidenta Murillo. Las consecuencias de la falta de expedición o renovación de pasaportes tienen efectos en el derecho a la reunificación familiar, por lo que estas decisiones del Gobierno representan un castigo y la continuación de la persecución en contra de las personas opositoras, o percibidas como tales, expulsadas, a través de la violación de los derechos de sus familiares.

140. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua vulnera el derecho a tener un pasaporte, u otro documento de viaje, de personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares, el cual es una consecuencia del derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y que también comprende el derecho a viajar a cualquier país que esté dispuesto a permitir el ingreso del viajero, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Expertos considera que la negativa del Gobierno nicaragüense de emitir o renovar pasaportes puede además constituir una violación del derecho a ser libre de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y su familia, consagrado en el artículo 17 del Pacto y, en el caso específico de menores de edad, puede constituir una violación de su derecho a no ser separado de sus padres, consagrado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la negativa del Gobierno, a través de sus consulados, de emitir o renovar pasaportes, genera una situación de desprotección diplomática para las y los nicaragüenses que residen en el extranjero, la cual puede vulnerar el goce de sus derechos humanos de manera más general.

G. Acceso a la justicia

141. El Grupo de Expertos ha podido determinar que ninguna de las 317 personas desnacionalizadas contó con las más mínimas garantías del debido proceso ni antes ni después de que se tomaran las decisiones judiciales de privación arbitraria de la nacionalidad²⁶⁸.

142. En todos los casos documentados, el Grupo de Expertos pudo verificar que las personas no fueron notificadas de su acusación ni de su posterior juicio por el delito de traición a la patria; tampoco fueron informadas de las adiciones a las sentencias que se hicieron en varios de los casos de las 222 personas expulsadas. Además, las víctimas no tuvieron la oportunidad de preparar ni presentar una defensa ante la autoridad competente;

²⁶⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV177.

²⁶⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV032, y BBIV033.

tampoco pudieron interponer un recurso para impugnar la decisión judicial de privación de nacionalidad ni tuvieron acceso a un recurso efectivo para hacer valer sus derechos humanos²⁶⁹. El Grupo de Expertos ha podido documentar también que las resoluciones judiciales de desnacionalización emitidas el 9 y el 15 de febrero de 2023, no estipulan la posibilidad de interponer el recurso de reposición, establecido en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal, contra las resoluciones dictadas sin haber oído a las partes²⁷⁰. Las personas privadas de su nacionalidad ya no son reconocidas como nacionales nicaragüenses – y ya no cuentan con documentos ni pueden acreditar su identidad – lo que les deja en una situación de indefensión, ya que las autoridades nicaragüenses consideran que no pueden presentar ningún tipo de reclamación jurídica.

143. Vilma Núñez de Escorcía, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial núm. 1145 que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense²⁷¹. Su recurso fue recibido por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, pero, a la fecha de publicación de este documento, no ha sido tramitado. En mayo de 2023, Núñez también interpuso un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia²⁷² por haber remitido una resolución, mediante la cual se le suspendía de forma definitiva del ejercicio de las profesiones de la abogacía y notaría pública. El 26 de mayo de 2023, la Sala Civil 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua decidió no admitir a trámite el recurso de amparo, considerando que “las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz [...] perderán la nacionalidad nicaragüense. [...] La Sala encuentra que la señora Vilma Núñez fue procesada y sentenciada en base a esta Ley, decretándose la pérdida de sus derechos de ciudadana y pérdida de la nacionalidad nicaragüense, motivo por el cual sin más consideraciones habrá que rechazar el presente recurso por devenir notoriamente inadmisibles”²⁷³.

144. En casos de prohibición de ingreso al propio país y de expulsión arbitraria de extranjeros, el Grupo de Expertos ha documentado la imposibilidad de las víctimas de interponer recursos de revisión y apelación ante la autoridad migratoria, debido a que no se notifica a las víctimas una resolución administrativa razonada al respecto ni se les informa de las vías de recurso previstas en el ordenamiento jurídico nicaragüense. Las únicas orientaciones que las víctimas reciben al consultar con las autoridades son: comunicarse con el Ministerio de Gobernación o con el Ministerio de Relaciones Exteriores, “ir a hablar con Managua,” o pedir entrevista a la vicepresidenta²⁷⁴. Sin embargo, como fue establecido por el Grupo de Expertos en su primer informe, en Nicaragua la falta de independencia del sistema de justicia constituye uno de los factores estructurales que han contribuido a las violaciones y abusos de derechos humanos, dejando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos sin la posibilidad de acceder a un recurso efectivo²⁷⁵. Esto es en contravención con la Ley General de Migración y Extranjería que establece la posibilidad de interponer recursos administrativos de revisión y apelación, y con el artículo 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que hace referencia a la interposición de un recurso efectivo cuando existiera una violación de los derechos consagrados en el mismo.

145. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado de

²⁶⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV061, BBIV027, BBIV051, BBIV100, BBIV102, BBIV105, BBIV103 y BBIV210.

²⁷⁰ Documento en el archivo del Grupo de Expertos BBD0C307, HHDOC024 y HHDOC109.

²⁷¹ Documento en el archivo del Grupo de Expertos BBD0C405.

²⁷² En esa fecha el Consejo era integrado por Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta, Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente, y Juana Méndez Pérez, miembro.

²⁷³ Documento en el archivo del Grupo de Expertos HHDOC027.

²⁷⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV058, BBIV074, BBIV115, BBIV122, BBIV127, BBIV131, BBIV137, BBIV138, BBIV144, BBIV145, BBIV146, BBIV147, BBIV149, BBIV150, BBIV151, BBIV152, BBIV153, BBIV154, BBIV155, BBIV161, BBIV163, BBIV172, BBIV173, BBIV174, BBIV175, BBIV177, BBIV178, BBIV186, BBIV189, BBIV197, BBIV207, BBIV214, BBIV233, BBIV250, BBIV281, BBIV301, EEIV180, HHIV037, y HHIV038; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, HHIV002, HHIV024, y HHIV033.

²⁷⁵ A/HRC/52/63, párr. 113; A/HRC/52/CRP.5, párr. 144.

forma sistemática y generalizada el derecho de las personas opositoras o consideradas como tales a un recurso efectivo y al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 2 y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

H. Violaciones de derechos humanos conexas

146. La nacionalidad es una condición *sine qua non* para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, la dimensión de la privación arbitraria de la nacionalidad de la gran mayoría de las 317 personas identificadas por el Grupo de Expertos – con excepción de aquellas víctimas que cuentan con otra nacionalidad – ha generado un impacto que se traduce en graves violaciones conexas de otros derechos humanos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de injerencias arbitrarias e ilegales en la familia, el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social, entre muchos otros. Esta lista no es exhaustiva, en tanto la interdependencia de los derechos humanos que se ve reflejada en este caso ha mostrado cómo han venido generándose nuevas violaciones a otros derechos de las personas privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense.

147. La privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense ha generado también el despojo de la totalidad de sus derechos políticos, incluyendo su derecho a la participación política, y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad. Las víctimas se encuentran en una situación de “muerte civil”²⁷⁶, es decir han sufrido la cancelación de sus registros civiles y de matrimonio, la prohibición perpetua de ejercer el derecho de participación en los asuntos públicos y la cancelación de sus títulos universitarios. En otras palabras, con la privación de nacionalidad, las autoridades han decretado la inexistencia de las personas, a efectos jurídicos²⁷⁷. Asimismo, al haber sido víctimas de la confiscación de sus bienes muebles y cuentas bancarias y, en algunos casos, de sus pensiones de jubilación, y por lo tanto verse imposibilitados a sustentarse económicamente en el extranjero, las víctimas viven una suerte de “muerte económica” que hace su supervivencia en el extranjero todavía más complicada.

148. El derecho a la personalidad jurídica expresa el derecho y la capacidad de cada ser humano de tener derechos y obligaciones ante la ley²⁷⁸. Se ha descrito frecuentemente como el “derecho a tener derechos” y es una consecuencia directa del derecho al respeto de la dignidad humana²⁷⁹. Frente a lo anterior, el Grupo de Expertos ha podido confirmar que al menos 14 personas a las cuales se les despojó de la nacionalidad han sido borradas de los registros civiles; en dos de estos casos, las autoridades llegaron al punto de arrancar las

²⁷⁶ A/HRC/52/CRP.5, párr. 769.

²⁷⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV017, AAIV034, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV051, AAIV052, AAIV057, AAIV058, AAIV061, AAIV062, AAIV063, BBIV025, BBIV026, BBIV031, BBIV032, BBIV033, BBIV035, BBIV036, BBIV037, BBIV038, BBIV039, BBIV040, BBIV042, BBIV043, BBIV046, BBIV047, BBIV050, BBIV051, BBIV056, BBIV057, BBIV058, BBIV059, BBIV060, BBIV079, BBIV085, BBIV086, BBIV099, BBIV100, BBIV102, BBIV103, BBIV104, BBIV105, BBIV107, BBIV108, BBIV109, BBIV111, BBIV112, BBIV118, BBIV121, BBIV122, BBIV165, BBIV180, BBIV181, BBIV184, BBIV186, BBIV193, BBIV195, BBIV214, BBIV216, BBIV233, CCIV021, CCIV024, CCIV30, CCIV032, CCIV033, CCIV034, CCIV043, CCIV044, CCIV053, CCIV056, CCIV057, CCIV070, CCIV084, CCIV086, CCIV088, CCIV093, CCIV101, CCIV111, CCIV121, DDIV055, DDIV057, DDIV058, DDIV059, DDIV060, DDIV061, DDIV062, DDIV063, DDIV064, DDIV065, DDIV067, DDIV079, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069, EEIV074, EEIV075, EEIV076, EEIV077, EEIV078, EEIV079, EEIV089, EEIV119, MMIV004, y MMIV008, MMIV001, MMIV002, MMIV003, MMIV009, MMIV010, MMIV011, MMIV012, MMIV013, MMIV014; MMIV015, MMIV016, MMIV017, MMIV018, MMIV025, MMIV039, HHIV001, HHIV004, HHIV005, HHIV006, HHIV007, HHIV008, HHIV009, HHIV010, HHIV011, HHIV013, HHIV014, HHIV015, HHIV016, HHIV018, HHIV019, HHIV020, HHIV022, HHIV024, HHIV031, HHHIV032, HHIV033, HHIV034, y HHIV035.

²⁷⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la nacionalidad como prerrequisito de la personalidad jurídica, estimando asimismo que la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana (ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso niñas Yean y Bosico Vs República Dominicana*, Sentencia del 8 de septiembre de 2005 Serie C No. 130, párr. 179).

²⁷⁹ A/HRC/19/58/Rev.1, pág. 10.

páginas de los registros civiles donde constaba el registro de nacimiento de las víctimas²⁸⁰. El Grupo de Expertos tuvo conocimiento de un universo de víctimas más amplio, pero el procedimiento para solicitar los registros civiles se limita a las mismas víctimas o sus familiares. Sin embargo, se han dado cuenta de su inexistencia porque ya no aparecen en los sistemas del Gobierno o porque les han informado informalmente que están fuera del sistema financiero. Asimismo, se ha constatado que se han cancelado sus actas de matrimonio²⁸¹, lo que afecta no solo el derecho a formar una familia sino los derechos de las niñas y los niños a preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas²⁸².

149. Una víctima explicó al Grupo de Expertos que: “Mi papá que estaba todavía en Nicaragua, fue a buscar mi partida de nacimiento y le dijeron que ya no está. Que había un error en el registro y que no podían dar lo que no existe. No me encontraron en el sistema. Al igual que no encontraron el acta de matrimonio mía”²⁸³. Otra víctima contó al Grupo de Expertos que: “Mi esposa fue ella personalmente al Registro civil de las personas y solicitó una certificación de mi partida de nacimiento y le dijeron que no se la daban porque ya no existía, que había sido borrada y entonces no pudo obtenerla”²⁸⁴. En este mismo sentido, otra víctima informó al Grupo de Expertos: “Mi mamá se fue a solicitar mi partida de nacimiento y le dijeron que estaba bloqueada. Que tenía que ir a hablar a la Presidencia con Rosario Murillo”²⁸⁵.

150. Las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad vieron afectado su derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegidas y a tener acceso a las funciones públicas²⁸⁶. Las resoluciones que privaron de su nacionalidad a las 317 personas identificadas por el Grupo de Expertos incluyen expresamente la inhabilitación absoluta y especial de ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como de ejercer cargos de elección popular. De esta manera, quedan en suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua²⁸⁷.

151. El Grupo de Expertos determinó que los autores de la privación arbitraria de la nacionalidad eligieron a sus víctimas en función de su identidad como personas opositoras o percibidas como tales²⁸⁸. Todas esas víctimas representaban una amenaza al poder del Gobierno, por lo que el despojo a perpetuidad de los derechos políticos, los cuales a su vez se relacionan estrechamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación garantiza el control que el Gobierno tiene sobre el espacio cívico y democrático en Nicaragua, y su permanencia en el poder.

152. El Grupo de Expertos ha documentado que solo 27 de las 222 personas excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos en febrero de 2023 (21 hombres y 6 mujeres) han podido reunificarse con sus familias a la fecha de publicación de este documento²⁸⁹. El 9 de marzo

²⁸⁰ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV037, BBIV039, BBIV050, BBIV058, BBIV165, BBIV175, BBIV288, DDIV059, y HHIV005; y testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, y HHIV013.

²⁸¹ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV013.

²⁸² Convención sobre los Derechos del Niño, art. 8.

²⁸³ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV013.

²⁸⁴ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV058.

²⁸⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV059 y BBIV060.

²⁸⁶ A pesar de que algunos Estados han avanzado en la dirección de reconocer a los no ciudadanos ciertos derechos de participación política, la práctica generalizada continúa siendo que el ejercicio de los derechos políticos es una prerrogativa asociada a la ciudadanía. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos considera preocupante que la perpetuación de una situación de exclusión de la nacionalidad siga siendo causa de la consiguiente falta de disfrute efectivo de los derechos políticos, de la imposibilidad de ocupar ciertos cargos estatales y públicos, y de la exclusión de la militancia en un partido político. Ver, por ejemplo, las observaciones finales del Comité sobre Estonia, CCPR/CO/77/EST, párr. 17, y Letonia, CCPR/CO/79/LVA, párr. 18.

²⁸⁷ Videos en el archivo del Grupo de Expertos HHDOC024 y HHDOC109.

²⁸⁸ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1115.

²⁸⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV037, MMIV010, EEIV079, y EEIV158; testimonios originales recabados por el ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV022, MMIV011 y HHIV023; Nicaragua Actual TV, “Primera reunificación familiar de un preso político con parole humanitario”, disponible en: <https://nicaraguaactual.tv/primera-reunificacion-familiar-presopolitico->

de 2023, estas 222 personas emitieron un comunicado de prensa donde manifestaron la urgente necesidad de reunificación familiar y denunciaron que las autoridades nicaragüenses seguían con acciones de intimidación, amenazas y asedio en contra de sus familias, incluso hijos menores²⁹⁰. El Grupo seguirá documentando la investigación en estos casos.

153. Una gran mayoría de las víctimas de violaciones de sus derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación – no solo las personas expulsadas – han sufrido también violaciones de la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y en su familia. El Grupo de Expertos ha documentado los casos de cuatro personas que habían salido del país por cuestiones laborales y/o personales y a las cuales les fue prohibido el retorno a su país, quedando sus hijos menores en Nicaragua²⁹¹. Asimismo, el Grupo ha documentado decenas de casos de personas que se habían sentido forzadas a dejar el país sin sus familias y no han podido reunirse con ellas ya que no pueden regresar por temor a ser detenidas y sus familias no pueden salir del país porque se les niega la expedición de pasaportes y/o porque no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo²⁹².

154. El Grupo de Expertos también ha podido determinar que la confiscación arbitraria de bienes por parte del Gobierno ha sido un patrón de violación que se ha venido implementando desde 2018, en particular en contra de las personas detenidas arbitrariamente²⁹³. En junio de 2023, el secretario de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ronald René Rocha, notificó a la procuradora, Wendy Carolina Morales, que cumpla con lo establecido en la resolución de esa instancia judicial y proceda a ordenar “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil”. También establece que “en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua de todas las acciones y las

[parole-humanitario](https://confidencial.digital/nacion/tamara-davila-finalmente-se-reencuentra-con-su-hija-luego-de-20-meses-de-ser-separadas-por-la-dictadura/); Confidencial, “Tamara Dávila finalmente se reencuentra con su hija, luego de 20 meses de ser separadas por la dictadura”, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/tamara-davila-finalmente-se-reencuentra-con-su-hija-luego-de-20-meses-de-ser-separadas-por-la-dictadura/>; Artículo 66, “Ex reo político Lázaro Rivas se reencuentra con su familia en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/05/19/exreo-politico-lazaro-rivas-se-reencuentra-con-su-familia-en-ee-uu/>; Artículo 66, “Miguel Mora abraza a su esposa y su hijo” Es una nueva etapa de nuestras vidas”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/07/11/miguel-mora-reencuentro-familiar-destierro-nicaragua/>; Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas”, junio de 2023, págs. 6 a 8; 100% Noticias, “Ex reo político Freddy Zeledón se reúne con su familia en EEUU gracias al parole”, disponible en: <https://100noticias.com.ni/migracion/124711-exreo-freddy-zeledon-reunificacion-familia-eeuu/>; La Prensa, “Expresa política Sandra Acevedo se reencuentra con su familia en EEUU”, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/06/09/derecho-humano-ni/3158365-exrea-politica-sandra-acevedo-se-reencuentra-con-su-familia-en-ee-uu/>; La Prensa, “Ex preso político desterrado Michael Caballero se reúne con su familia en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/06/04/politica/3156263-ex-presos-politico-desterrado-michael-caballero-se-reune-con-su-familia-en-estados-unidos/>; Artículo 66, “Ex reo y desterrado político Armando Robles se reúne con su esposa y su hijo en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/09/22/exreo-desterrado-politico-armando-robles-reune-esposa-hijo-ee-uu/>; Artículo 66, “Roger Reyes al reencontrarse con su familia “No fue fácil pero sí fue posible”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/07/12/roger-reyes-reunificacion-familiar-destierro-nicaragua/>; 100% Noticias “Más excarcelados desterrados logran llevar a sus familias a EEUU”, 21 de septiembre de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/migracion/126914-nicaraguenses-desterrados-encuentro-familiar-eeuu/>.

²⁹⁰ Confidencial, “Desterrados claman a países presionar a Ortega para que permita la reunificación familiar”, 9 de marzo de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/reporte-ciudadano/desterrados-claman-a-paises-presionar-a-ortega-para-que-permita-la-reunificacion-familiar/>.

²⁹¹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV144, BBIV149, y BBIV154.

²⁹² Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV147 y BBIV144.

²⁹³ Entrevistas del Grupo de Expertos CCIV086, BBIV046, BBIV047, BBIV058, BBIV085, BBIV109, y EEIV077; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV024.

sociedades mercantiles que los condenados tengan”²⁹⁴. Las violaciones del derecho a la propiedad han venido incrementándose desde julio de 2023 y han sido particularmente severas con respecto al grupo de las 317 personas privadas arbitrariamente de la nacionalidad en febrero de 2023²⁹⁵. A la fecha de redactar este documento, el Grupo de Expertos ha podido confirmar la confiscación ilegal por parte de las autoridades de los bienes de al menos 46 personas (20 mujeres y 26 hombres)²⁹⁶.

155. El Grupo de Expertos también ha documentado la confiscación de cuentas bancarias, viviendas, terrenos, locales comerciales, vehículos y sociedades donde estas personas tenían participación. Muchas de las viviendas estaban alquiladas y las víctimas recibían el alquiler como renta para suplir sus gastos. Algunos de los inquilinos están ahora pagando su alquiler directamente al Gobierno o están negociando la compra de la propiedad con éste²⁹⁷.

156. Una víctima informó al Grupo de Expertos que sus cuentas bancarias habían sido inhabilitadas desde 2019. Sin embargo, días después del 15 de febrero de 2023, día en que fue privada arbitrariamente de su nacionalidad, ya varias de sus propiedades y de sus vehículos habían sido confiscadas. También informó que varios policías estarían ocupando algunos terrenos donde la víctima tenía negocios. Algunos de los bienes que tenía alquilados, y por lo que recibía ingresos, también fueron confiscados y los alquileres fueron cancelados. Sobre uno de sus bienes se hizo un nuevo contrato de arrendamiento con el Gobierno²⁹⁸. Irlanda Jerez, quien había sido privada arbitrariamente de su libertad en 2018 y luego también despojada de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023, informó el 16 de septiembre de 2023 por redes sociales que su bodega comercial ubicada en Managua había sido confiscada sin presentación de una orden judicial²⁹⁹.

157. Según la información recibida por el Grupo de Expertos, la confiscación de los bienes está a cargo de la Intendencia de la Propiedad, una dependencia de la Procuraduría General de la República, así como de funcionarios del Catastro, un departamento de las alcaldías encargado de realizar los avalúos de las propiedades. El patrón aplicado es el siguiente: en un primer momento, funcionarios de la Procuraduría General de la República llegan a los domicilios a tomar fotos de las propiedades. Tiempo después, se llevan a cabo los operativos

²⁹⁴ Confidencial, “Dictadura ordena confiscar bienes de los 222 ex reos políticos desterrados”, 9 de junio de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/politica/dictadura-ordena-confiscar-bienes-de-los-222-exreos-politicos-desterrados/>.

²⁹⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV017, EEIV181, EEIV182, BBIV050, BBIV099, y BBIV102; Confidencial, “Confiscan en San Juan del Sur condominio construido por familia Chamorro Barrios”, 1 de febrero de 2024, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/confiscan-en-san-juan-del-sur-condominio-construido-por-familia-chamorro-barrios/>.

²⁹⁶ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV046, BBIV050, BBIV051, BBIV099, BBIV056, BBIV103, BBIV105, BBIV165, CCIV021, CCIV044; EEIV181, EEIV182, y HHIV051, testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, HHIV006, HHIV009, HHIV010, HHIV011, HHIV014, HHIV024, HHIV020, HHIV033, HHIV044, y HHIV050; Confidencial, “Confiscan en San Juan del Sur condominio construido por familia Chamorro Barrios”, 1 de febrero de 2024, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/confiscan-en-san-juan-del-sur-condominio-construido-por-familia-chamorro-barrios/>; La Prensa, “Dictadura confisca viviendas de nicaragüenses desnacionalizados”, 12 de septiembre de 2023, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/09/12/politica/3205279-dictadura-confisca-viviendas-de-nicaraguenses-desnacionalizados>; El País, “El régimen de Ortega y Murillo confisca la casa del escritor Sergio Ramírez en su natal Masatepe” 1 de julio de 2023, disponible en: <https://elpais.com/internacional/2023-07-01/el-regimen-de-ortega-y-murillo-confisca-la-casa-del-escritor-sergio-ramirez-en-su-natal-masatepe.html>; Confidencial, “Cristhian Fajardo y Freddy Navas denuncian nuevas confiscaciones”, 23 de marzo de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/confidencialtv/cristhian-fajardo-y-freddy-navas-denuncian-nuevas-confiscaciones/>.

²⁹⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV043, BBIV105, y EEIV093; testimonios recabados por ACNUDH en archivo del Grupo de Expertos HHIV001, y HHIV033.

²⁹⁸ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV010.

²⁹⁹ Nicaragua Investiga, “Irlanda Jerez denuncia que dictadura le tomó una bodega por la fuerza”, 16 de septiembre de 2023, disponible en: <https://nicaraguainvestiga.com/politica/131602-irlanda-jerez-denuncia-dictadura-bodega/>; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV010.

confiscatorios, la mayoría de los cuales se realizan con presencia de la policía. Durante estos operativos, llegan topógrafos para realizar mediciones, pero también trabajadores con mazos o herramientas para derribar las puertas, en caso de encontrar resistencia por parte de los dueños u ocupantes de las viviendas³⁰⁰.

158. Una de las víctimas informó que:

Pudimos constatar vigilancia sobre nuestras propiedades, casi inmediatamente después de que nos quitan la nacionalidad. El 19 de febrero, ya vimos policías vestidos de civil y fueron funcionarios de la Procuraduría General de la República a hacer mediciones y tomar fotografías de las propiedades. Y hablaron con los vecinos para constatar que eran nuestras propiedades. Perdimos los ingresos de los arriendos porque los inquilinos se fueron y muchos les entregaron las llaves a la Procuraduría³⁰¹.

159. El Grupo de Expertos también ha documentado la confiscación de las cuentas bancarias de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad. La totalidad del dinero que tenían en sus cuentas fue confiscada y, en muchos casos, las personas no fueron notificadas oficialmente. Pese a la congelación de sus cuentas y confiscación de su dinero, en algunos casos los bancos continuaron cobrando las cuotas de los créditos hipotecarios, las cuotas de las tarjetas de crédito, y otros créditos que las personas tenían y venían pagando regularmente³⁰².

160. Además de estas violaciones del derecho a la propiedad de las personas opositoras, o percibidas como tales, el Grupo de Expertos también ha documentado casos de violaciones del derecho a la propiedad de familiares de las 317 personas privadas de su nacionalidad en febrero de 2023, hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. Una de estas personas explicó que en marzo de 2023 funcionarios de Procuraduría General de la Nación, acompañados por agentes de policía e incluso de funcionarios del Ministerio de Salud, habían confiscado y ocupado la casa que estaba a nombre de sus hijos, sin mostrar una orden judicial, y sin permitir que sus ocupantes pudieran sacar sus efectos personales como documentos oficiales, ropa, fotografías y recuerdos familiares³⁰³.

161. Desde febrero de 2023, el Grupo de Expertos ha documentado tres tipos de violaciones del derecho a la seguridad social de las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, con un total de 26 personas que han sido afectadas: a) casos de personas adultas mayores que ya estaban jubiladas y a quienes se les confiscó la pensión; b) casos de personas que estando en edad de jubilación, con sus semanas cotizadas, y a punto de solicitar la pensión, no pudieron hacerlo por la privación arbitraria de la nacionalidad; y c) casos de personas que habían estado cotizando al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, sin tener la edad de jubilación y que perdieron todo el dinero aportado y las semanas cotizadas³⁰⁴.

162. El Grupo de Expertos recuerda que, luego de la privación arbitraria de la nacionalidad de 316 personas los días 9 y 15 de febrero de 2023, medios de comunicación reportaron que el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, ordenó la ejecución de la cancelación de las pensiones con base en las sentencias del Tribunal

³⁰⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV050, BBIV056, y EEIV093; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, y HHIV010.

³⁰¹ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001.

³⁰² Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV107, BBIV100, BBIV109, EEIV077, EEIV093, y CCIV038; y testimonio original recabado por OACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, y HHIV011.

³⁰³ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV109; y testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV011.

³⁰⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos AAIV048, AAIV061, BBIV165, y EEIV093; testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001, HHIV006, HHIV009, HHIV014, y HHIV033.

de Apelaciones de Managua que declaró apátridas, traidores de la patria y prófugos de la justicia a estas personas³⁰⁵. Una de las víctimas de estos hechos relató que:

La resolución no habla nada de las pensiones de jubilación. Sin embargo, nos correspondía recibir esa pensión entre el 19 y el 20 de febrero, pero ya no nos depositaron ni a mi esposo y ni a mí las pensiones de jubilación. Las brutales confiscaciones de nuestras pensiones y de nuestros ingresos afectan nuestra vida digna y también tienen afectaciones a terceros, porque nosotros ayudábamos a familiares que son ancianos y dependían de nosotros³⁰⁶.

163. Vilma Núñez de Escorcía, de 85 años, y quien fue privada arbitrariamente de su nacionalidad pero que permanece en Nicaragua, tal y como se desarrolló con anterioridad, informó al Grupo de Expertos: “El día 20 de febrero de 2023 a mí me tocaba ir a cobrar mi pensión, fui el 24 de febrero y entonces me dijeron que ya no tenía pensión que no tenía ningún derecho. Así que no tengo pensión. Esto es además una agresión psicológica. Yo me jubilé a los 65 años y recibía mi pensión desde el 2004”³⁰⁷.

164. Como consecuencia de la privación arbitraria de la nacionalidad, el 11 de mayo de 2023, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución, determinó la suspensión de “forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos”, anulando los títulos de abogados y notarios públicos a 26 personas del grupo de las 317 privadas arbitrariamente de la nacionalidad, 15 de las cuales pertenecen al grupo de las 222 personas expulsadas (3 mujeres y 12 hombres) y 11 de las cuales pertenecen al grupo de las 94 personas desnacionalizadas el 15 de febrero de 2023 (2 mujeres y 9 hombres)³⁰⁸. Esta resolución invoca el artículo 2 de la Ley núm. 1145 que regula la pérdida de nacionalidad, argumentando que estas personas “cometieron actos que menoscabaron la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, incitaron a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica [...]”³⁰⁹. El Grupo de Expertos documentó la misma suspensión de sus títulos de abogadas de dos mujeres que habían salido al exilio forzado por haber sufrido persecución y amenazas³¹⁰.

165. Esta decisión, además de violar el derecho al trabajo, consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, no reconoce los Principios Básicos sobre la función de abogados. Asimismo, es contraria al principio de no discriminación en la función de los abogados, que establece que los gobiernos, entre otros, “velarán por que no haya discriminación alguna en contra de una persona, en cuanto al ingreso en la profesión o al ejercicio de la misma, por motivos de raza, color, sexo, origen étnico, religión, opiniones políticas y de otra índole [...]”³¹¹. Asimismo, desconoce el deber del Estado de garantizar que los abogados “puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”³¹².

166. Las conductas realizadas por el Gobierno de Nicaragua, y descritas en esta sección, privan e infringen derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos conexas a la privación arbitraria de la nacionalidad han sido el blanco, por ser opositoras o percibidas como una amenaza para el

³⁰⁵ Confidencial, “Daniel Ortega confisca las pensiones del INSS a jubilados ‘apátridas’”, 24 de febrero de 2023, disponible en: <https://confidencial.digital/principal/daniel-ortega-confisca-las-pensiones-del-inss-a-jubilados-apatridas/>.

³⁰⁶ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV001.

³⁰⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV165.

³⁰⁸ Proceso Digital, “Juristas inhabilitados en Nicaragua rechazan la privación del ejercicio de la abogacía”, 12 de mayo de 2023, disponible en: <https://proceso.hn/juristas-inhabilitados-en-nicaragua-rechazan-la-privacion-del-ejercicio-de-la-abogacia/>.

³⁰⁹ Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Resolución del 11 de mayo de 2023. documento en el archivo del Grupo de Expertos BBD0C341.

³¹⁰ Confidencial, “Dictadura suspende de forma ‘definitiva’ a Yonarqui Martínez como abogada”, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/dictadura-suspende-de-forma-definitiva-a-yonarqui-martinez-como-abogada/>; Republica 18, “La intrépida historia de la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos”, disponible en: <https://republica18.com/ciudadanos/31998-la-intrepida-historia-de-la-abogada-yonarqui-martinez-defensora-de-presos-politicos/>.

³¹¹ Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, principio 10.

³¹² Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, principio 16.

Gobierno, y por haber exigido la garantía de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación. Por lo menos 222 de estas personas ya habían sido víctimas de detenciones arbitrarias y, en varios casos, de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las violaciones conexas a la privación arbitraria de la nacionalidad perpetúan el ataque por motivos políticos en contra de ellas. Sin embargo, tal y como ha quedado documentado, las violaciones a los derechos humanos se han extendido a los familiares de las personas opositoras, o percibidas como tales, lo cual demuestra un patrón de castigo hacia las personas opositoras a través de su familia.

167. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que, al privar arbitrariamente a las personas opositoras o percibidas como tales de su nacionalidad, el Gobierno de Nicaragua ha violado de forma sistemática y generalizada: a) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; b) el derecho a la participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; c) el derecho a la no injerencia en la vida privada y en la familia, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; d) el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y protegido implícitamente en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; e) el derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales; y f) el derecho al trabajo consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

I. Violaciones de los derechos de las niñas y los niños

168. Las niñas y los niños han sido gravemente afectados directa e indirectamente por las violaciones de los derechos a la nacionalidad y a la libre circulación cometidas por el Gobierno de Nicaragua. En particular, se han vulnerado sus derechos a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas, a no sufrir la separación de sus padres y familiares contra su voluntad, y a entrar o salir del país a efectos de la reunificación familiar. La Convención sobre los Derechos del Niño establece cuatro principios en lo que respecta a la interpretación y aplicación de los derechos de las niñas y los niños: la no discriminación (artículo 2), la primacía del interés superior del niño (artículo 3), la garantía de su supervivencia y pleno desarrollo (artículo 6), y la participación o el derecho del niño a ser escuchado (artículo 12)³¹³.

169. El Grupo de Expertos ha documentado 27 casos de niñas y niños que se han visto separados de sus padres porque estos habían sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y expulsados o se habían vistos forzados a exiliarse³¹⁴. También ha identificado 15 casos de

³¹³ Los cuatro principios son conceptos dinámicos que deben evaluarse adecuadamente en cada contexto (ver Convención sobre los Derechos del Niño; ver también Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 5 (2003), sobre las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), CRC/GC/2003/5; observación general núm. 12 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12; observación general núm. 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párr. 1), CRC/C/GC/14.

³¹⁴ Entrevistas del Grupo de Expertos HHIV037, MMIV010 y EEIV079, EEIV158; testimonios originales recabados por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV022, MMIV011 y HHIV023; Nicaragua Actual TV, “Primera reunificación familiar de un preso político con parole humanitario”, disponible en: <https://nicaraguaactual.tv/primera-reunificacion-familiar-presos-politico-parole-humanitario/>; Confidencial, “Tamara Dávila finalmente se reencuentra con su hija, luego de 20 meses de ser separadas por la dictadura”, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/tamara-davila-finalmente-se-reencuentra-con-su-hija-luego-de-20-meses-de-ser-separadas-por-la-dictadura/>; Artículo 66, “Ex reo político Lázaro Rivas se reencuentra con su familia en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/05/19/exreo-politico-lazaro-rivas-se-reencuentra-con-su-familia-en-ee-uu/>; Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas”, junio de 2023, págs. 6 a 8; 100% Noticias, “Ex reo político Freddy Zeledón se reúne con su familia en EEUU gracias al parole”, disponible en: <https://100noticias.com.ni/migracion/124711-exreo-freddy-zeledon-reunificacion-familia-eeuu/>; La

niñas y niños que viajaban o residían en el extranjero, a quienes las autoridades prohibieron el ingreso al país, tres casos en los que las niñas y los niños se quedaron separados de sus padres, porque a estos últimos les fue prohibida la entrada en el país, y dos casos de expulsiones de niñas y niños con sus padres³¹⁵.

170. Asimismo, el Grupo de Expertos ha documentado casos de niñas y niños a quienes se les ha borrado el apellido de la madre o del padre privado arbitrariamente de su nacionalidad en documentos oficiales, en violación de su derecho a preservar su identidad sin injerencias ilícitas. Una víctima contó al Grupo de Expertos: “Mi esposa fue a ver cómo sacar la partida de nacimiento de mi hijo [menor de edad]. [...] fue al registro civil. Cuando a ella le entregan el acta de nacimiento, no sale mi apellido. Él es mi hijo, pero solo sale el apellido mi esposa”³¹⁶. El Grupo documentó otro caso en el que un funcionario público se negó a incluir el apellido del padre en el pasaporte de su hijo³¹⁷.

171. Una víctima explicó que:

*[...] el canal de acceso a la justicia para recuperar o para reclamar el bien y el patrimonio de mi hija, se me ha sido negado al negarse mi existencia jurídica. Además de esto, tiene un alcance de afectación directo al término jurídico hacia mi hija, dado que yo soy madre soltera. Y el Registro Civil de ella está solamente bajo mi nombre. O sea, al yo desaparecer como persona jurídica en Nicaragua, mi hija queda en una situación de indefensión y en un limbo legal bastante complejo. Porque solo tiene mi apellido. ¿Entonces, cómo queda ella al yo desaparecer?*³¹⁸

172. En relación con el derecho a la reunificación familiar de las hijas e hijos de las 222 personas expulsadas a los Estados Unidos y privadas arbitrariamente de su nacionalidad, el Grupo de Expertos ha documentado casos en los cuales la madre o el padre que permanecía en Nicaragua han buscado la forma de salir de manera legal con sus hijos con fines de reunificación familiar, solicitando la emisión de pasaportes y documentos de identidad, infructuosamente, debido a las trabas administrativas y burocráticas interpuestas por las autoridades para la emisión de estos. A fin de poder obtener el permiso de salida del país de hijos menores, la Dirección General de Migración y Extranjería ha venido exigiendo el certificado de movimientos migratorios de sus padres. Estos permisos son casi imposibles de obtener ya que, en este caso, Nicaragua no reconoce a los padres como sus nacionales, negando estos documentos, y, por ende, haciendo imposible la garantía del derecho a la reunificación familiar³¹⁹.

173. En estos casos, al intentar realizar los trámites correspondientes, algunas de estas personas se vieron sometidas a detenciones durante horas para identificar las razones de la solicitud de documento, a violencia verbal por parte de los funcionarios de migración, a seguimientos constantes en sus lugares de vivienda, e incluso a la confiscación de algunos de

Prensa, “Ex preso político desterrado Michael Caballero se reúne con su familia en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.laprensani.com/2023/06/04/politica/3156263-ex-presos-politico-desterrado-michael-caballero-se-reune-con-su-familia-en-estados-unidos>; Artículo 66, “Ex reo y desterrado político Armando Robles se reúne con su esposa y su hijo en Estados Unidos”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/09/22/exreo-desterrado-politico-armando-robles-reune-esposa-hijo-ee-uu/>; Artículo 66, “Roger Reyes al reencontrarse con su familia “No fue fácil pero sí fue posible”, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/07/12/roger-reyes-reunificacion-familiar-destierro-nicaragua/>; 100%Noticias “Más excarcelados desterrados logran llevar a sus familias a EEUU”, 21 de septiembre de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/migracion/126914-nicaraguenses-desterrados-encuentro-familiar-eeuu/>.

³¹⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV121, BBIV122 BBIV144, BBIV146, BBIV149, BBIV089, BBIV301, y HHIV038; testimonios originales recabados por ACNUDH HHIV002, HHIV031, y HHDOC311.

³¹⁶ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV039.

³¹⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV050, y BBIV111.

³¹⁸ Testimonio original recabado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV020.

³¹⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV035, BBIV036, BBIV037, BBIV050, BBIV051, BBIV115, HHIV049, EEIV077, y EEIV158; testimonio original recabado por ACNUDH en archivo del Grupo de Expertos HHIV048.

los documentos que llevaban para realizar los trámites respectivos³²⁰. Finalmente, y como consecuencia de estos actos de hostigamiento, el Grupo de Expertos ha documentado el caso de personas que tuvieron que salir por puntos no convencionales hacia otros países, junto con sus hijos e hijas menores, exponiéndolos a riesgos y peligros que hubieran podido afectar su integridad personal³²¹, debido al incumplimiento del deber del Estado de otorgar los documentos de viaje correspondientes.

174. Una víctima relató al Grupo de Expertos: “Mi mamá se fue a solicitar mi partida de nacimiento y le dijeron que estaba bloqueada. Que tenía que ir a hablar a la Presidencia con Rosario Murillo. Mis movimientos migratorios no me los entregan y ese es el requisito para tramitar los pasaportes para mis [...] hijos”³²². En otro caso, las autoridades negaron a la esposa de una de las personas excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos tramitar los pasaportes de sus tres hijos menores por no haber presentado el certificado de movimiento migratorio de su pareja, el cual las autoridades también se negaron a emitir³²³.

175. Debido a estas trabas burocráticas, se ha llegado incluso a generar una demanda entre los padres para retirar la patria potestad al que se encuentra fuera de Nicaragua, a fin de que el niño o la niña pueda salir legalmente sin presentar el certificado de movimientos migratorios del padre ausente³²⁴. En otros casos, para obtener el pasaporte de niñas y niños de manera expedita el padre o la madre tuvo que mentir sobre la implicación de su pareja en la vida de su hijo o hija. Una fuente explicó al Grupo de Expertos: “mi hija salió como que no tiene papá [en su partida de nacimiento]. [...] En toda la documentación aparece mi apellido, pero aparece como que yo soy un padre que nunca ha estado con ella, como que no existo, como que morí. Así lo tuvo que hacer para poder sacar el pasaporte”³²⁵.

176. El Grupo de Expertos documentó el caso de un menor de edad a quien se le negó la entrada con sus padres a Nicaragua. Estando en otro país, a principios de 2023, su pasaporte se venció. Teniendo en cuenta que el niño debía tener un documento de identidad que le permitiera entrar a la escuela y poder circular libremente por ese país, los padres tuvieron que solicitar un permiso de trabajo a su nombre, con su fotografía y su firma, como el que se solicita para personas adultas, como última solución para lograr que el niño tuviese una identificación³²⁶. El Grupo también documentó el caso de un niño de 17 años que fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional, golpeado, insultado y amenazado de muerte durante su detención y que, al ser excarcelado, fue ordenado por los agentes de policía que saliera del país. La víctima se vio obligada a salir de Nicaragua por un punto no convencional³²⁷.

177. El Grupo de Expertos también ha documentado las afectaciones que ha tenido para la salud mental de las niñas y los niños, las dificultades de la reunificación familiar, las prohibiciones de ingreso de las que han sido víctimas y la separación de sus padres por haber sido expulsados o por haberseles negado el ingreso al país. En este sentido, una víctima informó al Grupo:

Cuando nos prohibieron la entrada, el niño no entendía que pasaba y quería regresar a su casa. Mi hijo pregunta todos los días porque no volvemos, porque no estamos en Nicaragua. Ha sido una situación muy difícil. No entiende porque no puede volver a ver a su familia, a sus amigos y regresar a su escuela. No tiene sus juguetes, sus libros. Perdió su identidad, lo que él reconocía como espacio seguro que era su casa. Y se viene aquí donde nunca ha vivido y donde no habla el idioma. No sabemos cómo explicarle que no podemos regresar, porque no somos delincuentes. No tenemos

³²⁰ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV035, BBIV050, BBIV056, BBIV058 y BBIV085; testimonio original tomado por ACNUDH en el archivo del Grupo de Expertos HHIV007.

³²¹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV118, BBIV172, y HHIV049.

³²² Entrevista del Grupo de Expertos BBIV059.

³²³ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV035.

³²⁴ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV045.

³²⁵ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV111.

³²⁶ Entrevista del Grupo de Expertos HHIV025.

³²⁷ Despacho 505, “Un adolescente de 17 años es desterrado de Nicaragua por un post en Facebook contra el régimen”, disponible en: <https://www.despacho505.com/un-adolescente-desterrado-de-nicaragua-por-un-post-en-facebook-contra-el-regimen/>.

*respuestas para él. Hemos tenido que pagar un psicólogo para que lo atienda y nos oriente como explicarle lo que nos está pasando*³²⁸.

178. La imposición de restricciones migratorias arbitrarias a hijos e hijas, en especial menores de edad, y los impactos que ha tenido la privación arbitraria de la nacionalidad, la expulsión y la prohibición de ingreso y salida de niños y niñas nicaragüenses, ha sido utilizada como una herramienta para presionar a defensoras y defensores de derechos humanos, abogados y abogadas, periodistas, miembros de movimientos políticos, y todas aquellas personas opositoras o consideradas como tales en el extranjero. Las violaciones documentadas contra las niñas y los niños son, de nuevo, un patrón de castigo por parte del Gobierno hacia sus padres o familiares opositores o considerados como tales.

179. En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las autoridades de Nicaragua han violado el principio del interés superior de las niñas y los niños en todas las medidas o decisiones que les afectan tanto en la esfera pública como en la esfera privada, así como el principio de garantía de su supervivencia y pleno desarrollo consagrados en el artículo 3 y el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño respectivamente. Además, las autoridades del Estado han violado el derecho de las niñas y los niños, hijas, hijos o familiares de personas opositoras o consideradas como tales: a) a la libre circulación, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; b) a la preservación de su identidad lo que incluye el nombre y las relaciones familiares, consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño; c) a no ser separados de sus padres, consagrado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y d) a no ser discriminados por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares, consagrado en el artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

V. Crímenes de lesa humanidad

180. En el documento de sesión que acompañó su primer informe, el Grupo de Expertos desarrolló a profundidad el marco jurídico aplicable a los crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional consuetudinario en materia penal³²⁹. Dicho marco jurídico ha sido utilizado por el Grupo para evaluar si las violaciones cometidas en Nicaragua conforme al presente documento pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

181. En su primer período de presentación de informes, el Grupo de Expertos encontró motivos razonables para concluir que, desde abril de 2018, diversos actores e instituciones del Estado, siguiendo órdenes emitidas por la Presidencia y la Vicepresidencia, estaban perpetrando graves violaciones de los derechos humanos contra parte de la población nicaragüense en razón de su identidad política. Estas violaciones fueron encontradas consistentes *prima facie* con los elementos que constituyen la prohibición internacional y la definición de crímenes de lesa humanidad del Derecho Internacional Penal³³⁰.

182. Por lo que respecta al elemento “ataque”, que transforma un acto prohibido en un crimen de lesa humanidad, el Grupo de Expertos concluyó tener motivos razonables para creer que desde abril de 2018 en de Nicaragua existe un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población civil nicaragüense³³¹. La investigación realizada por el Grupo de Expertos durante este periodo le hace concluir que, este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose, alcanzando a un número creciente de víctimas.

183. El Grupo de Expertos determinó en su primer informe que el común denominador del sector de la población que han sido víctimas del ataque por parte del presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, así como de grupos armados progubernamentales, es que todas

³²⁸ Entrevista del Grupo de Expertos HHIV025.

³²⁹ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 63 a 73.

³³⁰ A/HRC/52/63, párrs. 109 a 115 y 123 a 124.

³³¹ A/HRC/52/63, párr. 109.

ellas son opositoras al Gobierno, o percibidas como críticas del, o adversarias al, mismo³³². El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el colectivo constituido por las personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación, y a otras violaciones conexas e interrelacionadas, forma parte de la población nicaragüense opositora o percibida como tal.

184. El Grupo de Expertos también tiene motivos razonables para creer que las violaciones y abusos documentados fueron cometidos intencionalmente como parte del ataque a la población civil, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste.

185. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra de las personas opositoras, o percibidas como tales, objeto de este documento y de sus familiares, se encuentran la deportación y la persecución por motivos políticos.

A. Deportación

186. Para calificar una conducta de deportación de la población como crimen de lesa humanidad, se requiere: (i) establecer el desplazamiento por la fuerza de individuos; (ii) que los individuos se encuentran legalmente en el territorio del que son desplazados; (iii) siendo el desplazamiento sin fundamento en el derecho internacional; (iv) con la intención de desplazar por la fuerza a la población³³³.

187. Tal y como se desarrolló con anterioridad en el presente documento, a la fecha de publicación de este documento, 263 personas nicaragüenses han sido expulsadas de Nicaragua: 1 persona el 14 de abril de 2022, expulsada por vía terrestre a Honduras; 222 personas el 9 de febrero de 2023, expulsadas en avión a los Estados Unidos; 4 personas el 25 de marzo de 2023, expulsadas en un avión hacia los Estados Unidos; 12 sacerdotes el 19 de octubre de 2023 expulsados en un avión hacia el Vaticano; 2 mujeres el 24 de noviembre de 2023, expulsadas en un avión hacia México; 2 hombres, el 7 de enero de 2024, expulsados en un avión hacia México; 19 religiosos el 13 de enero de 2024, expulsados en un avión hacia el Vaticano; y un sacerdote expulsado el 19 de enero de 2024.

188. El Grupo también documentó la expulsión por vía terrestre de 21 personas extranjeras que se encontraban legalmente en Nicaragua al momento de su expulsión: 1 productor musical el 12 de abril de 2022; 18 religiosas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta el 7 de julio de 2022; un sacerdote el 4 de abril de 2023, y una periodista el 8 de agosto de 2023.

189. El Grupo recuerda que las 222 personas expulsadas el 9 de febrero de 2023 a los Estados Unidos fueron forzadas a firmar un documento donde confirmaban que salían del país voluntariamente. Sin embargo, tal y como el Grupo de Expertos lo estableció en su primer informe, la firma de las víctimas fue obtenida bajo coerción, viciando cualquier consentimiento, ya que la negativa a firmar dicho documento implicaba la continuidad de la detención prolongada en condiciones inhumanas y degradantes, que en algunos casos constituyeron tortura³³⁴. El resto de los casos de expulsiones documentados por el Grupo en este documento, tanto de nacionales como de extranjeros, tampoco han contado con el consentimiento legítimo de las víctimas.

190. En el documento de sesión que acompañó a su primer informe, el Grupo de Expertos también concluyó que los miembros de la población civil nicaragüense, víctimas de la expulsión a Estados Unidos y legalmente presentes en territorio nicaragüense al momento de su expulsión, eran sujetos protegidos bajo el derecho internacional. Además, las víctimas fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, de manera discriminatoria y en violación de las garantías del debido proceso, dejándolas en situación de apatridia. El resto de las personas nicaragüense expulsadas a partir de marzo de 2023 y los extranjeros expulsados desde 2022, también se encontraban legalmente presentes en territorio nicaragüense al momento de su expulsión y eran sujetos protegidos bajo el derecho internacional. El Grupo

³³² A/HRC/52/63, párr. 41; A/HRC/52/CRP.5, párr. 931.

³³³ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1009.

³³⁴ *Ibid.*, párr. 1016.

no ha podido encontrar ningún fundamento jurídico que permita al Estado de Nicaragua justificar la denegación del derecho de las personas a permanecer en su propio país.

191. El Grupo de Expertos recuerda que los desplazamientos realizados contra la voluntad de forma discriminatoria jamás pueden ser permisibles bajo el derecho internacional debido a la prohibición general de discriminación³³⁵. El Grupo ha determinado que la totalidad de las víctimas fueron expulsadas de territorio nicaragüense por ser opositoras del Gobierno o percibidas como tales o por representar una amenaza al control de Estado. El Grupo también considera que no existían razones previstas por ley que justificaran las expulsiones por parte de las autoridades de Nicaragua y, por lo tanto, estas no tienen fundamento en el derecho internacional. Esto es particularmente relevante con respecto a las expulsiones de personas extranjeras que se encontraban legalmente en el país y en las que el Estado no cumplió con los requisitos para que las expulsiones pudieran considerarse conforme a la ley.

192. Por lo que respecta a la intención de los perpetradores de desplazar por la fuerza a la población cruzando una frontera, el Grupo de Expertos recuerda las conclusiones en su primer informe en donde identificó varios indicios que señalaban, *prima facie*, la existencia de un acuerdo o plan de deportaciones con respecto a la expulsión de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023³³⁶. Las demás expulsiones de personas nicaragüense y extranjeras aquí documentadas se han llevado a cabo por parte de las autoridades conforme a los mismos patrones previamente identificados por el Grupo.

193. Sobre esta base, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las 263 personas nicaragüense y las 21 personas extranjeras fueron expulsadas sin justificación legal alguna y que los autores tenían la intención de expulsar a estas personas de Nicaragua. Esto constituyó una violación del derecho fundamental de las víctimas nicaragüense a permanecer en su propio país y de las víctimas nicaragüense y extranjeras de poder interponer recurso. Por consiguiente, el Grupo considera que hubo una expulsión ilegal de esta parte de la población.

194. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de publicación de este documento, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población que incluye las personas expulsadas. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las expulsiones de personas nicaragüense y extranjeras opositoras o percibidas como tales forman parte de este ataque generalizado y sistemático. Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que las expulsiones documentadas constituyen el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad.

195. Tal y como se desarrolló con anterioridad, Sofía Isabel Montenegro Alarcón y Azahalea Solís, ambas feministas y activistas nicaragüenses, fueron víctimas de hostigamiento, vigilancia, acoso y amenazas en su contra durante años y, en febrero de 2023, estando todavía en territorio nicaragüense, fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad y declaradas traidoras a la patria y prófugas de la justicia. Esta última acción del Gobierno, ante su inminente detención, hizo que Montenegro y Solís tomaran la decisión ese mismo día de salir del país, cruzando hacia Costa Rica por punto ciego. Los hechos posteriores confirmaron que el peligro de sufrir aún más violaciones graves de sus derechos y garantías fundamentales era cierto e inminente. El Gobierno, decomisó sus bienes, bloqueó sus cuentas bancarias, y agentes de policía se llevaron detenido al guardia del condominio de Montenegro, porque lo acusaron de mentir cuando se le había preguntado si Montenegro y Solís estaban todavía en su casa.

196. El Grupo de Expertos documentó también, entre las víctimas del campesinado, el caso de Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anti-canal y defensora de los derechos humanos quien, en 2018, tuvo que exiliarse a Costa Rica por las amenazas de muerte que había recibido del Gobierno, tanto en su contra como en contra de sus familiares. La vigilancia y el hostigamiento fue también una constante para Ramírez, desde el momento que asumió el liderazgo del movimiento campesino anti-canal, intensificándose a partir de 2018 cuando se sumó a la protesta contra el Gobierno. Ramírez se encuentra entre las 94 personas que fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense y declaradas prófugas de la

³³⁵ *Ibid.*, párr. 1021.

³³⁶ *Ibid.*, párrs. 1027 a 1032.

justicia mediante la resolución emitida el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de Managua. En febrero 2023, el Tribunal de Apelaciones ordenó el decomiso de sus bienes y las autoridades procedieron a la confiscación de todas sus propiedades y al congelamiento de su cuenta bancaria.

197. El Grupo de Expertos recuerda que para demostrar que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de deportación, se debe establecer que a las víctimas del desplazamiento no les quedaba otra opción que desplazarse. Es decir, se debe establecer que uno, o más, de los hechos ilícitos y actos violatorios realizados por el Gobierno contra las víctimas, produjeron el desplazamiento de estas por la fuerza en medio de un entorno coercitivo. Un factor particularmente relevante es la vulnerabilidad de la víctima. En los casos representativos de las víctimas de la población civil Sofía Montenegro, Azahalea Solís y Francisca Ramírez desarrollados en este documento, el Grupo de Expertos recuerda que estas sufrieron de manos directas de agentes del Estado, un cúmulo de hechos ilícitos y actos graves, cuya magnitud incluyó la violación de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad y al libre tránsito, y la imposibilidad de trabajar, de asociarse, de recibir atención médica adecuada, entre muchas otras. Esto fue agudizado por la privación arbitraria de su nacionalidad. Este cúmulo de violaciones en su contra dio como resultado un temor, real, inminente y fundado que a su vez hizo imposible la permanencia en Nicaragua de las víctimas.

198. El entorno coercitivo, intimidatorio y abusivo, y la vulnerabilidad en la que el Gobierno coloca a sus víctimas, indica, *prima facie*, la inexistencia de un contexto de libertad y seguridad, en el cual dichas víctimas, voluntariamente y de manera genuina estuvieran de acuerdo con su desplazamiento y salida del país, si no era por medio de la fuerza. En este contexto, el desplazamiento forzado ocurre por la falta de protección efectiva y el desamparo legal, creado intencionalmente por el Gobierno, que se aprovecha de la vulnerabilidad en las que puso a las víctimas para forzarlas a salir del país. Por lo anterior, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que la salida de Nicaragua de las tres víctimas constituye el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad.

B. Persecución

199. El Grupo de Expertos recuerda que el delito de persecución es una forma extrema de discriminación, la cual ha sido calificada en la jurisprudencia internacional como “uno de los más atroces de todos los crímenes de lesa humanidad” porque “tiene su base en la negación del principio de igualdad de los seres humanos”³³⁷. En este sentido, para calificar una conducta de persecución como crimen de lesa humanidad, se requiere establecer que la conducta discrimina de hecho (i) y priva o infringe derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional (ii), por razones fundadas en motivos raciales, religiosos, o políticos (iii), y de forma deliberada con la intención de discriminar (iv)³³⁸.

200. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad de deportación aquí documentados, fueron cometidos en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentada desde las más altas esferas del Gobierno, contra la población civil, y constituyen, *prima facie*, el crimen de lesa humanidad de persecución.

201. El Grupo de Expertos recuerda las conclusiones en su primer informe de cómo, a partir del 18 de abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua implementó una política de Estado discriminatoria hacia un sector de la población heterogéneo, con el común denominador de ser percibido por la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo como una amenaza a su autoridad y a la hegemonía en el poder del Estado, con el fin de suprimir toda crítica o acto de oposición³³⁹. Este grupo fue aumentando a lo largo de esta campaña persecutoria y, tal y como se determinó con anterioridad, incluye al colectivo constituido por

³³⁷ *Ibid.*, párr. 1078.

³³⁸ *Ibid.*, párr. 1083.

³³⁹ A/HRC/52/63, párr. 41; A/HRC/52/CRP.5, párr. 1094.

las personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación, y a otras violaciones conexas e interrelacionadas.

202. El Grupo de Expertos recuerda que es el sujeto activo de los crímenes persecutorios quien define al grupo de víctimas, y que esta definición se vuelve “discriminatoria de hecho”³⁴⁰. Las víctimas objeto de este documento de sesión han sido blanco de ataques debido a su identidad, como parte de una política discriminatoria de silenciamiento sistemático de cualquier persona y de desarticulación de cualquier organización cívica o política que mantenga una posición diferente u opuesta a la del Gobierno, o sea percibida como tal. Aunque las víctimas expulsadas y/o desnacionalizadas tienen un perfil heterogéneo – excandidatos presidenciales, personas defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, miembros de la Iglesia católica, miembros del movimiento campesino, estudiantes, escritores, docentes, personas provenientes del sector privado, ex miembros del Frente Sandinistas de Liberación Nacional y personas que ejercieron su derecho a la protesta y/o a la libertad de expresión contra las acciones que el Gobierno de Nicaragua viene realizando desde 2018 –, todas ellas tienen el común denominador de haber sido percibidas por la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo como una amenaza a su control del Estado. No obstante, varias de las violaciones cometidas por el Gobierno se han extendido a familiares hasta tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad.

203. Como ha sido presentado en la sección IV del presente documento, un alto porcentaje de estas personas fueron víctimas de graves y sistemáticas violaciones de sus derechos a la libertad e integridad física, a no ser sometidos a torturas y tratos crueles, a no ser privados arbitrariamente de su nacionalidad y a permanecer en su propio país, a la participación en la vida pública y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión pacífica, entre otras. Estas violaciones fueron cometidas sobre la base de una discriminación severa contra este grupo de la población opositor al Gobierno o percibido como tal.

204. El Grupo de Expertos recuerda que la deportación y la privación arbitraria de la nacionalidad, cuando se llevan a cabo en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, pueden constituir el crimen de lesa humanidad de persecución³⁴¹.

1. Deportación

205. En su primer informe y en el documento de sesión que acompañó a este, el Grupo de Expertos concluyó que la expulsión ilegal de 222 personas opositoras o percibidas como tales constituyen el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad y que, a su vez, estas constituyen persecución como crimen de lesa humanidad³⁴². Tal y como se estableció anteriormente, estas personas habían sido detenidas arbitrariamente por su posición crítica al Gobierno, real o percibida como tal.

206. El Grupo ha determinado que las expulsiones de nacionales que se han dado a partir de marzo de 2023 y las expulsiones de extranjeros que se encontraban legalmente en Nicaragua, también constituyen el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad. El Grupo ha concluido que estas deportaciones han seguido el mismo patrón discriminatorio identificado previamente por el Grupo con respecto a las 222 víctimas de deportación de febrero de 2023. Además, todas las víctimas deportadas cumplen con el perfil de personas opositoras o percibidas como tales. Por lo tanto, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que estas deportaciones también constituyen persecución como crimen de lesa humanidad.

207. La deportación de Sofía Montenegro, Azahalea Solís y Francisca Ramírez es solo un ejemplo representativo de los casos de persecución sufrida por personas opositoras del Gobierno, o percibidas como tales, en Nicaragua desde abril de 2018. Fue ese Gobierno, mediante sus agentes del Estado y grupos armados progubernamentales, y liderados por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, el que intencionalmente y de manera discriminatoria, por la oposición abierta al Gobierno de Montenegro Solís y Ramírez y su

³⁴⁰ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 1100 y 1101.

³⁴¹ A/HRC/52/63, párr. 110; A/HRC/52/CRP.5, párr. 1104 y ss.

³⁴² A/HRC/52/63, párr. 110; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 1108 a 1112.

prominencia en la vida política del país, dirigió un ataque en contra de las tres víctimas. Este ataque resultó en un cúmulo de violaciones de derechos humanos fundamentales y en la comisión de actos prohibidos y hechos ilícitos graves y flagrantes, incluyendo el crimen de lesa humanidad de deportación. Por lo tanto, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las deportaciones de estas tres víctimas también constituyen persecución como crimen de lesa humanidad.

2. Privación arbitraria de la nacionalidad

208. El Grupo de Expertos recuerda su conclusión de que las privaciones arbitrarias de la nacionalidad, junto con las deportaciones sufridas por parte de la población en Nicaragua son parte del plan del Gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo para remover cualquier tipo de oposición a su Gobierno y garantizar así su permanencia en el Gobierno³⁴³. Lo mismo ocurre con, las cuales han sido llevadas a cabo por motivos discriminatorios, en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil³⁴⁴.

209. El acto persecutorio debe tener la intención de causar, y dar lugar a, una violación del disfrute por parte de una persona de un derecho básico o fundamental, en este caso del derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad. En este sentido, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que la privación arbitraria de la nacionalidad de las 317 personas opositoras, o percibidas como tales, constituye el crimen de lesa humanidad de persecución³⁴⁵.

3. Persecución a través del cúmulo de violaciones

210. El Grupo de Expertos recuerda que graves violaciones de los derechos humanos, llevadas a cabo por motivos discriminatorios, en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, pueden constituir un crimen de persecución. En estos casos, los actos persecutorios deben tener la intención de causar, y dar lugar a una violación del disfrute por parte de una persona de un derecho básico o fundamental.

211. En este documento de sesión, el Grupo de Expertos ha determinado, además de las deportaciones y de las privaciones arbitrarias de la nacionalidad, un cúmulo de otras violaciones en contra de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y de sus familiares. La dimensión de la privación arbitraria de la nacionalidad de las 317 personas identificadas por el Grupo de Expertos ha generado un impacto sobre ellas y sus familiares que se ve traducido en graves violaciones de otros muchos de sus derechos humanos.

212. En primer lugar, con respecto a las víctimas que no tienen otra nacionalidad, ha generado el despojo de la totalidad de sus derechos políticos, incluyendo el derecho a la participación política, y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad. Además, tras la eliminación de las víctimas del registro civil, estas han visto violado su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la prohibición de injerencias arbitrarias e ilegales en la familia, entre muchos otros. Tras la confiscación de sus bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y otros, la mayoría de ellas también han sido víctimas de violaciones del derecho a la propiedad. Tal y como se estableció con anterioridad, varias de ellas también sufrieron la confiscación de sus pensiones, por lo que se les ha violentado su derecho a la seguridad social. Otras han también sido víctimas de la cancelación de sus títulos universitarios, lo cual les ha imposibilitado la continuación de sus estudios, en violación de su derecho a la educación.

213. Este cúmulo de violaciones ha puesto a la gran mayoría de las víctimas – con excepción de aquellas que cuentan con otra nacionalidad – en una situación de “muerte civil”. Asimismo, al haber sido víctimas de la confiscación de sus bienes y, en algunos casos, de sus pensiones de jubilación, se han visto imposibilitadas a sustentarse por sí mismas en el extranjero, sufriendo así una suerte de “muerte económica” y teniendo que apoyarse de ayuda de terceras personas, lo que hace su supervivencia en el extranjero todavía más complicada.

³⁴³ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 1109 y 1116.

³⁴⁴ A/HRC/52/63, párr. 110; A/HRC/52/CRP.5, párrs. 1113 a 1119.

³⁴⁵ Ver A/HRC/52/CRP.5, párr. 1115.

214. Además de los casos de deportación y de privación arbitraria de la nacionalidad, el Grupo de Expertos ha documentado decenas de casos de prohibición de ingreso de nacionales a Nicaragua, los cuales han estado dirigidos en contra de personas opositoras o percibidas como tales y, en especial, contra familiares de las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad. En la mayoría de los casos documentados, las víctimas habían salido de Nicaragua por periodos cortos de tiempo, con la intención de regresar al país y reincorporarse a su vida en el país. Las prohibiciones de ingreso han ocasionado graves violaciones de los derechos de estas personas, incluyendo el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida familiar, el derecho a la educación, a atención médica, a la seguridad social, a una vivienda digna, o a oportunidades laborales en los países donde son obligados a permanecer.

215. Las prohibiciones de entrada al país también han afectado a las y los familiares de las víctimas que permanecen el país, especialmente personas adultas mayores, niños y niñas, que dependen económicamente de quienes no han podido regresar a Nicaragua. Asimismo, las prohibiciones de salida del país, tal y como han sido documentadas por el Grupo de Expertos, han impedido la reunificación familiar de decenas de familias.

216. Los hechos documentados denotan la intención discriminatoria con la que el presidente, la vicepresidenta y altas jerarquías de su Gobierno, han instrumentalizado agentes y órganos de los poderes del Estado para perpetrar los crímenes subyacentes de lesa humanidad, como parte de la política persecutoria para consolidar su hegemonía política y poder absoluto en el Gobierno. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las graves violaciones de los derechos humanos que han sufrido las personas deportadas y/o desnacionalizadas, y aquellas a las que se le ha prohibido el regreso a Nicaragua, forman parte de los actos criminales persecutorios impuestos por el Gobierno en contra de la población civil.

217. El Grupo de Expertos también tiene motivos razonables para creer que los autores del conjunto de violaciones de los derechos humanos en contra de las personas deportadas y/o desnacionalizadas, y aquellas a las que se le ha prohibido el regreso a Nicaragua, eligieron a sus víctimas en función de su identidad como personas opositoras o percibidas como tales, o por la relación de parentesco con estas. Tal y como se documentó con anterioridad, mediante los actos criminales cometidos en contra de las víctimas, el Gobierno se ha asegurado de que estas no podrán tener participación alguna en la vida nicaragüense y no podrán ejercer sus derechos políticos.

218. El Grupo de Expertos ha demostrado que las víctimas de estos actos criminales, a pesar de pertenecer a sectores de la población heterogéneos, tienen como común denominador ser opositoras del Gobierno o percibidas como tales. Es más, la mayoría de ellas han sido las voces críticas más públicas de la lucha social, desde abril de 2018. Por consiguiente, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las violaciones conexas e interdependientes de estas personas opositoras, o percibidas como tales, y de sus familiares, constituye persecución como crimen de lesa humanidad.

VI. Presidente, vicepresidenta y principales instituciones del Estado

219. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que, desde abril de 2018, en el marco de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a toda persona y desarticular a toda organización cívica o política que mantenga posturas diferentes a la del Gobierno, o que sea percibida como crítica o adversaria de este, varias instituciones del Estado, siguiendo órdenes emitidas desde la Presidencia y la Vicepresidencia, participaron en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de personas opositoras o percibidos como tales y sus familiares.

220. El Grupo de Expertos continuó documentando la instrumentalización por parte del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo de varias entidades del Estado para cometer las violaciones de los derechos humanos y crímenes descritos en el presente documento. Estas instituciones son: el poder judicial a través de los Tribunales de Apelaciones; el Ministerio de Gobernación; la Dirección General de Migración y Extranjería;

los Consulados de Nicaragua en los países donde se encuentran las personas a quienes se les ha impedido el ingreso a su país; la Procuraduría General de la República; el Instituto Nacional de Seguridad Social; el Registro Civil, y las diferentes Alcaldías que tienen la responsabilidad de administrar el registro civil.

A. Presidencia y vicepresidencia de la República

221. Desde antes de abril de 2018, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo instrumentalizaron las estructuras y poderes del Estado, desconociendo la separación de los poderes públicos y sujetándolos a sus intereses partidarios, con el fin de asegurar su control sobre una variedad de actores e instituciones del Estado que debían cumplir rigurosamente sus órdenes. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que la intervención del presidente y la vicepresidenta dieron lugar a las violaciones sistemáticas del derecho a la nacionalidad, libertad de circulación y derechos conexos, así como a los crímenes de lesa humanidad aquí documentados.

222. En su primer informe, el Grupo de Expertos determinó la destrucción sistemática de la separación de poderes consagrada en la Constitución Política y la subordinación y obediencia de la Asamblea General y el poder judicial, las cuales aportaron de manera fundamental al plan y ejecutaron las órdenes de la Presidencia y la Vicepresidencia, con el objetivo de perseguir a las personas opositoras o percibidas como tales³⁴⁶. La falta de independencia de los poderes públicos y la obediencia a la Presidencia quedó claramente manifiesta en febrero de 2023 con la deportación de las 222 personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales, así como con la privación de nacionalidad de éstas y de otras 94 personas más, opositoras o percibidas como tales, según lo declarado por el propio presidente de la Asamblea Nacional³⁴⁷.

223. En un discurso emitido el 9 de febrero de 2023, el propio presidente Ortega manifestó que:

[...] antier estaba por salir el Embajador de Estados Unidos, bueno iba hacia los Estados Unidos el Embajador, en los días anteriores, hace pocos días, entonces me dice Rosario: “Y por qué no le decimos al Embajador que se lleven ya a todos estos terroristas?” [...] realmente no se me ocurría a mí (...), porque no se trataba de negociar nada [...]. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y que se lleven a sus mercenarios [...] Cuando nos preguntan a cuantos vamos a soltar, a todos [...] Y a Álvarez también. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Y luego nos piden que enviemos la lista, y las carreras de los compañeros del poder judicial, de la Fiscalía, de Gobernación (un trabajo intenso). [...] En esta lista original iban en total, de todo el país, 228 [...] Aquí tengo la lista original, aquí están las firmas de los magistrados que firmaron, el Tribunal de Apelaciones de la sala penal 1. Esto lo firmó el Tribunal ayer 8 de febrero a las 5:45 minutos de la tarde. [...] Esta es una decisión del Estado nicaragüense [...] una resolución de un Tribunal de justicia del Estado nicaragüense que los está mandando a irse del país. [...] pero como es el Estado nicaragüense el que le está ordenando la deportación [...]”³⁴⁸.

224. Uno de los ejemplos de las decisiones que, según la información recibida, deben ser consultadas con la vicepresidenta tiene que ver con la aprobación de las expediciones de los pasaportes en los consulados de Nicaragua. Una fuente explicó que desde el consulado se envía consulta sobre la expedición o no al Ministerio de Gobernación donde el viceministro Luis Roberto Cañas Novoa emite su recomendación, que es elevada a la vicepresidenta Murillo para su aprobación. Esta es la que toma la decisión final sobre a quién se le expide el pasaporte o no³⁴⁹.

225. A través de estas acciones, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo lograron eliminar sistemáticamente del panorama político y cívico nicaragüense a buena parte de la

³⁴⁶ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 979 y 1168.

³⁴⁷ *Ibid.*, párrs. 1030 y 1111.

³⁴⁸ *Ibid.*, párr. 775.

³⁴⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV59, BBIV60, BBIV144, BBIV166 y HHIV005.

oposición política, a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas críticos del Gobierno, y a todas otras personas que han considerado una amenaza a su control de Estado.

B. Poder legislativo

226. En relación con la privación arbitraria de la nacionalidad descrita en este documento, la Asamblea Nacional fue instrumentalizada para reformar el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua y para adoptar la Ley núm. 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense. Ambas normas entraron en vigor el 10 de febrero de 2023, al día siguiente de su aprobación por la Asamblea Nacional, a pesar de que ninguna reforma constitucional puede entrar en vigor a menos de que haya sido adoptada en una segunda legislatura³⁵⁰. El 18 de enero de 2024, la Asamblea Nacional aprobó en Segunda Legislatura la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución, en relación con la pérdida de la nacionalidad cuando una persona sea condenada por delitos de traición a la Patria. Se presentaron 91 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta decisión unánime es una muestra más de la instrumentalización de la Asamblea Nacional a los intereses del poder ejecutivo.

227. Gustavo Porras, en su papel de presidente de la Asamblea Nacional ha formado parte esencial en la instrumentalización del poder legislativo; esto, junto con los diputados que presentaron y votaron de manera unánime las iniciativas legislativas citadas anteriormente³⁵¹. Así se desprende de la inmediata entrada en vigor de la Ley núm. 1145 sin que la reforma constitucional hubiera sido aprobada en segunda legislatura, de la votación unánime para su aprobación en segunda legislatura³⁵², y de la entrevista que el propio Porras otorgó a Alberto Mora del Canal 4 de Nicaragua, la ausencia de la separación de poderes en Nicaragua y la fusión-confusión entre Estado, Gobierno y el Partido del Frente Nacional de Liberación Sandinista:

*Una vez que se toma la decisión se hace unas acciones y un proceso absolutamente sorprendente, realmente hay que reconocer cómo todos nuestros compañeros de las diferentes instituciones actuaron con una sincronización, bajo...como debe ser, como es nuestro modelo, **bajo un solo mando, bajo una sola orden, en una forma muy sincronizada**, de tal forma que no se filtró nada, se fue dando porque son momentos que tienen que ser así ¿por qué?, Porque al fin y al cabo lo que todos queríamos y lo que el comandante estaba buscando que saliera esa decisión para la paz de los nicaragüenses. Y eso fue lo que realizamos. Sin embargo, entonces, en ese proceso se fueron haciendo trabajos simultáneos, es decir, a quien le correspondía ver los aspectos logísticos del traslado, de todo lo que estaban hablando allá; a dónde iban, dónde estaban... Estos delincuentes estaban detenidos en diferentes partes del país. [...]*

Esa es la Ley, el traidor a la patria pierde la calidad de nacional nicaragüense. Entonces, esa fue la ley que aprobamos y con los tiempos correctos. Aquí nadie puede alegar absolutamente nada, que si se aplica retroactivo. No, porque acuérdense que ese es todo un proceso jurídico, que hasta que la Corte dice que dejen firme la sentencia de traidor a la patria ahí se cierra y eso es el traidor a la patria y entonces se fue haciendo los procesos en el tiempo de tal forma que se aprobó la ley y después y después eso la Corte ya dejó firme la sentencia de tal forma que la pérdida de nacionalidad le cae a todos estos señores. [...]

Entonces el Estado nicaragüense toma sus decisiones en lo que corresponde a la parte ejecutiva, en lo que corresponde a la parte judicial, en lo que corresponde al Parlamento, todo el Estado nicaragüense en función de garantizar que ese momento

³⁵⁰ La Gaceta núm. 25, 10 de febrero de 2023.

³⁵¹ Asamblea Nacional, Listado de diputados que presentaron la iniciativa legislativa de reforma del artículo 21 de la Constitución Política, 9 de febrero de 2023, disponible en: <http://www.legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/xpIniciativa.xsp>.

³⁵² Ley núm. 1190, aprobada el 18 de enero de 2024 y publicada en La Gacet, núm. 11, 22 de enero de 2024.

*que identificó el comandante, que ahorita saliera, se diera la orden y resultara exitosa*³⁵³.

C. Poder judicial

228. El informe Grupo de Expertos presentado en marzo de 2023 concluyó que el poder judicial, ejecutando las instrucciones directas de la Presidencia, desconociendo la separación de poderes, su independencia e imparcialidad, y funcionando como una estructura jerárquica y vertical que garantiza el cumplimiento de las instrucciones de las altas jerarquías del Estado, fue movilizó sistemáticamente con el fin de llevar a cabo la instrumentalización del derecho penal como herramienta de persecución de las personas opositoras o percibidas como tales³⁵⁴.

229. En el informe de marzo de 2023, se describió cómo desde el poder judicial se decretó la deportación de 222 personas presas políticas declaradas traidoras a la patria, informándose al público en el preciso momento en que estaban siendo deportadas a Estados Unidos³⁵⁵. El 9 de febrero de 2023, Octavio Rothschild Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, dio lectura pública al comunicado sobre la declaración de traición a la patria y deportación inmediata. Al día siguiente, entró en vigor la reforma del artículo 21 de la Constitución Política y la Ley núm.1145 que la implementa, pese a no cumplir los requisitos de forma.

230. De la misma manera, se privó arbitrariamente de su nacionalidad a 94 personas opositoras en febrero de 2023, en virtud de una resolución leída y firmada, entre otros, por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía el 15 de febrero de 2023³⁵⁶. Igualmente se privó arbitrariamente de su nacionalidad a Monseñor Rolando Álvarez, como condena en juicio realizado el 10 de marzo de 2023, y al empresario Piero Cohen, quien fue juzgado en ausencia, en marzo de 2023.

231. Rubén Montenegro Espinoza, secretario general de la Corte Suprema de Justicia firmó una circular transcribiendo el encabezado de la sentencia del Consejo de Administración y Carrera Judicial firmada por Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar y Juana Méndez, suspendiendo permanentemente del ejercicio de la profesión a 15 de los abogados del grupo de las 222 personas deportadas y los 10 abogados del grupo de las 94 personas que fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad³⁵⁷.

232. El mismo Montenegro Espinoza firmó, el 9 de mayo de 2023, la circular de suspensión permanente en el ejercicio de la profesión de abogada y notaria a Yonarki Martínez, quien había sido defensora de algunas 222 personas deportadas y había salido al exilio por la persecución sufrida³⁵⁸. El 16 de agosto de 2023, Gerald Areas Lacayo, secretario de la Corte Suprema de Justicia, firmó una circular que especifica que “con instrucciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, transcribo a ustedes el encabezado y por tanto de la Sentencia N° 173, dictada por el Consejo en los expedientes N° 440 y 770-2005, 543-2010, 1350-2012 y 485-2015”³⁵⁹, por la cual se suspende permanentemente en el ejercicio de

³⁵³ Canal 4 Nicaragua, “Doctor Gustavo Porras en la Revista En Vivo con Alberto Mora – 10 de febrero del 2023”, 10 de febrero de 2023, video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=hXW_HawQHvI.

³⁵⁴ A/HRC/52/CRP.5, párr. 1171.

³⁵⁵ A/HRC/52/CRP.5, párr. 318.

³⁵⁶ Documentos en el archivo del Grupo de Expertos BBD0C332, BBD0C333, BBD0C334, BBD0C335 y BBD0C336.

³⁵⁷ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV286; documento en el archivo del Grupo de Expertos BBD0C341; Divergentes, “CSJ anula títulos a 25 abogados declarados apátridas y traidores a la patria”, 11 de mayo de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/123765-csj-despojo-titulo-abogados-apatridas/>.

³⁵⁸ Confidencial, “Dictadura suspende de forma “definitiva” a Yonarqui Martínez como abogada”, disponible en: <https://confidencial.digital/nacion/dictadura-suspende-de-forma-definitiva-a-yonarqui-martinez-como-abogada/>.

³⁵⁹ Ver 100% Noticias, “CSJ suspende título de abogada de ex jueza María Concepción Ugarte, quién huyó a EEUU”, 17 de agosto de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/126127-csj-cancela-titulo-maria-concepcion-ugarte/>.

las profesiones de abogado a la abogada y exjueza, María de la Concepción Ugarte Barillas, quien había salido de Nicaragua en octubre de 2022 por la persecución en su contra.

D. Consejo Supremo Electoral y alcaldías municipales

233. El Registro Central del Estado Civil de las Personas es una Dirección General del Consejo Supremo Electoral, la cual tiene representación en todas las oficinas de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales. Su función principal es ser el archivo nacional de todas las actas susceptibles de inscripción en los Registros Civiles Municipales, con jurisdicción a nivel nacional para certificar todas las actas que están bajo su resguardo³⁶⁰.

234. Las autoridades y funcionarios pertenecientes a ambos registros son responsables de ejecutar las órdenes de denegar la expedición de certificados de partidas de nacimiento de las personas privadas de nacionalidad e incluso de sus familiares. Algunas víctimas refirieron al Grupo de Expertos que la constancia de su nacimiento o el apellido de su progenitor o progenitora ha desaparecido. Otras, refirieron que en los libros de registro había sido arrancadas las hojas con el asiento de su nacimiento.

E. Procuraduría General de la República

235. La Procuraduría General de la República, dirigida por Wendy Carolina Morales Urbina, es responsable de ejecutar las órdenes de confiscación/decomiso de los bienes de las 317 privadas arbitrariamente de su nacionalidad. Con la reforma al artículo 165 de la Constitución Política aprobada el 31 de octubre de 2023, la Asamblea Nacional le da aún más poder a la Procuraduría General de la República, en relación con el registro de las propiedades. Esta reforma le quitó la atribución a la Corte Suprema de Justicia de supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de nombrar a Registradores Públicos, así como de sancionarlos por faltas disciplinarias. A su vez, se creó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) a la Procuraduría General de la República, que establece que la Procuraduría ejercerá la dirección, control y supervisión del SINARE, además de ser el representante legal del Estado en los negocios que se desarrollen en los tribunales de justicia³⁶¹.

F. Ministerio de Gobernación

236. El Ministerio de Gobernación está dirigido orgánicamente por la Ministra de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch y por el Viceministro Luis Roberto Cañas Novoa. La Dirección General de Migración y Extranjería depende de este Ministerio.

237. La Dirección General de Migración y Extranjería tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) emitir documentos migratorios para nacionales y extranjeros;
- b) regular, organizar, registrar, fiscalizar y controlar los movimientos migratorios de entrada y salida de nacionales y extranjeros al y del país lo mismo que asegurar el cumplimiento de las disposiciones relativas a prohibiciones y restricciones de ingreso, egreso y captura de ciudadanos nacionales y extranjeros emitida por autoridad competente;
- c) autorizar y emitir las visas o permisos de salida a nacionales menores de edad y extranjeros, según corresponda, conforme a las disposiciones establecidas; y
- d) emitir, registrar y controlar la existencia, otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense la cual se registrará por lo dispuesto en la legislación vigente³⁶².

³⁶⁰ Ver <https://www.cse.gob.ni/registro-civil>.

³⁶¹ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV300. La reforma deroga el inciso cuatro del artículo 165, que señalaba que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un organismo de la Corte Suprema de Justicia con autonomía técnica y funcional, tenía la facultad de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.

³⁶² Ministerio de Gobernación, sección de migración, disponible en: <https://www.migob.gob.ni/migracion/nosotros/>.

238. El Reglamento a la Ley núm. 761, Ley General de Migración y Extranjería, establece en su artículo 4 lo siguiente en cuanto a la estructura orgánica de la Dirección General de Migración y Extranjería:

La Dirección General de Migración y Extranjería, para garantizar el cumplimiento de sus funciones, está estructurada por:

- 1) un Director o Directora General
- 2) un Subdirector o Subdirectora General
- 3) un Inspector o Inspectora General
- 4) los y las Jefes de las Especialidades Nacionales
- 5) los y las Jefes de las estructuras de Apoyo Nacionales
- 6) los y las Jefes de las Delegaciones Regionales

*De conformidad al artículo 185 de la Ley, los cargos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3, conforman la Jefatura Nacional de la Dirección General de Migración y Extranjería*³⁶³.

239. Tal y como se ha expuesto anteriormente, el Grupo de Expertos ha documentado numerosas violaciones de la libertad de movimiento, tanto para salir de Nicaragua como para ingresar al país, que han impactado las vidas de nacionales y extranjeros con residencia legal en el país. La Dirección General de Migración y Extranjería ha sido instrumentalizada para imponer restricciones migratorias a personas percibidas como opositoras, sus familiares e incluso funcionarios públicos y sus familiares, que tenían y tienen la prohibición de salir del país³⁶⁴.

240. Funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería han ejecutado órdenes para denegar arbitrariamente la expedición de pasaportes y/o retirar los que estaban vigentes³⁶⁵; para denegar la renovación de residencias de personas extranjeras, particularmente de trabajadores y trabajadoras de organizaciones sin fines de lucro y personas religiosas; o para suspender la vigencia de documentos de residencia de extranjeros en vigor, forzando su salida del país³⁶⁶.

241. Tal y como se desarrolló más arriba, el Grupo de Expertos ha documentado la participación del Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General Migración y Extranjería, en la transmisión de órdenes a las empresas de transporte de pasajeros aéreas y terrestres para que impidan a personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares, abordar medios de transporte con la intención de regresar a Nicaragua³⁶⁷.

G. Policía Nacional

242. El Grupo de Expertos ha podido profundizar sobre el papel que jugó la Policía Nacional en la deportación de las 222 personas a los Estados Unidos en febrero de 2023. De acuerdo con la información recibida, la Policía Nacional se ocupó del traslado de las víctimas desde los centros penitenciarios del interior del país hasta el centro de detención *La Modelo*³⁶⁸. Una vez teniendo a las 222 víctimas ahí reunidas, la Policía Nacional las trasladó al aeropuerto internacional de Managua, desde donde abordaron el avión que las llevó a los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.

³⁶³ Asamblea Nacional, Reglamento a la Ley No 761, Ley General de Migración y Extranjería, adoptado en virtud de Decreto Ejecutivo No 31-2012, aprobado el 20 de septiembre de 2012, disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/43cada2669b3ab6306257ab8006195be>.

³⁶⁴ Entrevistas de Grupo de Expertos BBIV012 y BBI076.

³⁶⁵ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV137, BBIV153, BBIV172 y BBIV176.

³⁶⁶ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV119, BBIV166 y BBIV194.

³⁶⁷ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV058, BBIV074, BBIV121, BBIV122, BBIV127, BBIV131, BBIV144, BBIV145, BBIV146, BBIV147, BBIV149, BBIV150, BBIV151, BBIV152, BBIV154, BBIV155, BBIV161, BBIV163, BBIV172, BBIV173, BBIV175, BBIV177, BBIV178, BBIV186, BBIV189, BBIV207 BBIV233, BBIV252, BBIV255, BBIV266, BBIV301, BBIV302 y BBIV303.

³⁶⁸ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV51, BBIV081 y DDIV60.

243. Fuentes del Grupo identificaron a oficiales de la Policía Nacional, incluyendo algunos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, debidamente uniformados, participando en los traslados³⁶⁹. Al respecto, una víctima con conocimiento del funcionamiento de la Policía Nacional explicó al Grupo de Expertos: “cuando están con gorra es que están en un operativo oficial, es una de las señas de la policía”. Asimismo, una víctima identificó al Comisionado General de la Policía Nacional, Luis Alberto Pérez Oliva, en ese momento director de la Dirección de Auxilio Judicial, y al Comisionado Mayor Victoriano Ruíz, entonces subdirector de esa misma dirección y ahora director, en el operativo. Ambos parecían estar a cargo del mismo³⁷⁰.

244. Varias fuentes relataron al Grupo de Expertos que antes de subir al avión tuvieron que firmar una hoja con el logotipo de la Policía Nacional que decía “Yo _____ acepto abordar de manera voluntaria el avión rumbo a _____”, sin especificar el destino³⁷¹.

VII. Responsabilidades

245. Las violaciones de los derechos a la nacionalidad, a la libre circulación y violaciones conexas a estos derechos descritas en el presente documento dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua. En algunos casos, los crímenes generan responsabilidad penal individual, ya sea en virtud del derecho internacional penal o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países.

A. Responsabilidad del Estado

246. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua continúa cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, sistemáticas y generalizadas, basadas en un patrón de discriminación por motivos políticos, contra integrantes de la población opositora al Gobierno, real o percibida como tal.

247. El Estado ha privado de forma arbitraria la nacionalidad de 317 personas integrantes de la población opositora al Gobierno, real o percibida como tal, dejando a todas aquellas que no tienen otra nacionalidad en condición de apatridia. Además, el Estado ha prohibido el ingreso de 145 nacionales desde 2021 y la salida de tres nacionales, incluido una persona con doble nacionalidad, y ha deportado 263 nacionales. La deportación y la prohibición de ingreso al país de nacionales ha dejado a la gran mayoría de estas personas en total desprotección diplomática, en terceros países, afectando la garantía de todos sus derechos, asimilando las consecuencias sufridas con los efectos de la apatridia. Asimismo, el Estado no ha garantizado el acceso a recursos efectivos frente a las decisiones de privar arbitrariamente de la nacionalidad a las personas y tampoco respecto de quienes han sido deportadas, o impedidas de ingresar a su propio país, o a quienes arbitrariamente se les ha confiscado su pasaporte sin motivo establecido en la Ley, solamente por tener algún vínculo con personas opositoras o consideradas como tales.

248. El Estado es responsable por las violaciones graves cometidas al incumplir lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Convención de Derechos del Niño. Además, los poderes del Estado y demás autoridades públicas a nivel nacional, regional o local descritos en el presente documento, continúan violando de manera sistemática y flagrante la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad, como norma imperativa de derecho internacional general (*jus cogens*).

249. Los actos y conductas respecto de la privación arbitraria de la nacionalidad han violado las obligaciones internacionales por las que Nicaragua se ha obligado voluntariamente al ratificar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Este instrumento hace efectivo el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. Aunque Nicaragua conserva el derecho de emitir disposiciones internas sobre nacionalidad, debe hacerlo en

³⁶⁹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV30, BBIV31, BBIV51, BBIV081 y DDIV60.

³⁷⁰ Entrevista del Grupo de Expertos BBIV30.

³⁷¹ Entrevistas del Grupo de Expertos BBIV30, BBIV31 y DDIV60.

concordancia con las normas internacionales relativas a la nacionalidad, incluido el principio que establece que debe evitarse la apatridia. En este sentido, la práctica del Estado de Nicaragua viola, en especial, el artículo 9 de la Convención de 1961, que puede ser considerada una obligación *erga omnes partes*, y que establece una prohibición absoluta para los Estados contratantes de privar de su nacionalidad a una persona, o a un grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

250. Asimismo, la práctica del Estado de Nicaragua de impedir el ingreso de sus nacionales a su propio país puede constituir una violación del principio de derecho internacional que un Estado no pueda denegar a sus propios nacionales el derecho de entrada o de residencia³⁷².

B. Responsabilidad penal individual

251. Las violaciones y los crímenes documentados en el presente documento dan lugar a responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense.

252. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, y a todos los niveles, han realizado desde octubre de 2018 y siguen realizando a la fecha de publicación de este documento, graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de personas opositoras o percibidas como tales. Las violaciones incluyen la privación de la nacionalidad, la prohibición de entrar en su propio país, la expulsión de nacionales y extranjeros, la prohibición de salida del propio país, así como de los derechos conexos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la participación política, la prohibición de injerencias arbitrarias e ilegales en la familia, el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social, y la violación de los derechos de las niñas y los niños, entre muchos otros. Estas violaciones corresponden, además, a conductas que pueden calificarse jurídicamente como crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución por motivos políticos.

253. El Grupo de Expertos recuerda que el mandato que le ha sido conferido por el Consejo de Derechos Humanos de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018 y, de ser posible, de identificar a los responsables de estos, no es un mandato de carácter judicial. En este sentido, cualquier determinación con respecto a la responsabilidad penal individual por las violaciones y crímenes documentados en este escrito, debe ser realizada por las autoridades competentes, sobre la base de procedimientos que aseguren el derecho a la defensa y todas las garantías del debido proceso³⁷³.

254. El Grupo de Expertos no ha realizado determinaciones en cuanto a la responsabilidad penal individual - tanto en jurisdicciones internacionales como en la jurisdicción nacional - en que pueden incurrir funcionarias, funcionarios, exfuncionarias y exfuncionarios de las distintas agencias e instituciones del Estado mencionadas a lo largo de este documento. Sin embargo, el Grupo ha podido identificar a individuos cuyas contribuciones dentro del engranaje del Estado, podría generar su eventual responsabilidad penal individual tanto a nivel internacional como nacional. El Grupo recuerda que la eventual responsabilidad penal individual por los crímenes cometidos a través de actos u omisiones debe ser realizada a través de las autoridades competentes y en una investigación adicional.

VIII. Conclusiones

255. A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses se reportaban como solicitantes de asilo a nivel mundial. En todos los casos documentados por el Grupo de Expertos entre quienes decidieron abandonar Nicaragua, está presente algún elemento de los patrones

³⁷² Ver Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del 4 de diciembre de 1974, *Van Duyn v Home Office*, C-41/74, EU:C:1974:133, párr. 22.

³⁷³ A/HRC/52/CRP.5, párrs. 318.

de violaciones graves y abusos de los derechos humanos identificados por el Grupo en sus informes y documentos de sesión ampliados.

256. El ataque contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, incluye la pérdida de todo estatus y todos los derechos, incluyendo la nacionalidad y los registros de nacimiento y de vida familiar, así como la privación de los medios de subsistencia, tales como cuentas bancarias y otros bienes y derechos de pensión. Las violaciones cometidas contra estas personas, además, tienen repercusiones en un grupo mucho más amplio de familiares y personas cercanas a las personas opositoras, o percibidas como tales, incluidas sus niñas y niños, quienes también son víctimas de violaciones de los derechos humanos.

257. Todas estas violaciones han provocado, y siguen provocando, múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos de tal alcance que son imposibles de cuantificar, lo que demuestra la intención de las autoridades de incapacitar sin tregua a cualquier oposición a largo plazo.

Anexo – Organigrama

